

INSERCIONES

27-02-2013

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

El Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán, elevado a esta Cámara con media sanción del Senado Nacional, debe ser rechazado por violatorio de la Constitución Nacional y porque significa un retroceso para dilucidar el mayor ataque terrorista sufrido por nuestro país. Dudo que nos conduzca a la verdad y mucho menos a la justicia. En todo caso puede servir para otros propósitos, por ahora desconocidos.

Muchos nos preguntamos sobre el porqué de esta iniciativa y todo el abanico de subjetividades es posible. Sería muy provechoso saberlo. Por ello y dado nuestra responsabilidad para considerar este proyecto de ley, cabe debatir el para qué de este instrumento legal.

A mí y a muchos diputados no nos resulta indiferente la desazón que manifestaron los familiares ante el plenario de comisiones. Aquí nos reclamaron que rechazáramos este memorando por lesivo a los derechos de las víctimas y por la cesión de soberanía que ello constituye.

El Memorándum de Entendimiento entre la Argentina y la República Islámica de Irán, de aprobarse, se constituirá en un tratado con jerarquía superior a las leyes argentinas que estaría modificando.

No obstante, queda por debajo de la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos.

Se trata de un instrumento de política exterior que, por sus implicancias, compromete al Estado nacional. Su posterior denuncia dejará situaciones irreversibles.

Ello significaría un viraje en la política exterior no informado por el gobierno. Si existen motivaciones comerciales y de intercambio científico-militar, el gobierno debe comunicarlas, porque aquí no estamos ante la siempre discreta negociación, sino es la etapa de consumación de lo acordado que debe aprobarse o rechazarse. Si hay algo secreto es malo y si no hay nada más que estas carillas, sin anexos y las aclaratorias necesarias e indispensables, mucho más grave aún. Ningún país firma semejante acuerdo y si Irán lo hace es porque logró las garantías exculpatorias que siempre solicitó, hasta para tramitar los exhortos de nuestra justicia

Ante la Asamblea de las Naciones Unidas, la presidenta de la Nación abonó el concepto de política del Estado argentino. Lo afirmó al anunciar que el memorando con Irán debía ser consultado con los familiares del acto terrorista perpetrado en la AMIA y aprobado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Por lo visto, en esta sesión, acompañarán al oficialismo sus habituales aliados y todo el arco opositor votará en contra. Si se consuma la incorporación de un diputado, con licencia para asumir como jefe de Gabinete en Chubut y otra diputada, que renunció para ocupar un ministerio en Tucumán, estaríamos ante una maniobra ilegítima, con visos de ilegalidad por violar las Constituciones de sus respectivas provincias. Este escándalo institucional es un acto ilegítimo que hiere la autoridad moral de esta Cámara. Lejos de contarse con el consenso de las demás representaciones políticas en el Congreso, ni siquiera cuenta con la totalidad de la bancada oficialista dado que son varios los que se oponen.

Por cierto que el envío al Congreso no es una concesión del Poder Ejecutivo sino que ese recorrido es ineludible.

Una vez más el mensaje de la primera mandataria crea confusión al decir que no se cede soberanía. Cabe preguntarse si lo acontecido en nuestro territorio, juzgado bajo nuestra legislación pasa a ser tramitado con otra legislación: ¿qué es eso?

En el fondo, la presidenta, que fue diputada y senadora, no concibe al Congreso como un ámbito de debate, diálogo y consenso para fortalecer sus políticas, sino como un escollo que debe ser sobrepasado de cualquier modo, sin discusión ni aceptar aportes, extendiendo el estado de emergencia mientras repite que vivimos lo mejor de nuestros 200 años de historia.

Se catalogó al acuerdo como un "acuerdo histórico" y su endeble defensa, posteriormente se dijo es lo máximo que se puede con un régimen en el que no confiamos. En ese razonamiento, este memorando

se tramitará conforme a la buena fe de las partes.

Ante las comisiones del Congreso, el ministro de Relaciones Exteriores, no informó sobre motivos del cambio en el discurso denunciatorio contra Irán por no colaborar con la causa. La sobreactuación del ministro es un recurso tan repetido como su pobreza argumental.

Al elevar el memorando al Congreso, convocando a sesiones extraordinarias, mientras se dejan sin tratamiento cuestiones prioritarias, la presidenta de la República señaló que no se presta al tablero de ajedrez ni al juego geopolítico de otros. Es previsible el objetivo geopolítico de Irán y se percibe el venezolano desde el cambio de gobierno en EEUU. ¿Cuál es el objetivo geopolítico nuestro en este caso? ¿En aras del mismo se entrega una causa judicial en curso y nuestra legislación penal? ¿Qué hay detrás de este proyecto sometido a semejante trámite exprés?

Dejando de lado la presunción de aquella expresión de autodeterminación, que se contrasta con la irrelevancia de nuestro país en el escenario internacional, todas las conjeturas sobre la motivación de ese abrupto cambio de posición ante el desacreditado régimen teocrático y fundamentalista iraní, en todos los casos, parece incurso en iniciativas ajenas.

Errático, contradictorio e imprevisible manejo de los intereses nacionales en un mundo donde la previsibilidad, la respetabilidad de las palabras de sus gobernantes y la credibilidad en sus leyes e instituciones constituyen las bases de las relaciones estables y provechosas. Mientras nos enajenamos de países centrales que pueden aportarnos inversiones, nos parecemos a países cuestionados por la comunidad internacional y copiamos recetas del fracaso. En distintos organismos multilaterales, mientras los países centrales bloquean nuestras solicitudes y nos sancionan, Irán y Venezuela nos acompañan con su voto.

Con Venezuela e Irán compartimos los pináculos de inflación, de intolerancia, de cercenamiento de acceso a la información pública, de dificultades para el ejercicio periodístico y de profundización del populismo plebiscitario, con el uso abusivo e ilimitado del poder para impedir la alternancia, degradando la república que en los tres casos se manifiesta como sistema político. La nuestra es una república, la venezolana es una República Bolivariana y la de Irán una República Islámica y ello informa sobre su atadura, a la ley, a la ideología y a la religión que esos aditamentos implican. No obstante esa denominación, algo los asemeja en este tiempo, usan esas definiciones como cobertor de una estrategia de acumulación de poder. En nuestro caso se desconoce el imperio de la ley y coloca a una persona y a un grupo político en colisión con el marco normativo al que suponen debe estar supeditado a sus designios.

¿Estamos pagando aquellas solidaridades y lo que debemos a Venezuela o anticipándonos a nuestras necesidades para importar gas y petróleo?, a lo que nos condena nuestra política interna, donde se agitan divisiones y se foguea la confrontación que se proyecta a las fricciones externas. Esa forma de cohesionar el frente adicto con épica grandilocuente, fue y es ensayada sin medir consecuencias, como es usual por gobiernos autoritarios, ni evaluar los resultados de esos movimientos para distraer la atención de la agenda impostergable. La intentona de manipulación del lenguaje ya fue utilizada con la democratización de los medios para ampliar las voces, con la estatización de los fondos previsionales, la confiscación de Aerolíneas Argentinas, YPF y el escándalo de Ciccone.

La malvinización de la política argentina en el último año se inscribe en esa clave de construcción y retención de poder, aunque nos aleje de la recuperación de la soberanía sobre las islas australes y el mar circundante donde se depreda riqueza ictícola y se exploran cuencas hidrocarburíferas. Esto último puede generar derechos de terceros, controvertidos por la disputa, pero efectivos en tanto pueden generar lazos económicos, cada vez más amplios, que pesan a la hora de negociaciones con tantos actores y poderosos intereses en juego.

Los inmensos y promisorios recursos de hidrocarburos no convencionales de que disponemos y la imperiosa necesidad de no quedar rezagados en la innovación tecnológica, ahora que existen capitales disponibles para emprendimientos de magnitud, quedan trabados por ese modo de gobernar sin reglas ni certidumbres mínimas.

Los escasos volúmenes captados de inversión extranjera directa, cuando la mayoría de los países de la región los atraen para modificar sus estructuras productivas y modernizar su infraestructura; la imposibilidad de obtener financiamiento con bajas tasas; la interrupción de créditos de organismos financieros y la fuga de capitales domésticos, son el resultado previsible de los desatinos que desploman la inversión e impiden la creación de empleo genuino. Los niveles de pobreza y trabajo precario y la creciente inflación no son casuales ni fruto de conspiraciones del mundo que sólo se nos vino encima a nosotros, porque todos los latinoamericanos crecen a mayor velocidad y no padecen semejantes problemas. La Argentina lleva doce meses consecutivos de caída interanuales en la

inversión; diez meses consecutivos en caída de la construcción y desde hace varios años no se crea trabajo privado registrado. Aunque se demore su difusión, volveremos a tener déficit primario como no acontecía desde 1996. El déficit fiscal bordeará los \$ 55.000 millones, aún con el significativo aporte de la ANSES y del Banco Central cercano a \$ 30.000 millones. En los que va del año, las reservas del BCRA cayeron U\$S 2.000 millones, contra los U\$S 3.000 millones que descendieron el año pasado en virtud del cepo cambiario. Las importaciones de bienes de capital cayó 8 % en enero; la producción de petróleo disminuyó 4,3% el año pasado y la producción de gas cayó 3,7%. Las importaciones de energía en enero fueron el doble de igual mes de 2012, por encima de U\$S 700 millones. Pese a su baja calidad, importamos más de U\$S 500 millones de fuel oil a Venezuela que en su mayor parte se lo adquiere a otros. En esa curiosa triangulación pagamos por barril más de lo que cobramos por el fuel que exportamos. Se estima que nuestra deuda con Venezuela es de U\$S 2.000 millones y los negocios paralelos en esa relación generan demasiadas sospechas, como otras alrededor del destino final de la transferencia de tecnología nuclear. Nuestra reputación exige clarificar ese intercambio.

Venezuela e Irán tienen fenomenales reservas de hidrocarburos, el 17,9% de las reservas mundiales, que les permiten ciertos márgenes, cada vez más acotados por el peso del gasto público improductivo. Los precios del petróleo y las cuencas de Venezuela e Irán los constituyen en jugadores poderosos en ese estratégico mercado. La Argentina goza de un desperdiciado ciclo favorable de precios de la soja, pero la cuenta de importaciones de energía cada vez más voluminosa que obliga al cierre de importaciones de insumos industriales y al cepo en el mercado de divisas. La brecha cambiaria indica la distancia entre discurso y realidad y la reciente devaluación venezolana un espejo anticipatorio de cómo terminan estos extravíos irrazonables, en un ajuste que empobrece al conjunto y cristaliza las desigualdades que dicen combatir con sus epopeyas emancipadoras.

El "hacerse cargo" de los problemas, invocado en este caso judicial, no se observa en la lejanía de este gobierno ante la tragedia de Once, donde su responsabilidad es ineludible y en la que actualmente exhibe ante el desborde inflacionario, donde descarga en otros lo que le compete en materia fiscal, monetaria y cambiaria. El no comienzo de clases en las escuelas, la labilidad del sistema de salud y la inseguridad ciudadana, ponen en análisis las políticas y el modo en que se administra el aumento de los respectivos presupuestos, porque eso califica a un gobierno haciéndose cargo verdaderamente para resolver problemas acuciantes. Algo muy distinto es crear problemas y conflictos como metodología de poder, desplegando consignas para evitar que la sociedad comprenda y aborde los datos de la realidad. Siempre hay un discurso, una excusa y un enemigo a quien endilgarle culpas, pero también hay consecuencias.

En la audiencia que hoy se desarrolla en la Corte de Apelaciones de Nueva York (donde EEUU apoya la posición Argentina como amicus) donde todo parece complicado, en los pleitos ante organismos que integramos, en las severas objeciones sobre nuestro fraude estadístico, en las humillaciones padecidas por embargos y en las nulas solidaridades obtenidas, se exhibe el fruto de la pérdida de rumbo a que llevan las improvisaciones en nuestro relacionamiento en la interdependencia global. En la palestra internacional es donde se refleja con mayor nitidez el realismo que el ideologismo esconde para uso doméstico. Allí las cosas se calibran tal como son y acorde a ello se cosecha y paga. Las giras recientes parecen desvinculadas de un eje conductor y el desafecto del G-20 es cuanto menos un gesto gratuito, presidido seguramente por el pensamiento de una anticipada e irremediable decadencia de los países más poderosos. Mientras tanto exportamos menos y cerramos importaciones, autoinfringiéndonos daños a nuestro aparato productivo donde la balanza comercial industrial luce cada vez más deficitaria. Con quienes atizamos conflictos innecesarios, perdemos comercio exterior y ello lastima a sectores productores argentinos, porque en el mundo hay muchas oportunidades y se eligen las de menor riesgo.

La continuidad de objetivos y la flexibilidad para incorporar novedades, en las coordinadas internacionales otorgan seriedad y amplían los márgenes de autonomía en un mundo cambiante pero donde los que progresan pugnan por una inserción que sea ventajosa para sus intereses, que son permanentes y trascienden los cambios de gobierno.

Sea para limpiar esa mácula de rebeldía que pesa sobre Irán y sus funcionarios, para que puedan avanzar negociaciones iniciadas ayer en Almaty, Kazajistán, por las 5 potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China) más Alemania, con vistas al desarrollo nuclear de ese país o para contribuir al convulsivo tablero de Oriente Medio o para el retiro de tropas de Afganistán e Irak, ese dispositivo es materia de EEUU y la Unión Europea. Ellos, con los recaudos que les otorga su poder (entre otros el veto en el Consejo de Seguridad de la

ONU), intentan una estrategia de contención del programa nuclear. Esa negociación será prolongada, cuidadosa y con un final abierto por su complejidad e implicancias. Seguramente allí cada palabra será ponderada con más prudencia y precisión que las que tuvieron quienes formaron este Memorando, para que no haya interpretaciones abiertas y contradictorias. Cuando Irán componía el denominado "eje del mal" la Argentina arremetió y ahora, cuando trasciende una conversación creen habilitada una hipotética luz verde y la Argentina ofrece esta salida a Irán. No se me escapa que ni EEUU ni los países del G-20 hayan opinado sobre este convenio, pero no son pocas las voces de advertencia y reservas que se escuchan si se presta cuidadosa atención. Para la ley de EEUU y muchos países más, Irán es un estado terrorista y en el juicio celebrado en Alemania por los crímenes de disidentes kurdos en el bar Mykonos, fueron condenados altos funcionarios del gobierno de Irán. Recuerdo lo que pasó cuando Brasil hizo en 2009 aquel movimiento respecto del régimen Iraní, aun siendo un integrante de los emergentes nucleados en la sigla BRICS y llevar décadas de una política planificada y activa hacia África y Asia.

Si fuera para tender un puente sudamericano con esa conflictiva región, ese camino fue privilegiado por Venezuela y el bloque bolivariano, uno de cuyos componentes, Bolivia, hizo caso omiso al pedido de captura internacional que pesa sobre el ministro de Defensa de Irán, designado después de la orden emitida por unanimidad por Interpol. "El amigo Evo," como gusta decir la presidenta de la República, le permitió visitar esa tierra fronteriza sin ser detenido.

El saludable diálogo Sur-Sur y las relaciones con todos los países es un dato de madurez, que no obliga a adquirir conflictos gratuitos e inútilmente con temerarias improvisaciones basadas en cuestiones subjetivas y en lecturas incompletas y forzadas sobre lo que está pasando en el mundo y que no se sujeta a conveniencias para recibir aplausos en la platea de los fanáticos.

El discurso con lecciones sobre cómo se deben gobernar los países más adelantados, por cierto muchos de ellos en una prolongada crisis, pero con umbrales de desarrollo y equidad muy superiores a los nuestros, no es aconsejable y mucho menos redituable. En cualquier caso, nada sustituye a una diplomacia profesional con planteles capacitados de funcionarios y embajadores. Un registro de las designaciones en las representaciones externas y los movimientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, califican tanto como el cotejo entre los problemas resueltos y creados durante las últimas décadas.

Es notoria la improvisación que reina en nuestra política exterior, sometida a bandazos por afinidades pasajeras, teñidas de difusos parentescos ideológicos o frustraciones por ilusiones infundadas. Ya tuvimos ensayos similares y padecimos los costos de esa impostura. Recuerdo el reequipamiento con pertrechos y rezagos militares para una supuesta Tercera Guerra Mundial; las tareas sucias en Centroamérica buscando la condescendencia de EEUU para las ulteriores aventuras belicistas y el alineamiento automático ofreciendo arbitrar en el conflicto de Medio Oriente, por citar algunos delirios de grandeza. No entra en mi ponderación creer que se aspira a un protagonismo que se pierde por las razones permanentes que marcan su proyección. A un mal diagnóstico, impregnado de voluntarismo, le siguen pasos equivocados y sea cual fuere la intención, el mundo observa y toma nota, en este caso del acercamiento a un régimen aislado y repudiado por la comunidad internacional cuyo gobierno termina su mandato a mediados del corriente año.

Aquellos y otros supuestos falsos, sobre los que se diseñó la política externa ocasionaron enormes costos de toda índole, comenzando por el prestigio que siempre es un valor a preservar. En un creciente aislamiento y con problemas abiertos con nuestros vecinos, cabe preguntarse cuál es el rumbo de nuestra política externa y para que objetivos nacionales se ejecuta.

La ausencia de visitantes extranjeros, los problemas suscitados en el Mercosur, las exóticas giras y las humillaciones padecidas en los últimos años informan que no hay diseño de política exterior para intereses permanentes de la Nación sino alineamientos pasajeros por cercanías y distancias caprichosas con quienes tenemos intereses convergentes. ¿Cómo se explica el doble rasero para suspender del Mercosur a Paraguay y aceptar la irregular situación de la Presidencia en Venezuela, tan veloz en el primer caso y tan condescendiente en el segundo? La no injerencia en asuntos internos y la cláusula democrática son componentes que deben aplicarse sin mirar el color partidario porque reglan la relación de Estados soberanos.

Si queremos ser serios y tener una política exterior acorde a objetivos nacionales, el gobierno debe anunciarlo al país y procurar enriquecerla para darle continuidad porque ella madura en el mediano y largo plazo.

Nada de lo conocido obliga a esta celeridad cuando para ser operativo de ser aprobado por el Parlamento de Irán que no comprometió plazos para tratarlo. Es probable que lo traten pronto porque,

como lo destacó la prensa oficial de Teherán, está " estrictamente en línea con la posición diplomática iraní".

Está claro que para Irán es un logro y para la Argentina un peligroso derrotero.

Las diferentes interpretaciones sobre el texto firmado en Etiopía que hacemos oficialistas, opositores y expertos en nuestro país y las que se hacen en Irán desmintiendo a nuestro canciller, indican que no se puede aprobar lo que puede ser una cosa y lo contrario. ¿Quién resuelve una diferencia de interpretación sobre el cumplimiento del futuro tratado para darlo como caído, según el ministro de RREE? Sea cual fuere la intención de cada firmante, en caso de controversia sólo tiene validez lo escrito y sobre ello se basarán los llamados a interpretarlo, más allá de lo que dicen estos días nuestros funcionarios para salir del atolladero.

No cumpliríamos con nuestras funciones si aprobáramos un tratado donde está clara la conveniencia de Irán y no aparece ninguna ventaja para la causa que se tramita en el país porque el hecho sucedió en nuestro territorio.

Para no conjeturar, los hechos: se crea una Comisión de la Verdad, antigua pretensión de Irán para relativizar a la Justicia argentina; Irán niega su participación en el atentado; elude el pedido de captura sobre cinco de sus funcionarios y nos ofrece un proceso bajo su legislación, donde no se garantiza la aplicación de nuestro Código Procesal. El memorando estipula que no se pondrán en riesgo los derechos de las personas garantizados por ley. Irán garantiza constitucionalmente la inmunidad de sus habitantes para declarar ante otra ley que no sea la suya.

Este tratado desmerecerá toda reivindicación futura, por lo contradictorio de las palabras empeñadas en múltiples mensajes de los presidentes Kirchner y Fernández de Kirchner.

Por su ambigüedad, inexactitudes, por la prórroga de jurisdicción y el desconocimiento de la legislación procesal vigente, este memorando no debe ser transformado en tratado, porque agravaría lo que ya tendrá consecuencias al informarse a Interpol donde un ministro, un ex ministro, dos diplomáticos y un ex jefe de la Guardia Revolucionaria, entre ellos dos posibles candidatos presidenciales, tienen notificación roja internacional. La orden de captura puede ser levantada a pedido del juez interviniente y por la propia Interpol. El motivo de la orden roja es la no comparecencia y el texto no lo garantiza, pero si se dan, con ello desaparece la razón de su existencia. Lo que sí garantiza es que Irán se somete al proceso, dialoga, acuerda con quien lo acusa, o sea blanquea su irregular situación actual y libera la interdicción que pesa sobre sus líderes para desplazarse por el mundo, donde Irán también está aislado por su inobservancia en materia de derechos humanos y denuncias sobre irregularidades electorales. ¿Por qué si son ocho los imputados iraníes en la causa, sólo se interrogará a cinco que son sobre los que pesa esa alerta roja? Es obvio que es para sacarlos de ese confinamiento, aunque muchos se desplazan por diferentes lugares lo hacen con ese peligro, de lo contrario el interrogatorio debería ser a todos los imputados por el juez. Lo único que es operativo desde la sola firma del memorando, aún sin ser aprobado por los órganos de ambos países, es la comunicación a Interpol. La Argentina pierde su principal herramienta de presión y negociación, porque sin alerta roja, ¿qué interés puede tener Irán en dilucidar el caso?

¿Por qué asumir el riesgo de la posible caída de las notificaciones rojas, aun antes de aprobar y poner en marcha este proceso?

El traslado a Interpol de este memorándum indica claramente el objetivo de Irán y la claudicación de la Argentina para perseguir a los culpables, detenerlos y juzgarlos conforme a nuestra ley. Repito, es la única cláusula del memorando operativa al firmarse, aún antes de la aprobación del mismo y antes de que tomásemos conocimiento, los legisladores y el pueblo quienes fuimos notificados por Twitter. Es obvio que el pedido de captura lo puede solicitar el Juez de la causa, pero sí puestos a derecho, con una simple presentación para fijar domicilio, Irán se presenta ante Interpol será éste quien decida de oficio si levanta la circular y la cuestión quedará en terceras manos. Algo de ello ocurrió ante la cuestionada investigación del destituido juez Juan José Galeano.

¿Hace cinco años Interpol consideró válidas las pruebas presentadas que ahora nosotros mismos consideramos insuficientes para saber la verdad? ¿Con esas mismas pruebas los presidentes Kirchner y Fernández de Kirchner hicieron encendidos discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ahora esas pruebas serán revisadas por una comisión donde la mayoría de sus componentes deben ser elegidos por Irán, el acusado? Al margen de la confusión que se crea sobre la cantidad de miembros, según las versiones en inglés y castellano, el quinto miembro debe ser un jurista a quien Irán conceptúe con alto estándar moral.

No habrá indagatoria y el interrogatorio, subordinado a la ley iraní y conducido por el juez iraní, con o sin asistencia de los inculcados, no tendría el efecto para poder detenerlos y mucho menos de

juzgarlos, porque no existe tratado de extradición entre ambos países. El juez iraní no tendrá acusación porque considera que Irán no tuvo nada que ver; la comisión tendrá que ponderar la validez de la investigación y el juez y el fiscal argentinos no tienen garantizado poder indagar en los términos de nuestra legislación. Es incomprensible que el oficialismo se niegue a que el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman puedan informar y aclarar ante las comisiones parlamentarias. Si se busca optimizar el procedimiento esa consulta hubiera sido muy pertinente. Hace días he pedido al Consejo de la Magistratura que cite a ambos magistrados para garantizar su independencia, porque es una función que se debe ejercer para defender a nuestros jueces. Es inconcebible que no sepamos de qué seguridades gozarán ellos al pisar territorio de Irán, donde es aventurado que el canciller Héctor Timerman pueda garantizar todo lo que se comprometió, pero no figura en lo firmado hace 30 días en Addis Abeba, negociado durante cerca de dos años y desmentido, aquí y en exterior, cuando el periodista argentino Pepe Eliashev lo informó sobre la reunión celebrada en Aleppo, Siria, motivando entonces una furibunda descalificación y ninguna disculpa posterior

Todo ello porque según el memorando aquí entran otros jueces, el Iraní y los cinco desconocidos jueces de la llamada Comisión de la Verdad, que debe sancionar sus normas y procedimientos. Se estipula de ambos países tomarán en cuenta las recomendaciones de la comisión. Se dice que su recomendación no es vinculante, lo que habilita a preguntarse ¿entonces para qué sirve? No obstante lo dicho vincula, porque hará conocer el expediente bajo secreto a los denunciados, todo lo colectado por organismos nacionales y extranjeros será puesto a su disposición. La paradoja es notable, mientras esos juristas conocerán esa información sensible, no existe ninguna voluntad de abrir los archivos secretos para investigar la conexión local sin cuya colaboración hubiera sido muy improbable el atentado. Esto es contradictorio con el decreto del presidente Néstor Kirchner donde el Estado asumió su responsabilidad en el encubrimiento. Recuerdo que la Argentina fue víctima de un ataque terrorista y dos veces, en 1992 en la embajada de Israel y dos años después en la mutual de la comunidad judía en el país. La conexión interna es la más contaminada y menos profundizada. Estamos próximos a un juicio en nuestros tribunales que puede avanzar en esa pista. ¿Ayuda para ello este proyecto? ¿No es necesario ello para saber la verdad y hacer justicia? ¿Por qué no postergar este memorando hasta tener más certezas de las que se nos informó en unas pocas horas donde quedan muchas preguntas sin formular y muchos interrogantes sin contestar? El ministro no agregó más que deseos y anhelos, aunque prometiera quedarse hasta la medianoche ofuscado por un hecho irrefutable y muy sensible: el memorando con un régimen negacionista del Holocausto se firmó en una fecha tan infausta como la del tratamiento para sancionar esta ley en este Parlamento. Casualidades evitables para quienes tienen semejantes responsabilidades.

Por otra parte, la Comisión de la Verdad emitirá un informe y podrá dar una opinión distinta a la del juez argentino, única verdad según nuestras leyes y al expedirse puede poner en cuestión la investigación.

Nada asegura que la recomendación sea posterior al interrogatorio, porque no lo dice lo firmado, como tampoco otros compromisos que el canciller Héctor Timerman asumió ante la comunidad judía. Puede hacerlo antes y dejar sin efecto el interrogatorio. ¿Sus recomendaciones para proceder en el marco de la ley y las regulaciones de ambas partes se refieren a la ley argentina, de Irán y son ellas compatibles? En el punto tercero se consigna que la comisión consultará a las partes a fin de completar la información. ¿Qué investigación judicial se hizo en Irán y qué tipo de información válida puede ingresar por fuera del proceso sustanciado en la Argentina? Lo mismo cabe para analizar otro punto donde se dice que cada parte tiene el derecho de presentar nueva documentación ¿será para que Irán acuse a otros?

Ni siquiera existe seguridad de que el juez y el fiscal sean aceptados por Irán.

Ante esa comisión, es la Justicia argentina la que queda bajo sospecha, a la que se le revisarán su prueba y es improbable que sean llevados al banquillo los acusados, por lo menos el ministro de Defensa, como lo anticipó el régimen iraní. Se dice que con esa comisión la investigación logra un aval internacional que por cierto ya lo tiene por las actuaciones de Interpol. ¿Por qué entonces no se informó a la ONU en el marco de cuya asamblea se inició este diálogo?

Finalmente, no es mediante la diplomacia que se sustancia una causa judicial. Con las apreciaciones antedichas, no debemos perder de vista que se trata de una causa judicial sobre un atentado terrorista que nuestra Justicia adjudica a un Estado, Irán cuyos funcionarios están implicados.

Hemos sido víctimas de un ataque contra nuestra soberanía, organizado según la Justicia argentina por un país que niega haberlo hecho y desvía la responsabilidad en Israel, país que pretende hacer desaparecer.

Irán dice que no hay pruebas suficientes en el expediente y el kirchnerismo, que creó la Fiscalía Especial y con esas pruebas denunció ante la ONU y logró el respaldo unánime del Comité de Interpol, ahora descree de esas pruebas porque las somete a la "revisión detallada de la evidencia relativa" de una Comisión de la Verdad que puede desecharlas. ¿Qué pasa si la Comisión de la Verdad no encuentra evidencias y deslegitima lo actuado por la Justicia argentina?

La anterior investigación viciada y la actual, elogiada por el actual gobierno, parecen según este acuerdo conducir al mismo lugar, la impunidad. Ello es la mayor señal de debilidad de nuestras instituciones para contrarrestar al delito penalizándolo y en este caso, para ofrecer recaudos de defender a nuestro pueblo con la ley. Una ventana abierta a la vulnerabilidad.

El atentado a la AMIA donde hace 19 años se bombardeó a población civil, puede ser considerado como crimen de lesa humanidad. De nada sirve la convenida conversación con los imputados si no hay juicio y castigo. Aunque se avanzara con lo que se considere otra versión de la verdad, este procedimiento no garantiza la justicia sino que la puede entorpecer.

La sola lectura de 200.000 fojas demorará la revisión de la evidencia acordada.

Lejos de destrabar la causa, este tratado puede significar un retroceso en lo logrado porque una Comisión de la Verdad analizará la causa, valorará la prueba colectada y la pertinencia de interrogar a los imputados, que para declarar deberán contar con autorización de un juez iraní, bajo procedimiento estipulado por esa comisión que no sabemos por quiénes estará integrada ni existen plazos para constituirla ni para dictaminar. Es claramente una comisión especial, conformada con posterioridad al hecho que cambia el juez natural, prohibido por nuestro ordenamiento constitucional.

El Código vigente no prevé la existencia de una comisión, que puede preguntar y fue creada con posterioridad al hecho y en medio del proceso. Para salvar este impedimento, se debe reformar el Código Procesal Penal, o ¿este tratado implica una reforma implícita?

La Comisión de la Verdad es un agravio para la verdad de nuestra Justicia y puede cerrar el proceso.

El posterior desarrollo del proceso en nuestro país, sin testimonios obtenidos bajo nuestra legislación, quedaría expuesto a posteriores nulidades por ese apartamiento procesal, dado que en el interrogatorio habrá otras autoridades además del juez, el fiscal, los imputados y la defensa.

El único argumento justificatorio parte de la paralización de esta causa que lleva 19 años, plagada de contrariedades, reflatada con una fiscalía especial, sobre cuya investigación existe un absoluto consenso aprobatorio. Tanto no está paralizada que un dirigente de la comunidad judía en la Argentina informó que el fiscal Alberto Nisman se apresta a presentar un nuevo informe, con más pruebas y conexión local. Quienes han tenido acceso a él, sostienen que en el expediente hay material probatorio muy contundente sobre la responsabilidad de Irán en el atentado que costó 85 vidas de ciudadanos argentinos. La causa judicial no está paralizada sino interferida por el gobierno de Irán que rechaza la inculpación y por su ley impide que sus habitantes comparezcan y sean juzgados por ley extranjera. Tan grave es para Irán el delito de hacerlo que el fiscal Nisman tiene orden captura por la imputación a funcionarios iraníes.

Para avanzar en el juzgamiento y tratándose de crímenes de lesa humanidad, podríamos analizar el juzgamiento en rebeldía e incorporarlos para aquellos casos en nuestro Código Penal, aunque ello no podría ser aplicado en esta investigación en curso.

La Constitución Nacional prohíbe al Poder Ejecutivo actuar en causas judiciales en trámite y este Congreso no puede ser cómplice al modificar el curso de ellas. El artículo 109 de la C.N. se basa en la división de poderes de la República. La territorialidad figura en la legislación penal. El artículo 26 prohíbe al Congreso la concesión de facultades extraordinarias que este caso supone. Es una ilicitud que seguramente será apelada ante la Corte Suprema de Justicia y otro baldón para quien debe sancionar leyes acorde a nuestra Ley Fundamental.

Lo ilegítimo no cambia de naturaleza con una votación porque toda ley debe sujetarse al control de constitucionalidad y así espero ocurra con este acuerdo político que afecta a nuestras instituciones. Con todo lo que se necesita para optimizar el acceso al derecho de justicia, la impunidad penal de que gozan los funcionarios es una injuria al conjunto. Allí está el centro de esta cuestión, el encubrimiento al poder. De lo contrario no trabarían el acceso a la información pública y no habrían desplazado a un juez, un fiscal y un procurador general por investigar al vicepresidente. La actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, dijo ayer que "la Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados." El gobierno kirchnerista lleva diez años y durante ese período se designaron el 54 % de los jueces. El juez Norberto Oyarbide es defendido por el kirchnerismo mientras exculpa y sobresee funcionarios, mientras el Poder Ejecutivo incumple sentencias de la Corte Suprema. ¿A esa ilegitimidad se refiere?

Por ello comparto la reinstalación de la normalidad institucional, en los términos expresados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El doctor Ricardo Lorenzetti dijo lo obvio: "La Corte no gobierna. Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino que hemos dicho lo que es contrario a la Constitución o hemos afirmado lo que la Constitución quiere que se haga."

De ser ley, este tratado también debe pasar por ese control.

Son conceptos del siglo XVIII, puestos en cuestión por quienes proponen democratizar la Justicia, que ejerce un contrapoder para resguardar a las minorías e impedir que mayorías circunstanciales arrasen con el sistema político vigente si se les ocurriera.

Democratizar, para el kirchnerismo, parece ser sinónimo de domesticar, proteger a quienes fallan conforme a sus designios y presionar y desplazar a quienes fallan con imparcialidad, imponiendo límites al poder de turno. Las inadmisibles recusaciones de magistrados, el vaciamiento de un fuero judicial y la rémora para conformar el Tribunal de Ética Pública, ya creado por ley, verifican la mentira del discurso oficial.

El mismo razonamiento cabe para el libre ejercicio del periodismo y la sustentabilidad de medios de comunicación independientes que critican al poder e informan lo que se quiere ocultar. Ambos limitan los excesos y abusos y los someten a las leyes vigentes y al registro de la opinión pública.

La República y la democracia los necesitan para no deslizarnos en la pendiente del autoritarismo. Se han registrado más de un centenar de agresiones y amenazas a medios y periodistas.

Cada retroceso en la división de poderes y en la libertad de expresión es un recorte de derechos y garantías. El boicot sobre la publicidad privada en los medios independientes es una ilegal presión que violenta la ley, la Constitución Nacional y el Tratado Internacional de Derechos Humanos. Esa censura muestra la debilidad y la prepotencia que desmerece todo el relato democratizador, utilizado para imponer la ley de medios y ahora para derrumbar el edificio judicial de la República.

Se conocen 15 inobservancias al articulado vigente y no cuestionado de la Ley de Medios y la pauta de publicidad oficial creció 1.770 % desde que asumió el kirchnerismo.

Estaríamos desplazándonos hacia una democracia plebiscitaria, marco que el populismo requiere para evadir límites y controles. A ese cambio de sistema político y al "vamos por todo," recortando derechos y libertades, apuntan estas iniciativas y el mensaje que pretender colocar a quienes nos oponemos como defensores de las mal denominadas corporaciones, porque tanto la Justicia como la prensa libre contribuyen al bien común. Ese es el fin último del liderazgo que como el poder constituyen medios para alcanzarlos. No es esa prevalencia la que caracteriza a los regímenes populistas y sería bueno saber si el pueblo argentino brinda consentimiento a esa alteración, maquillada con ideales principistas que se contraponen con lo que se hace para afianzarlos.

Debemos resistir esa embestida contra la Justicia y la libertad de expresión destinada a lograr la perpetuidad en el poder y la impunidad. Que ello se esconda hasta que pasen las elecciones legislativas es una maniobra y la oposición debe saberlo al momento de diseñar su propuesta alternativa, porque está en juego la democracia republicana.

Esta iniciativa, que se pretende aprobar con una voluntad sin límites, es repudiada por los familiares de las víctimas y rechazada por la mayoría de la población. Si sancionamos esta ley, la querrela probablemente lo apelará ante la Corte Suprema de Justicia y seguramente recurrirá ante las cortes internacionales. ¿Estaremos entonces ante otra épica kirchnerista contra la Justicia nacional y ante la Comisión Interamericana que Venezuela y Ecuador quieren destruir? Cada pueblo tiene el derecho de elegir su modo de vivir y su forma de gobierno, pero forma parte de los que nos queremos jueces encarcelados y medios de comunicación clausurados como acontece en los países antes mencionados y con los que parece alinearnos nuestro gobierno.

Mal haríamos los representantes en contravenir la opinión de los familiares y en nada contribuiríamos con su pedido de justicia aprobando lo que despierta tantas dudas. Mal hace el oficialismo en insistir contra todo sin explicar mejor o intentar incluir en el proyecto lo que desde tantas miradas se le sugiere.

Estamos a tiempo para evitar cometer un grave error, que sería devastador, porque preanuncia futuros caminos tendientes a alterar aún más nuestras pautas de convivencia en paz.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ALONSO (L.)

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorandum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Iran, Tehran Times

Argentina,
and truth
diplomacy

Iran, Tehran Times

Argentina,
and truth
diplomacy

In a world shattered by mistrust, threats, and unilateralism, Iran and Argentina have agreed to discover the truth about the AMIA case. To this effect, the foreign ministers of Iran and Argentina signed a memorandum of understanding on January 27, 2013 calling for the establishment of a Truth Commission composed of five independent lawyers. One should not fail to appreciate the efforts made by both foreign ministers to show the world that in the midst of world turbulence it is still possible to settle disputes between countries through understanding and just means on a mutually agreed basis. Over the past 19 years, the Iranian authorities have constantly insisted that the truth about this case should be discovered because the original case was upheld by a corrupt and partial judge. Iran not only was not afraid of the truth being discovered but was also insisting that the entire world should know the truth about this case. Therefore, this agreement is strictly in line with the Iranian diplomatic position.

This is why the MOU states that the commissioners "should conduct a thorough review of the evidence related to each accused person" (Article 3). The commissioners, after having reviewed the evidence, "will express views and issue a report" also containing recommendations in the "framework of laws and regulations of both parties" (Article 4). We hope that through this report, light will be shed on the dark aspects of this case and we will finally find out who was really behind this terrorist attack, or at least understand against whom false accusations were made without any hard evidence for all these years.

If independent lawyers discover the truth, it would benefit Argentina, too, because knowing the truth is the prerequisite for justice and finding out that the investigation was following wrong leads would help to finally put the course of justice back on the right track. Argentina also may understand that in such cases, one should first look into his own house for clues.

The MOU also provides the possibility of questioning the accused persons at a meeting that will be held in Tehran with the participation of Iranian and Argentine judicial authorities, with the commissioners also present (Article 5). Some commentators have raised the concern that the

executive power may have exceeded its limits and interfered with judicial issues by agreeing on this issue or that somehow this act may violate the rights of individuals.

For several reasons, we don't believe that the law or the rights of individuals have been violated. First of all, if the report shows -- and we are sure it will -- a lack of evidence for the accusations against innocent persons, they should be compensated, and by virtue of the MOU there is no need anymore for questioning these people because both countries have agreed that "they will take into account the recommendations [of the commissioners] in their future

Maria In
Traoucl:n Públi

t.1a1. To. XVII Fe
Insoip. C.T.P.

actions~' (Article 4).

This meeting cannot be held until the report of the commission is issued. Secondly, as the meeting will take place in Iranian territory, the law of Iran will prevail, and an Iranian judge shall preside over the meeting, but since the persons have not been charged by the Iranian judge, he will not be permitted to question them. Finally, it is clear that our diplomacy has taken into account the rights of individuals while negotiating this MOU.

This is why it reads "nothing in this agreement shall jeopardize the rights of individuals granted to them by law" (Article 8). According to Iranian law and the Iranian Constitution, Iranian nationals can only be summoned and questioned by a competent Iranian court based on firm evidence. By the same token, this MOU has created no obligation for the persons to attend this meeting, and they will have the right to decide to attend or not through their own free choice .

. As we see, the whole process devised by our diplomats more than anything else focuses on finding the truth. And that is the fact which our country has been insisting on about this case and other similar cases for all these years -- namely that the United States and the Zionist regime have been manipulating corrupt judges and weak politicians to serve their illegitimate political interests under the disguise of justice.

We hope the legislatures of both countries will soon ratify this MOU in order to pave the way for the truth to be discovered and justice to be served.

<http://www.tehrantimes.com/component/content/article/105380>

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ARENA

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Desde el año 2006, el gobierno nacional ha mantenido una política externa coherente con respecto al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la cual ha confluído inevitablemente en este punto: la negociación con Irán.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, y particularmente la gestión de la Cancillería, han realizado un largo esfuerzo para lograr interrogar a los implicados en el atentado de la AMIA, y es por eso que es vital la aprobación del presente memorándum.

Ahora bien, en los últimos días el debate se ha centrado en dos ejes: los tecnicismos jurídicos con respecto al memorándum y la implicancia geopolítica de entablar una negociación con Irán. En mi opinión, nos hemos alejado del centro de este debate: encontrar a los culpables de la muerte de 85 personas como consecuencia del peor ataque terrorista de la historia de nuestro país.

Para la causa criminal, este memorándum es determinante. En primer lugar, por el estado de la causa, la cual ha tenido dos enemigos principales: por un lado, la complicidad o impericia de anteriores gobiernos y funcionarios, que han generado trabas constantes a la búsqueda de justicia; y por otro, el tiempo, ya que 19 años parece ser demasiado para lograr avances en una causa de tal magnitud, siguiendo los caminos que se habían propuesto hasta el momento.

Creo que en este punto es evidente que la aprobación del memorándum no es solamente una buena opción para avanzar en la causa sino que es la única opción concreta para hacerlo. Por lo tanto, debiendo tomar postura ante la disyuntiva de avanzar con este memorándum o no hacer nada, elegimos el memorándum.

Ya explicada la necesidad de este documento, es preciso analizar sus consecuencias: ¿cuáles son los posibles resultados de este proceso? ¿Existen riesgos que puedan comprometer los avances hechos hasta el momento?

Una vez aprobado el tratado en ambos países y constituida la Comisión de la Verdad, la cual estará compuesta por juristas internacionales que analizarán toda la documentación aportada por las autoridades judiciales de la Argentina y la República Islámica de Irán con el fin de realizar, luego de las audiencias, un informe no vinculante a los países signatarios del acuerdo, la primer posibilidad que surge es la cooperación de Irán.

Antes de avanzar sobre este argumento, me gustaría realizar una aclaración sobre la comisión: su rol es emitir un informe no vinculante con recomendaciones a ambos Estados. Desde ningún concepto la comisión puede intervenir en la causa o en el proceso judicial. El beneficio de contar con la comisión, es que prestigiosos juristas oficiarán como testigos en las declaraciones indagatorias, aportándoles legitimidad.

En este caso, podemos asumir que los imputados se presenten a declarar ante el juez y el fiscal argentinos, siguiendo los procedimientos que el juez determine, y una vez conseguidas estas declaraciones, se podrá avanzar en la causa penal por primera vez en diecinueve años, abriéndose la posibilidad de condenar a los verdaderos culpables del atentado. Como explica Amnistía Internacional en un documento del 21 de febrero, en caso de que se encuentre evidencia concreta, “Irán debe garantizar el cumplimiento de los pedidos de extradición, a menos que decida investigar el caso a través de su propio sistema judicial, en un juicio imparcial que no contemple la posibilidad de pena de muerte. Así surge del deber de cooperar en el arresto, extradición y castigo de personas acusadas por crímenes de derecho internacional o graves violaciones a los derechos humanos.”

Ahora pues, en el peor de los casos, como plantea la oposición, la República Islámica de Irán puede optar por no cooperar y no presentar a los imputados para declaración indagatoria. Ante esta situación, el Estado argentino habrá obtenido evidencia firme que pruebe el involucramiento de Irán en el atentado, y contará así con nuevas herramientas para presentarse ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

En conclusión, cualquiera sea el resultado que arroje la Comisión de la Verdad, la Argentina se encontrará en una posición beneficiosa por primera vez desde el inicio de la causa en 1994, ya que podrá entender si Irán estuvo involucrado o no en el atentado, habiendo sido este memorándum el puntapié inicial para el logro de tal objetivo.

En cuanto a los potenciales riesgos, creo que el principal argumento que se ha escuchado por parte de la oposición, al margen de argumentos de carácter geopolítico que, como dije anteriormente, no son importantes considerando que el centro de este debate debe ser siempre la causa judicial, es el argumento de la caída de las alertas rojas.

Sobre este tema es preciso recordar que la función de las alertas rojas, obtenidas a partir de la gestión del presidente Kirchner, es la de capturar a los imputados para someterlos a declaración indagatoria. Por lo tanto, la presente comisión estaría alcanzando el objetivo que Interpol no ha podido cumplir desde hace ya siete años. Ahora bien, luego de la indagatoria, si existe evidencia suficiente el juez puede procesar a los imputados con prisión preventiva, ante lo cual, las alertas rojas continúan vigentes.

Señor presidente: es evidente que el presente memorándum es la única alternativa de avance concreto para la causa de los últimos 19 años. Así también, está claro que, aunque existen distintos matices, sea cual sea la actitud del gobierno iraní, la República Argentina saldrá beneficiada de esta negociación, la

cual bajo ningún concepto pone en riesgo los avances realizados por la justicia argentina y los familiares y amigos de las víctimas en los últimos años.

Por lo expuesto anteriormente, y porque creo que esta es la mejor opción para alcanzar verdad y justicia para las víctimas de la AMIA, mi voto es afirmativo.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BARBIERI

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Para comenzar esta exposición, me parece oportuno dejar en claro que cuando hablamos de Irán, tenemos que diferenciar a su pueblo de algunos de sus dirigentes, y no caer en meras simplificaciones. Cuando nos referimos a un pueblo debemos realizarlo con todo el respeto que cualquier nación del mundo merece, porque el análisis que se haga debe estar desprendido de una mirada etnocéntrica, que tiende desde la visión cultural en la que estamos inmersos, a descalificar o juzgar negativamente elementos que pertenecen a otra cultura, atravesada por las complejidades de la historia y de las identidades.

Digo esto, porque creo, que aquí el problema no es lo que hace Irán con su política exterior, sino lo que hacemos los argentinos con nuestro país, con nuestras instituciones y con nuestro sentido de justicia. Este Congreso de la Nación, tiene la obligación de discutir qué es lo que pretende el gobierno de la República para sus instituciones y su pueblo.

En ese marco de ideas, la propuesta que hoy aquí se pretende que se apruebe contiene innegables violaciones al orden constitucional y al Estado de derecho argentino.

La intromisión del Poder Ejecutivo en las funciones judiciales claramente establecidas en la Constitución resulta inaceptable, como también la grosera transgresión del principio del debido proceso (art. 18 CN), al crear una “comisión especial” que emitirá dictamen, que se encuadra por fuera de la consagrada garantía de juez natural, o la violación al principio de la normativa penal argentina, donde los hechos cometidos en el territorio nacional serán aquí juzgados (art. 1 Código Penal).

Ante estas violaciones, renunciadas expresas a la competencia jurisdiccional y al ejercicio de la plena soberanía del estado, debiéramos preguntarnos si declinar a realizar justicia no implica en realidad aceptar que somos incapaces de obtenerla, poniendo sobre la mesa la poca voluntad de cumplir con las funciones elementales de un Estado soberano.

Ahora bien, si la Nación Argentina renuncia a ejercer justicia soberana, ¿qué se puede esperar para las víctimas? ¿Qué lugar les asignamos a los que han sufrido en carne propia la tragedia?...

Algunos sostienen que, en realidad, esta maniobra forma parte de un giro de la política exterior argentina que intenta colocar a nuestro país en línea con otros bloques mundiales. Si esto es así, yo me pregunto: ¿dónde quedó la idea de la presidenta de la Nación cuando postulaba que jamás permitiría que la tragedia de la AMIA sea jugada como pieza de ajedrez en el tablero geopolítico mundial?

Otra vez, me interrogo, si finalmente es así, más allá de las discusiones de orden político que se puedan generar por estos nuevos alineamientos, ¿Qué lugar ocupan la víctimas? ...¿qué valor les damos a esas muertes?...

El interrogante resulta oportuno sobre todo en estos días, en que asistimos al aniversario de la terrible tragedia de Once... Como allí, aquí también aparece la formidable incapacidad del Estado para encontrar respuestas eficientes, rápidas y humanas...

Como allí, aquí también se oculta con cinismo el verdadero sentido de la búsqueda de justicia, en pos de objetivos coyunturales, ya sea para negociaciones poco claras o para evitar responsabilidades...

Pero cuidado..., advierto, si todo se transforma en objeto de disputa y transacción política, incluso el dolor, la muerte, la dignidad y la justicia;... y las víctimas directas e indirectas son negadas, usadas y maltratadas,... es que comenzamos a transitar por un camino, en el que lo que importa muy poco es la vida.... Y resultará trampa,... porque si es así, sólo nos queda esperar para nosotros mismos ser parte de esa misma tragedia.

Confío que tengamos la dignidad de construir algo distinto.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BENEDETTI

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Pasaron 19 años de impunidad por el atentado de la AMIA, 9 de ellos recorridos por el gobierno del presidente Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, 6 por el gobierno de Carlos Menem. Quince años de gobiernos peronistas que pretenden adueñarse de las causas de defensa de los derechos humanos y de la defensa de la verdad y de la justicia, de los valores democráticos.

Hoy, sin embargo, y una vez más, los discursos oficialistas pretenden imponernos una decisión política arbitraria, conflictiva y con imponderables consecuencias para el pueblo argentino, acusando a quienes no estamos de acuerdo con el Memorándum de Entendimiento firmado por el gobierno argentino y el de la República Islámica de Irán, a quienes no coincidimos con la estrategia, fundamentos y metodología, de ser funcionales a los que no quieren que se esclarezca el caso AMIA. Pretenden convencernos de que este memorándum es un camino frente a la situación de “estancamiento” de la causa, en franca posición de desprestigiar e ignorar la acción realizada por la Justicia argentina, específicamente la tarea del fiscal Alberto Nisman, y la de la Unidad Fiscal Especial AMIA que él preside. (Unidad que se destaca por su estructura, tal vez la más relevante en el Ministerio Público). Avala esta afirmación el reconocimiento por parte del mismo canciller argentino de haber firmado el acuerdo sin consultar previamente al fiscal de la causa.

Pero lo más grave del mensaje a familiares de las víctimas, a sobrevivientes, al pueblo argentino en su conjunto y a la comunidad internacional es que en nuestro país la Justicia argentina no garantiza llegar a la verdad y por consecuencia es necesario crear una Comisión de la Verdad, independiente de la Justicia, paralela a la Justicia.

Pasaron 19 años de aquel trágico 18 de julio en que la noticia del atentado a la AMIA conmocionó a todos los argentinos y al mundo democrático.

Pasaron 19 años de injusticia y de interrogantes en la causa AMIA.

Hoy la presidente de la Argentina y su vocero, el canciller Timerman, pretenden imponernos un Memorándum de Entendimiento entre la República Islámica de Irán y nuestro país con el falso relato de abrir una instancia de verdad y justicia para las 85 víctimas y los centenares de argentinos afectados por el monstruoso atentado.

Una vez más se intenta desvalorizar a la Justicia argentina y apostar y confiar en una supuesta disposición y apertura del gobierno iraní, defensor del terrorismo de Estado, que niega el Holocausto y es repudiado internacionalmente por los ultrajes a los derechos humanos.

Una vez más los mantos de impunidad con las conexiones internas en el caso AMIA son extendidos por el gobierno argentino, que en su oportunidad por el decreto 812 aceptó incluso el encubrimiento y la responsabilidad del Estado argentino en el atentado y dispuso una serie de medidas para su esclarecimiento.

Fue el presidente Kirchner quien firmó el decreto 812 en el 2005 que reconoce la responsabilidad del Estado por violación del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, del derecho a obtener justicia en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El decreto exige además profundizar y fortalecer la Unidad Fiscal Especial AMIA del Ministerio Público; impulsar medidas que garanticen la investigación del atentado, del encubrimiento y las sanciones a los responsables, y reforzar el cuerpo especial de Investigación que funciona bajo la órbita de la cartera de Justicia. Nada de esto se hizo

Tampoco parece justificarse, a pesar del relato oficial, que este acuerdo de entendimiento contribuirá y colaborará con el fiscal y juez de la causa, cuando no se hace explícita en el memorándum la participación en el proceso de estos funcionarios.

Múltiples interrogantes se abren frente al proyecto que este cuerpo legislativo debería aprobar.

Con relación a:

Política internacional de la Argentina

¿Con quiénes, con qué países la Argentina establece vinculaciones y abre nuevos caminos de

relaciones?

¿Con su política exterior qué valores defiende y cuáles posterga?

Oportunidad histórica e internacional

¿Cuáles fueron las condiciones históricas e internacionales para pensar que este es el momento para que Irán cambie su posición con relación a su política e ideología?

¿Por qué Irán, que se negó a colaborar con la investigación argentina, hoy acuerda la conformación de una comisión “de la verdad”?

Opinión de la sociedad argentina

¿Por qué el gobierno nacional que dice defender sus acciones atendiendo el reclamo de más del 50% del pueblo argentino, no atiende el resultado de las encuestas que indican que el 80% de los argentinos encuestados se manifestó en contra del memorándum y lo que es más relevante las voces que se alzan en contra de las asociaciones de la comunidad judía en la Argentina y de mucho de los familiares de las víctimas?

¿Por qué una vez más, la presidenta de los argentinos, que se comprometió ante las Naciones Unidas a consultar y hacer participar en esta causa y decisiones a todos los sectores políticos y especialmente a las organizaciones judías y a las víctimas directas del atentado a la AMIA, promueve a espaldas de todos estos sectores un acuerdo de entendimiento con la República Islámica de Irán?

Metodología

¿Por qué una vez más el relato oficial expresado por el principal vocero, el canciller Timerman, es que el que no aprueba el memorándum no quiere que se esclarezca el caso AMIA, creando una vez más fracturas en la sociedad argentina y profundizando la imagen de los buenos y los malos, desvalorizando y acusando a los que pensamos diferente?

Memorándum

¿Por qué esta postura del oficialismo que, a pesar de las múltiples objeciones a aspectos conceptuales, a indefiniciones que merecen ampliaciones y especificaciones, por parte de familiares de las víctimas, de organizaciones como la DAIA y AMIA y del propio Congreso no acepta las recomendaciones de modificación que mejorarían el posicionamiento del gobierno argentino, profundizando las sospechas instaladas con relación con las verdaderas causas de este acuerdo?

Señor presidente:

Podríamos continuar haciéndonos preguntas. Cantidad de interrogantes y dudas se han generado en relación con este proyecto y sus múltiples derivaciones.

Lo que sí estamos seguros es del derecho efectivo, que vamos a sostener, desde nuestro partido, que es el que tienen las víctimas por la Justicia.

Lo que sí estamos comprometidos en la UCR es que este camino no se convierta en punto final a la causa AMIA como lo sospecha Laura Ginsberg, presidente de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) y muchos argentinos.

Lo que no dudamos es que no vamos a aceptar ninguna claudicación más de la democracia en la Argentina.

Lo que no estamos dispuestos es aceptar una vez más son las mentiras que usan la verdad para tratar de imponerse, porque no hay dudas de que mezclar verdad con mentira es Mentir.

Para finalizar, dijo el rabino Baraj Plavnick en un escrito reciente:

“El nazismo y luego sus discípulos la dictadura militar instalaron una “inversión” de la ética: el mal es hacer el bien, y lo bueno es lo que “yo” hago. La egolatría los condujo a la derrota, pero la confusión ética todavía subsiste. La verdad tiene muchos matices, pero la mentira no es uno de ellos”.

Y nosotros pedimos: contribuyamos a la justicia con la Justicia. La verdad está en los hechos, en las víctimas y en el atentado del 18 de julio, que fue un atentado a la AMIA, a la PAZ y a la democracia en la Argentina.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA BERTOL

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Fundamento a continuación mi voto negativo al proyecto de ley venido en revisión sobre la aprobación del Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán, sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994. (Expediente 236-S.-12).

A los fundamentos que se sostienen en el dictamen de rechazo que suscribe mi bloque político y las consideraciones expresadas en mi discurso, sumo las siguientes observaciones.

Existen razones de carácter jurídico y otras de orden moral que aconsejan desaprobado este proyecto, así como reflexiones sobre geopolítica que refuerzan esta decisión.

Además, desde la presentación del proyecto en el Senado de la Nación, autoridades del Poder Ejecutivo nacional, en particular el ministro de Relaciones Exteriores y senadores del oficialismo, han intentado inducirnos a error a quienes integramos este Parlamento y más grave aún han pretendido engañar a la ciudadanía.

El proyecto titula el documento en debate como Memorándum de Entendimiento. Sin embargo, en la primera oportunidad en que el Senado se abocó al tratamiento del tema, quedó perfectamente claro, en las palabras de la dra. Ruiz Cerutti, experta de la Cancillería argentina, que se trata de un tratado con derechos y obligaciones para las partes firmantes, el que una vez aprobado habrá de adquirir, según nuestra Constitución Nacional, jerarquía superior a la ley y obligará a toda la Nación.

Específicamente, la dra. Cerutti expresó en la reunión en Senado del 13 de febrero, " – En general hay una idea de que cuando es un memorándum es menos y cuando es un tratado o una convención es más. Por la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que codificó derecho consuetudinario, está muy claro, cualquiera sea su denominación, que lo que importa es el contenido. Si hay derechos y obligaciones fijadas para las partes que lo celebran, es un tratado. Este es un tratado, por eso está siendo sometido a aprobación legislativa."

Es decir que no se trata de un documento en el que las partes exploran un posible camino en común para llegar a un compromiso legal sino de un acuerdo que, a través del procedimiento adecuado, se tornará legalmente obligatorio. Un tratado es una manifestación de voluntades concordantes de dos o más sujetos de derecho internacional, destinada a producir efectos jurídicos; es decir a crear, modificar o extinguir un derecho. (Jiménez de Arecha)

El ministro Timerman y los senadores Miguel Ángel Pichetto y Aníbal Fernández insisten en que se trata de un acuerdo de cooperación judicial, que destrabará una causa judicial y presionará al gobierno de Irán a colaborar con la Justicia argentina, pero el acuerdo no reúne las características de un tratado de asistencia procesal, es decir, carece de reciprocidad y de los principios de confianza, identidad normativa, proporcionalidad, especialidad (hechos concretos y peticiones precisas) y territorialidad. Pero, sobre todo, ¿cómo aprobar cuestiones de operatividad procesal sin contar con la opinión del Poder Judicial? La negativa del oficialismo a convocar al juez Canicoba Corral y al fiscal Alberto Nisman, hace suponer que ellos no comparten las aclaraciones jurídicas del canciller o de los senadores. Seguramente, el Poder Judicial de nuestro país no ve con agrado que se someta a revisión judicial todo lo actuado.

A la incertidumbre que transmiten las explicaciones del gobierno sobre la naturaleza y alcance del tratado, unidas a las expresiones de sus expertos que contradicen la débil argumentación política, se agregan las dudas que plantea el propio texto del documento:

I – Legislación aplicable. En ningún lugar del texto se establece que se aplicará legislación argentina y que el juez de la causa, Canicoba Corral, será quien dirija el proceso.

Sin embargo, el ministro Timerman nos dice que no tenemos que preocuparnos, que nuestro reclamo está perfectamente contemplado en el memorándum:

Según el ministro: "Este Memorándum de Entendimiento que hemos firmado con la República Islámica de Irán expresa el consentimiento de ese país a tal efecto en forma expresa y habilita la realización de las diligencias procesales que desde hace varios años no pueden ser cumplidas y mantienen la causa penal paralizada, justamente por falta de un instrumento como el que se firmó con la República de Irán. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no está proponiendo otra cosa que el mecanismo de cooperación ya aceptado por nuestra Corte Suprema y ya consagrados en nuestra práctica judicial. El artículo 5 del Memorándum de Entendimiento prevé que las autoridades judiciales argentinas podrán interrogar en Teherán a aquellas personas a las que Interpol ha emitido una alerta roja.

A través de este acuerdo y como consecuencia del mismo, los tres poderes del Estado ejercen en plenitud las competencias que la Constitución Nacional les asigna, tal como ha ocurrido con los numerosos tratados en materia de cooperación jurídica, y en el estricto marco de lo dispuesto en el

inciso 11 del artículo 99 de nuestra Constitución el Poder Ejecutivo ha firmado un tratado con otro Estado con el objeto y fin de realizar diligencias procesales en el extranjero”

¿Suple este acuerdo la solicitud de autorización que el magistrado Canicoba Corral debe pedir a la Corte para trasladarse a Irán? Si es así, se vuelve a obviar la consulta al Poder Judicial.

Pero luego, el ministro Timerman dice: “Corresponde ahora a este Congreso de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 75, aprobar o desechar ese instrumento firmado por el Poder Ejecutivo. A su turno, el Poder Judicial podrá, si así lo decide, emplear esta nueva herramienta que estamos tratando de proporcionarle”.

Para completar: “La situación que generaría la entrada en vigor del tratado que tienen frente a ustedes, que es un instrumento, tal como ya vimos, resultante de la acción legítima y armónica de los tres poderes del Estado”

No se entiende, sólo la cláusula 7ma del Memorándum es operativa, el resto no es claro, requiere de interpretación y reglamentación y más que nada de fe en los gobiernos nacional y de Irán. Exigencia de confianza muy difícil, ya que la relación Irán -Argentina en verdad no parece ser la más acertada, como se señala el artículo del Washington Post del pasado 29 de enero.

II – El orden de las cláusulas. Sobre la cláusula 5ta, uno podría inicialmente pensar que se encuentra mal ubicada en el texto, que debería invertirse el orden de las cláusulas 4ª y 5ª, que se trata de un diseño incorrecto de estructura del texto normativo; pero luego, en un análisis del texto y las situaciones que informan a su contexto, aparece lo que seguramente es la interpretación correcta que ha de darse al texto. La indagatoria no tendrá lugar si no cumple la recomendación de la comisión. Lo correcto y justo sería que primero se tomaran las indagatorias y luego la comisión elevara su informe. No al revés. La ubicación de las cláusulas en el texto plantea serias dudas acerca de su carácter no vinculante.

III – Uso de los términos. Otra cuestión preocupante que rodea al texto es la utilización de determinados términos. Nos referimos por ejemplo, a las palabras “procedimiento” en la cláusula 2da e “interrogar” en la cláusula 5ta.

En cuanto a las normas de “procedimiento” que dictará para sí la Comisión, una duda importante dejó planteada el senador Saadi, quien expresó que los términos que utilizamos cuando integramos una comisión y nos referimos a su reglamento interno, son “organización y funcionamiento”, no “procedimiento”.

Asimismo, ¿interrogar es lo mismo que indagar? En el tratado, las partes acuerdan resolver las cuestiones terminológicas a partir de la versión inglesa del tratado. En la versión inglesa, el término es “questioning”. ¿Es lo mismo?

Veamos lo que dice un diccionario jurídico inglés – español sobre el significado de estas palabras: “Interrogar” es “interrogate” en inglés, mientras que “questioning” (del texto en inglés del Memorándum) es la segunda acepción del término.

Por su parte, “indagatoria” se traduce como “detective work” o “inquest”. Además, ¿por qué la versión en castellano no dice “indagar” si ese era el fin perseguido por nuestro país?

Otra frase que nos provoca es la contenida en la cláusula 3ra sobre intercambio de información, ... “los comisionados llevarán adelante una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados”. Se entregará la documentación de todo lo actuado al gobierno de Irán para que revisen el proceder de nuestra Justicia. La palabra invoca el “recurso de revisión” de nuestra legislación.

"Las autoridades judiciales argentinas" — que no se identifican ni individualizan — quedarían obligadas a presentar "documentación" (se supone que de la causa, pero no está claro) a la Comisión de la Verdad (art. 1º), lo que representa una clara intromisión, particularmente respecto del juez de la causa, a quien el Poder Ejecutivo no puede exigir, bajo circunstancia alguna, la presentación de documentación ante una comisión internacional de juristas que no integra el Poder Judicial argentino. Además, la Comisión, luego de haber analizado la información recibida de ambas partes, "expresará su visión y emitirá un informe con recomendaciones sobre cómo proceder en el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes" (cláusula 4ta).

Es decir que todo lo que los jueces argentinos han hecho hasta ahora en la investigación del atentado será revisado por una comisión internacional, que no integra el Poder Judicial argentino y mediante un procedimiento no previsto en nuestras leyes. La intromisión es grave, sobre todo porque la misma cláusula prevé que las partes deberán "tener en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras". Podría ocurrir que la Comisión de la Verdad concluya que todo lo actuado por la Justicia argentina carece de valor o, en términos más realistas, que la imputación de los ciudadanos iraníes cuya captura

internacional ha sido solicitada es arbitraria. Y nuestro país estaría obligado a "tener en cuenta" semejantes conclusiones "en sus acciones futuras". Dicho en otros términos, la comisión instruiría a los magistrados argentinos acerca de cómo proceder.

Reemplazar lo actuado por la Justicia argentina por una recomendación de una Comisión de la Verdad constituye, como dice el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, un paso hacia delante, hacia el precipicio, una claudicación.

Nada pasará, cualquiera sea el resultado. Si no se produce la indagatoria o si ésta se produce y en este caso se declarase la culpabilidad de los interrogados, Irán no los extraditará. En todo caso, el informe de la Comisión de la Verdad puede tener como resultado nefasto el cierre de la causa.

IV - Aparentemente, la Comisión de la Verdad se integrará por dos expertos nombrados por cada país y un tercero de común acuerdo.

Decimos "aparentemente" porque según se interprete el texto del memorándum el número de integrantes de la Comisión de la Verdad, podría ser 5, 9 ó 10 (cláusula 1°), pero el canciller Timerman pidió expresas disculpas en la reunión de las comisiones de diputados el 26 de febrero de 2012, porque quien tipeó la versión argentina puso una "y" en lugar de una coma.

La ambigüedad e imprecisión de los términos, los errores de redacción, traducción y tipeo llevarán seguramente a distintas interpretaciones,

Como resultado de todo esto, la astuta y milenaria diplomacia persa se asegurará de imponer su decisión y allí la verdad habrá encontrado su límite

Amén de lo expuesto, existen objeciones de índole constitucional que nos previenen de acompañar esta propuesta.

Según constitucionalistas como Daniel Sabsay, el tratado avasalla el Poder Judicial "a una causa en curso se le está modificando su rumbo, se le modifican las autoridades competentes, se introduce una comisión (la denominada "de la verdad"), se crea nueva jurisdicción que es Irán; tampoco es constitucional el cambio de jurisdicción con una causa en curso.

Por su parte el constitucionalista Jorge Alejandro Amaya...: "Es inconstitucional porque destruye el principio de territorialidad y destruye la jurisdicción de un expediente que tiene acreditada pruebas y hechos que a ello se debe el pedido de extradición de los iraníes".

En la reunión de comisiones del Senado antes citada, el senador Ernesto Sanz sostuvo también la inconstitucionalidad del memorándum porque vulnera el debido proceso, la defensa en juicio y la jurisdicción natural de la causa porque las indagatorias se realizarían en Irán.

¿Por quién y para quién se negocia?

Se negocia con sospechosos de crímenes, con quienes el fiscal Nisman concluyó hace años que eran los responsables del atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, la organización terrorista libanesa Hezbollah a instancias de las máximas autoridades del entonces gobierno de la República Islámica de Irán y con la participación a nivel local de funcionarios diplomáticos iraníes acreditados en nuestro país. Se negocia con un gobierno respecto del cual el propio canciller argentino dice no confiar.

La presidente, Dra. Cristina Kirchner, en su discurso ante la 67ª Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de setiembre de 2012 decía:

"Es un tema demasiado importante para ser resuelto solamente por el Poder Ejecutivo, más allá de que la Constitución le asigne la representación y el ejercicio de las relaciones exteriores. Pero acá no estamos ante un caso de relaciones exteriores típico o casual, estamos ante un hecho que ha marcado la historia de los argentinos y que también se inscribe en la historia del terrorismo internacional.

Por eso quiero que tengan la certeza,.... de que esta presidenta no va a tomar ninguna resolución respecto de ninguna propuesta que le sea formulada, sin consultar previamente con quienes han sido las víctimas directas de esto. Y, al mismo tiempo también, con las fuerzas políticas con representación parlamentaria en mi país, porque esto no lo puede decidir una sola fuerza política y porque además todos tienen la obligación de emitir opinión pública y fijar posición frente a situaciones de esta naturaleza".

Claudio Grossman, experto ONU, presidente de la Comisión de Tortura de ONU, observador de la causa AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2005 que concluyó con el reconocimiento de la responsabilidad argentina por denegación de justicia, enfáticamente expresa

acerca de este memorándum:

“Este entendimiento no satisface los requerimientos mínimos para alcanzar soluciones que luego no terminen en una decepción....Son muchos los requerimientos en los que uno se basa para saber si una Comisión de la Verdad está bien orientada o no. Pero uno fundamental y con el que no se equivocan, es saber si las víctimas están mayoritariamente de acuerdo. Si ello no es así por mi experiencia es difícil que se llegue a algo”

En ambos casos, se hace hincapié en el reclamo de las víctimas y en prestar atención a lo que dicen. Sin embargo, se avanza con la aprobación de este tratado, a pesar de que las entidades que representan a las víctimas del atentado contra la AMIA han expresado públicamente su rechazo.

La AMIA y la DAIA mostraron ser coherentes y rechazan el acuerdo y en igual sentido se expide la Asociación APEMIA (Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA).

Hemos escuchado estos días a los representantes de estas organizaciones hablar de que “fueron sorprendidos”, que se dio a conocer la noticia del acuerdo en “plenas vacaciones, plena feria judicial”, el “27 de enero, INTERNACIONAL DEL HOLOCAUSTO”, que fue un proceso “inconsulto desde el principio”.

Por su parte, Memoria Activa (Diana Malamud) lo acepta pero exige otras condiciones: a) que se realicen primero las indagatorias y b) que no caigan las alertas rojas.

A favor del rechazo del acuerdo se han manifestado también el Congreso Judío Mundial (WJC); el Congreso Judío Latinoamericano; el Comité Judío Americano (AJC por su sigla en inglés) ; el director para América Latina de la Cancillería Israelí, Itzhak Shoham; la Liga Anti-Difamación (ADL, por sus siglas en inglés).

¿No debería esto llamar a la reflexión de las autoridades nacionales para que cedan en su presión, aminoren el paso y promuevan un proceso que lleve a una solución participada con los familiares de las víctimas y no a una resolución impuesta que haga desaparecer la causa? Parece que no.

“¿Por qué en lugar de escuchar discursos respetables, pero que casi son culposos ..., no nos invitan a un discurso y a una decisión compartida, como sucedió con otras políticas de Estado? La enorme diferencia entre una cosa y otra es que, al haberse encerrado en la soledad del más puro oficialismo para explicar lo inexplicable, tienen que forzar mucho los argumentos.” (Senador Ernesto Sanz, 24ª reunión – 2ª sesión extraordinaria – 21 de febrero de 2013)

Por alguna causa económica o geopolítica que no conocemos, aunque podemos conjeturar sobre su existencia, se prefiere un acuerdo apurado, sometido a las reglas que imponen los presuntos victimarios en lugar de seguir los pasos lentos de la Justicia argentina, preferidos por todos antes que iniciar negociaciones con el país sospechado.

El Dr. Adam Kahane, facilitador de los procesos de paz de Mayflower, Sudáfrica, escribe en la primera página de su libro Poder y Amor. Teoría y práctica para el Cambio Social (PNUD 2011):

“Nuestras dos maneras más comunes de enfrentar los desafíos sociales más difíciles son extremas: la guerra agresiva y la paz sumisa. Ninguna de estas dos maneras funciona. Podemos intentar lograr lo que queremos, usando armas o dinero o votos, sin importar lo que quieren los demás, pero inevitablemente los demás responden y resisten. O podemos tratar de no presionar a nadie, pero esto deja la situación tal como está.

“En los asuntos nacionales, podemos hacer acuerdos para salir con nuestro gusto, o podemos dejar que otros salgan con el suyo. En las relaciones internacionales podemos tratar de imponer nuestras soluciones o podemos negociar interminablemente. Estas maneras extremas y comunes de tratar de hacer frente a nuestros cambios sociales más difíciles generalmente fracasan, dejándonos estancados y sufriendo.

“Necesitamos – y mucha gente está trabajando para desarrollarlas – maneras diferentes y poco comunes para hacer frente a los cambios sociales, ...necesitamos una manera que no sea la guerra ni la paz, sino la creación colectiva.”

En algún momento se podrá llegar a esa solución, con más tiempo, otros actores, con el apoyo de las partes involucradas, la reciprocidad, la confianza, estándares mínimos legales consensuados. En un proceso que no deje de lado a quienes han venido sosteniendo la memoria, la búsqueda de verdad y la justicia.

La actitud del Poder Ejecutivo parece la de alguien que no quiere que se lo debata pausadamente para que no se advierta la gigantesca magnitud de los errores cometidos y las consecuencias de las

inexplicables ventajas que otorgamos a los sospechosos requeridos por nuestra justicia y a Irán en general.

La participación del ministro Timerman no aclaró las dudas, tal como surge claramente de preguntas repetidas sucesivamente por los legisladores y familiares de víctimas del atentado a la AMIA presentes en las reuniones de comisiones del Senado y Cámara de Diputados y aquí en este recinto. No se trató solamente de respuestas vagas e imprecisas sino de alarmante reconocimiento de errores en el propio texto del documento.

El tratamiento en este Congreso deja mucho que desear. Es otro ejemplo de autoritarismo de mal trato del gobierno nacional a los legisladores, de urgencia y superficialidad, de falta de razones.

Tal vez lo más grave es que otra vez, tal como lo que bien ha expresado Santiago Kovadloff: “Se juega la carta siniestra de la intrascendencia de los muertos”.

Por último, quiero cerrar mi participación en este debate transcribiendo una parte de una carta de un amigo, Mario Kaplan, que llegó a mis manos durante la sesión:

“Yo la escuché a la presidenta en Naciones Unidas y me quedé tranquilo...me pareció que el mensaje fue claro...muy claro o todos juntos o no hacemos nada

El mundo fue testigo de esa declaración. Está registrado. No hay dudas de lo que se dijo en ese momento.

Quien dice algo frente a tantos testigos es alguien que está dispuesto a cumplir lo que dijo y yo me quede tranquilo”.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BIELLA CALVET

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Estamos convocados en sesiones extraordinarias para tratar este Memorándum de Entendimiento con la Rep. Islámica de Irán, por el que se nos propone una suerte de entendimiento para tratar de destrabar una causa que lleva casi 20 años y que costó la vida de decenas de argentinos, sin que hasta la fecha se sepa nada a ciencia cierta de sus responsables e instigadores.

La verdad es que, haciendo un repaso de lo actuado hasta ahora por la Justicia tendríamos que preguntarnos primero por este proceso de investigación, que se llevó y se lleva a cabo con una serie de instancias que han hecho que en el tiempo no se generaran resultados, circunstancias que por lo menos llaman la atención de mucha gente y exasperan a los familiares de las víctimas, que sienten y manifiestan una profunda sensación de desamparo e impunidad.

Sin embargo, es la Justicia la que tiene acumulados miles de antecedentes y tiene una investigación que más mal que bien, está en curso y debe respetarse.

Ahora, repentinamente el gobierno nacional cambia la postura que el país tenía sobre este tema y convoca a sesiones extraordinarias para aprobar este acuerdo llamado de “entendimiento” con Irán, por el que se nos quiere hacer creer que finalmente se está tomando el “toro por las astas”.

Este tipo de situaciones no es nueva para los que sentimos con dolor que la Argentina se está aislando del mundo y que esta política exterior errática es un nuevo paso en ese aislamiento.

No puede dejar de asombrarnos la facilidad con la que repentinamente y cambiando la propia postura que el gobierno nacional tenía desde hace años, se pretenden solucionar los problemas del país, siempre con la visión del cortoplacismo, la elección venidera y no pensar en un país serio a años vista, para nuestros hijos y nietos.

En este caso, la primera reacción que se me ocurre es la de buscar qué han dicho los propios familiares de las víctimas de la AMIA y el rechazo es casi total y absoluto al avance de este acuerdo. Señor

presidente: estos familiares que son los más afectados, no fueron consultados. Recordemos que la primera premisa del PE cuando presentó este Memorándum de Entendimiento fue tener el acuerdo con los familiares de las víctimas. Por eso, algo nos tiene que llamar a considerar a la hora de votar, cuando vemos el rechazo generalizado de la AMIA y de la DAIA a este acuerdo, porque ellos son los primeros perjudicados.

Por otra parte, todos sabemos que un convenio internacional, desde el año 1994 en que se reformó la Constitución, tiene mayor jerarquía que las leyes, que este tratado tendrá jerarquía superior a las leyes y su violación traerá apareja la responsabilidad del Estado, es decir que este gobierno nos está involucrando a todos los argentinos en un acuerdo que ni los propios afectados por el atentado quieren. Recordemos que modificarlo o denunciarlo necesita de negociaciones diplomáticas complicadas y que en política internacional nada es gratis a la hora de comprometerse los países.

Sin duda que el fondo de este llamado memorándum es un tema que excede lo judicial y que ese es un camino sin salida, no solamente porque se cambia el eje de lo que debería ser una investigación criminal, sino que por otra parte se está soslayando una situación global, en la que Irán, como uno de los países importantes del mundo islámico, es un actor de peso.

Irán es un país que hace de árbitro en el Medio Oriente, sobre todo por su poder ganado como país con recursos petrolíferos. Un acuerdo con la Argentina y mostrarse como un país con intenciones pretendidamente serias, lo posiciona mejor en su política externa respecto de Europa y de EE.UU.

Nos preocupa, esta falta de apreciación de los problemas globales por parte de los responsables de la política exterior de nuestro país. Vemos mucha improvisación y que no hay participación en las decisiones de funcionarios de carrera, en la elaboración de una estrategia coherente que evite este permanente juego de “ruleta rusa” en el que un día sostenemos una cosa y al día siguiente otra y esperar que el mundo nos apruebe. Señor presidente: veníamos de plantear en la Asamblea de las Naciones Unidas desde muchos años una postura que se ha echado por tierra en un par de semanas. Esto no es serio y aunque nos digan que no les interesa lo que piensa el mundo, por lo menos creo que el gobierno debería tener en cuenta lo que piensan los familiares de los muertos en la AMIA que acompañaron a los presidentes Kirchner a la ONU a defender una posición diametralmente opuesta a la que ahora se impulsa.

Pero este desconocimiento a los principios básicos del derecho internacional, pone una vez más a la Justicia argentina en situación de tener que resolver sobre la constitucionalidad de este convenio que hoy nos ponen a discutir. Uno de los graves inconvenientes que este tema plantea es la cesión de jurisdicción exclusiva, por el que cualquier persona y todas las cosas que están en un territorio (salvo las embajadas y otras excepciones) están sujetas a las leyes y tribunales del Estado donde están, en este caso la justicia argentina. Sin embargo, se pretende hoy por la fuerza del número, derribar este principio que es una construcción jurídica que lleva siglos, desde que los Estados modernos surgieron, pero que viene incluso desde la legislación de la Roma antigua.

Si se ha cometido un delito en la Argentina deben ser los jueces argentinos los obligados a entender en su juzgamiento, por lo que desde este punto de vista, este convenio queda viciado de inconstitucionalidad desde el “vamos”.

Pero quiero volver un poco al aislamiento que creo que este convenio acentúa. Parece como que este gobierno no repara en que el mundo nos está mirando. Sabe que se nos hunden solos los barcos de guerra en su puerto anclados, sabe que se nos caen los aviones de guerra, sabe que nos embargan nuestros barcos escuelas, por nombrar algunos hechos de escarnio público que últimamente hemos sufrido. Pero ahora se suma esta nueva improvisación en materia de derecho internacional. Señor presidente: todo esto es un reflejo de las políticas internas, que nosotros conocemos bien y padecemos en una medida similar. La Argentina no necesita seguir alejándose del mundo; tiene que ganar credibilidad y no perderla. No necesita generar más frentes de los que ya tiene, salvo que pensemos que generar eventuales enemigos nos sirva para ganar las próximas elecciones. Pero con estas premisas el mundo nos dará la espalda y más a la corta que la larga, lo pagará nuestro pueblo con aislamiento internacional. Sin duda que en este contexto no dejaremos de ser “un país con buena gente” pero con un gobierno poco serio.

Mucho se ha hablado hoy de “descorrer el velo” de este acuerdo y las negativas que escucho del oficialismo me hacen acordar a las negativas a que exista inflación. Tal vez no lo podamos afirmar con seguridad, pero los acuerdos comerciales son un hecho que en las negociaciones internacionales se usa

como carta de cambio, porque la diplomacia es un “toma y daca”. Puede haber otros factores de negociación, tal vez algún día lo sepamos, pero creo honestamente que este nivel de improvisación en el que quizás entren en juego algunas miles de toneladas de productos y algún beneficio para la balanza comercial, nada tendrían que ver con la búsqueda de justicia por un acto terrorista como el que se investiga.

Llevamos 20 años de una causa en la que no sabemos el tenor de la seriedad de las pruebas, incluso algunos refieren a su flojedad. En cualquier caso, no entendemos que Irán no permita que sus ciudadanos se sometan a la Justicia argentina, que después de todo lleva 20 años investigando, y es por esto que no entendemos esta cesión de nuestra jurisdicción, que parece que o bien se trata de otra estrategia para ganar tiempo o bien se trata algo peor, una forma de cerrar la causa y de que sus responsables queden impunes. En todo caso, lo que logrará Irán es que Interpol levante el pedido de captura que pesa sobre sus ciudadanos imputados.

Señor presidente: a los tratados no queda otra posibilidad que cumplirlos y deben ser interpretados de buena fe. Este tratado es de tal ambigüedad, tan amplio, tan permisivo a cualquier interpretación, que hará que este principio de la buena fe se transforme en el paradigma de una quimera, entendiendo a ésta en su acepción de ser aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo.

Por último, y en relación a la mentada “Comisión de la Verdad” que este acuerdo propone crear, no puedo dejar de recordar la frase atribuida al líder del partido gobernante, Juan Domingo Perón, que hace referencia a que cuando alguien quiere que una tema no avance, no se investigue o no se aclare, entonces, “crea una comisión.”

Señor presidente: como legisladores tenemos una responsabilidad y a mí me cabe la de negarme a apoyar este tratado, pensado como una salida coyuntural, como el país del “cortoplazo” que siempre nos propone el oficialismo. No quiero ese país y por eso mi voto es negativo.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BRILLO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Creo que se ha hablado mucho sobre el país con quien hemos suscripto el Memorando de Entendimiento y que se pone a consideración de la Cámara de Diputados para que sea convertido en ley.

Un país que ha negado públicamente el Holocausto, que exige que Israel sea desplazado de la faz de la Tierra.

Que comenzó su programa de energía atómica en la década del 50 y que, desde entonces, pretende convertirse en una potencia nuclear.

Que confunde cuando de su Cancillería surge la versión de que se impediría el interrogatorio a los acusados en Teherán.

Que consolida una relación con Venezuela y con Chávez a partir de la firma de 270 convenios bilaterales vinculados a la comercialización de petróleo y armamentos.

Pero, aunque se quiera imponer la idea de que es la primera relación que tenemos y de que no nos generan en absoluto confianza, este Irán no se diferencia demasiado de aquel Irán de mediados de los 80, que firmó acuerdos y tuvo una relación intensa con la Argentina sobre cooperación y aprovisionamiento nuclear.

La colaboración que se dio en esos años – así lo entendíamos en ese momento - no sólo no implicaba ningún riesgo para la seguridad internacional, sino que tampoco se podía decir que haya sido un ejemplo de irresponsabilidad o una aventura por parte del gobierno argentino. Y eso que en Irán era gobernado por el ayatollah Khomeini.

En el caso del gobierno de Raúl Alfonsín, la estrategia de vinculación nuclear con Irán derivaba de una política exterior que priorizaba las relaciones Sur – Sur, sin descuidar los compromisos internacionales de la Argentina y sin colisionar con EEUU o Israel.

Ya en 1973 siete científicos argentinos de la Comisión Nacional de Energía Atómica fueron a trabajar a Irán en áreas tales como el diseño de reactores, minería del uranio y protección radiológica.

Entre 1985 y 1987 delegaciones iraníes visitaron la Argentina y delegaciones argentinas visitaron Irán para negociar la cooperación en el campo nuclear. El 5 de mayo de 1987 la empresa INVAP integrada por el Estado rionegrino y la Comisión Nacional de Energía Atómica, y la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI) firmaron un contrato comercial por 5.5 MM U\$S para reemplazar el uranio utilizado hasta el momento en Irán por uranio enriquecido al 20 % que sería provisto por Argentina. El contrato contemplaba el suministro a Irán de 115,8 Kgs de ese tipo de uranio.

Este acuerdo incluía la formación de técnicos iraníes en el Instituto Balseiro de Bariloche para aprender a operar el reactor con la nueva tecnología.

Por otra parte, en plena guerra Irán – Irak, entre 1982 y 1988, la Argentina realizó ocho envíos de armamento a Irán convirtiéndose en la primera fuente de armas desde América Latina a la República Islámica.

Otro acuerdo firmado el 9 de diciembre de 1988 autorizaba la transferencia y exportación desde la Argentina a Irán de 115,80 kgs de uranio enriquecido hasta el 20 %.

Este acuerdo concluye en 1993 con los envíos del combustible nuclear comprometido por parte de la Argentina. Paralelamente Irán y la Argentina habían negociado otras iniciativas. El 3 de octubre de 1988 se firmó otro contrato entre INVAP y AEOI de Irán para exportar a Irán elementos para la provisión de una planta piloto de conversión y purificación de óxido de uranio, con un costo de 9,7 MMU\$S.

Un segundo contrato entre Irán y la Argentina fue firmado al día siguiente para la exportación desde la Argentina de una planta piloto para la fabricación de combustibles nucleares con uranio natural por un valor de 14,9 MMU\$S. En esta última exportación había una transferencia de tecnología argentina hacia Irán, lo que convertía al contrato en algo más delicado y con implicancias internacionales.

Las relaciones argentino – iraníes, tanto en lo comercial como en lo militar y en el ámbito nuclear, no significaron un enfriamiento de las relaciones entre la Argentina y el Estado de Israel. Las relaciones entre el gobierno argentino y el Estado de Israel fueron muy buenas en esos años y la relación entre nuestro país e Irán nunca fue vista como algo perjudicial o un problema a considerar.

Cuando Carlos Menem asumió la Presidencia en 1989, el tema en agenda fue la renegociación de los contratos nucleares firmados en 1988. En 1990 se firmó un acuerdo comercial ratificado en 1994 y un Memorando de Entendimiento para el Desarrollo de las Relaciones entre la Argentina e Irán.

El alineamiento del gobierno de Menem con los Estados Unidos determinó la suspensión y posterior cancelación de los contratos nucleares argentino – iraníes. A principios de diciembre de 1991, el gobierno argentino autorizó el primer embarque de máquinas, herramientas y tuberías destinadas a una planta piloto de óxido de uranio y fabricación de combustibles. Sin embargo, el 11 de diciembre se suspendió dicho envío.

La cancelación de un envío cuyo contrato se había celebrado hacía dos años y que Irán ya había pagado sorprendió al gobierno iraní. Irán requirió explicaciones sobre las razones que impulsaron al gobierno argentino a suspender la entrega convenida y darla a estado público.

En 1992 se continuaron realizando algunos envíos y se continuaron algunos trabajos comprometidos. La Cancillería argentina comunicó a la CNEA la decisión de suspender definitivamente los contratos con Irán el 27 de mayo de 1992.

Ante los reclamos de Irán, la Argentina, en 1992, accedió a enviar armas a Bosnia a través de Croacia, para los musulmanes que luchaban contra las fuerzas serbias, como una forma de compensar a Irán por la cancelación de los contratos. Irán comenzó a exigir una compensación económica de 100 MMU\$S por el incumplimiento de contratos por parte de la Argentina. Hubo varias reuniones en Teherán y en Viena hasta 1995.

En este lapso se sucedieron los atentados a la embajada de Israel con 22 muertos y a la AMIA con 85 víctimas fatales.

En síntesis, en los últimos 25 años, durante prácticamente una década la Argentina tuvo una relación intensa con Irán, colaborando y suministrando insumos y tecnología nuclear a un país que, como dijimos, siempre quiso y quiere ser una potencia nuclear.

Dos presidentes de distinto signo político, de distinto color político del actual gobierno, convalidaron esa relación, aunque científica y tecnológica, potencialmente peligrosa. Relación que terminó con los atentados que causaron un centenar de muertos en la Argentina y que hoy, más allá de lamentarlos, los argentinos pretendemos develar si tienen conexión con IRAN.

Lo inexplicable es que un gobierno como el actual, que avanzó en la investigación intuyendo el origen y los responsables de los atentados, hoy sea cuestionado descarnadamente por tratar de establecer un puente con IRAN que le permita interrogar, a través de la Justicia argentina a los iraníes imputados. Y que se lo inculpe severamente por diferencias sutiles en el texto del Memorando, si ponemos “interrogar” o “indagar” ó si el texto en inglés es una trampa.

Comparado con aquella década de relaciones con IRAN, esto aparece como casi virginal.

Por ello, creo firmemente que oponernos al entendimiento no conduce a nada y que acompañarlo al menos genera la expectativa de seguir avanzando y esclareciendo este tema. Los resultados se irán viendo en el camino.

Y en ese camino tendremos responsables, el gobierno nacional, el canciller, los jueces que integrarán la comisión y los que viajarán a Irán. Los esperamos y al final se verá quién tenía razón. Si algunos de los rugbiers uruguayos de la tragedia de los Andes no hubieran salido a caminar, hoy no estarían entre nosotros.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BURYAILE

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorandum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 75, inciso 22, que es una atribución del Congreso “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.”

En ese sentido, estamos hoy sesionando para convertir en ley a este acuerdo firmado por los cancilleres argentino e iraní, suscripto el 27 de enero en la ciudad de Adis Abeba (Etiopía), y que tal como establece su encabezado versa "sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de Julio de 1994”.

Este “Memorando de Entendimiento” al ser sancionado se convertirá en tratado, y en virtud del artículo antes mencionado tendrá jerarquía superior a las leyes.

Es decir, que no sólo comprometerá la voluntad del actual gobierno, tal como un memorándum obliga, sino que lo firmado comprometerá a toda la nación, a este gobierno y a los sucesivos.

Por eso, y debido a la importancia que tiene esta sanción, no ya para el gobierno, sino para toda la Nación, debemos conocer quiénes son las partes que lo firman, y en qué circunstancias lo hacen.

Por un lado, el Estado argentino, que desde hace 19 años busca el esclarecimiento de un atentado ocurrido en suelo argentino, contra una entidad argentina y en la que murieron 85 ciudadanos argentinos.

El otro signatario es la República Islámica de Irán, y nuestro deber como legisladores es conocer con qué Estado comprometemos la voluntad de la Nación mediante este tratado:

¿Qué esconde la urgencia del gobierno nacional en ratificar el acuerdo firmado con un Estado como Irán?

Irán es un Estado teocrático con 80 millones de habitantes y su forma de gobierno es una República centralista, regida por la Constitución de 1979.

El “líder supremo” es el jefe de Estado de la República Islámica de Irán, entre cuyas funciones se encuentra el firmar y promulgar las leyes sancionadas por el Parlamento; es el responsable máximo de las Fuerzas Armadas del país y máxima autoridad política y religiosa. Actualmente es el ayatollah Alí Jamenei, quien ocupa el cargo desde 1989, luego del fallecimiento del ayatollah Khomeini, quien fuera líder de la revolución de 1979.

El presidente de la República es el jefe de gobierno y máxima autoridad política después del líder Supremo. Es electo por voto directo y dura 4 años en su mandato. Es el responsable de la administración política del país, y tiene a su cargo, las relaciones exteriores. Actualmente ocupa ese cargo Mahmud Ahmadineyad, desde agosto de 2005, cargo que abandonará este año por ya haber sido reelecto.

NEGACIONISMO:

Una de las mayores polémicas del gobierno iraní, especialmente del actual presidente Mahmud Ahmadineyad es su abierta posición antisemita.

Considera al Holocausto un mito y ha participado y organizado congresos para desacreditar “el mito del Holocausto”

El 14 de diciembre de 2005, sostuvo Ahmadinehad : "Ellos [los occidentales] han inventado el mito de la masacre de judíos y lo han colocado por encima de Dios, de las religiones y de los profetas. Si alguien de sus países pone en duda a Dios, no dicen nada, pero si alguien niega el mito de la masacre de judíos, los altavoces sionistas y los gobiernos a sueldo del sionismo comienzan a vociferar”

Desde su asunción como presidente ha tenido varias declaraciones contra el Estado de Israel, del que sostuvo debería “ser borrado del mapa”.

Tanto es así, que el 27 de octubre de 2005 afirmó que: “Como dijo el imán [Khomeini], Israel debe ser borrado del mapa”.

"Todo el que reconozca a Israel arderá en el fuego de la furia de la nación islámica; cualquier [líder islámico] que reconozca al régimen sionista reconocerá la rendición y la derrota del mundo islámico”.

¿Por qué este gobierno, que desde sus inicios dice llevar la bandera de la defensa de los derechos humanos, decide pactar con la República Islámica de Irán, país reconocido internacionalmente como violador constante de los derechos humanos más básicos?

Bien se ha dicho en este recinto que al celebrar acuerdos se presume la buena fe de las partes. Sin embargo, me pregunto, teniendo en cuenta que la otra parte de este acuerdo es la República Islámica de Irán, ¿cómo podemos presumir buena fe de su parte en un acuerdo que busca “justicia” y “verdad” para las víctimas del atentado a la AMIA, si en su accionar diario este país viola sistemáticamente los derechos humanos elementales? ¿Podemos realmente asumir que su objetivo es la búsqueda de la verdad, cuando son sus propios ministros y funcionarios quienes avalan ese accionar, y a su vez son los imputados por esta causa?

Según informes de Amnistía Internacional, en 2012, autoridades iraníes ejecutaron a más de 500 personas - la mayoría condenados por tráfico de drogas mediante juicios injustos. Más de 180 de estas ejecuciones no se anunciaron oficialmente. Se estima que los ejecutados fueron cerca de 1.000 en realidad. Irán es uno de los estados que aplica con más frecuencia la pena de muerte.

Informes fidedignos en febrero 2013 sugieren que las ejecuciones secretas en masa continúan aún hoy en las cárceles.

La ley penal impone la pena capital por delitos que incluyen el tráfico de drogas, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la homosexualidad, la apostasía y otros delitos vagamente descriptos como "corrupción en la Tierra" y "enemistad contra Dios”.

Antes de las ejecuciones públicas, los detenidos son exhibidos por las calles de las respectivas ciudades, ya que el régimen busca así intimidar a la población, para desalentar expresiones de

descontento. Para la ejecución, se montan escenarios para lo que acaba siendo un espectáculo macabro: vallas para cortar el tránsito en la calle, tablados para que el público no pierda detalle y las grúas de las cuales colgarán los desdichados. Estos llegan al lugar escoltados por policías, esposados y vendados.

Además, la libertad de expresión, asociación y reunión siguen estando muy restringidas. La tortura, incomunicación y otros malos tratos se utilizan habitualmente como estrategia para restringir el debate público. Arrestos arbitrarios y hostigamiento dirigidos a los trabajadores, los medios de comunicación y bloggers están tomando lugar antes de la próxima elección presidencial prevista para junio de 2013.

¿Cómo puede una presidente mujer promover negociaciones con un país que no reconoce derechos básicos a las mujeres, y en el que las estadísticas de diversas formas de abuso contra las mujeres aumenta todos los días?

Irán no ha ratificado la Convención sobre la “Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” y no reconoce la violencia contra las mujeres en sus leyes.

Los derechos de las mujeres, ya restringidos en la legislación y en la práctica, son cada vez más limitados, incluso reduciendo oportunidades educativas.

De acuerdo con una encuesta nacional sobre la violencia contra las mujeres, llevada a cabo en 2004 por el Ministerio del Interior, más de la mitad de las encuestadas habían sido sometidos a diversas formas de abuso, incluyendo mental, abuso físico, social, económico y sexual, por parte de sus maridos.

RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS.

Es un punto central del debate de la aprobación de esta ley, que con la aprobación del memorándum por parte del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional habrá logrado su objetivo de compartir responsabilidades con el Legislativo acerca del cambio de la política para con Irán.

INTERPRETACION

Existen muchas dudas respecto a su interpretación y el canciller o las figuras del oficialismo vienen haciendo constantemente aclaraciones sobre lo que “se quiso” firmar, que no tienen ningún tipo de validez.

Ante tantas aclaraciones que desde el oficialismo se hicieron respecto del texto, ¿quién nos garantiza que Irán va a interpretarlo de la misma manera? ¿Qué nos hace suponer que Irán va a aceptar la interpretación que el canciller hace sobre lo que firmó?

¿No es acaso más sensato suponer que la República Islámica de Irán procederá, en el mejor de los casos, con el cumplimiento de lo estrictamente firmado?.

Todos sabemos que en cuestiones de derecho, lo único que vale, es el texto firmado. Nada más, y nada menos.

PROCEDIMIENTO

Es inadmisibles que no se haya establecido el derecho aplicable y que no se haya determinado con precisión cómo actuará la comisión. ¿Cuál es la ley que se va a utilizar?, ya que todo cambiará según la ley del lugar que se tenga en cuenta.

Por regla general, salvo que exista un convenio con reglas específicas, una declaración se rige por las reglas procesales locales, aunque con pedido de captura del acusado, la práctica es que las autoridades argentinas recién reciban declaración una vez extraditado el imputado. Así, el interrogatorio se realizaría en el territorio nacional y conforme a las reglas procesales locales. La aplicación de la ley argentina es lo que marca el ejercicio de soberanía del Estado.

Es sumamente improbable poder compatibilizar cuestiones de derecho entre un sistema democrático con uno teocrático. No es detalle menor que según la legislación del régimen de Teherán “un iraní sólo puede ser juzgado por un iraní”.

INTERROGATORIO

El tratado sostiene que las reglas de procedimiento se darán luego de la firma del tratado. Al tratarse el presente memorándum de un tratado internacional, las reglas de procedimiento deberían estar fijadas

en él. Más aun, la redacción del memorándum es confusa y se presta a interpretaciones diversas. En estas reglas estarán, por ejemplo, el tipo de procedimiento del interrogatorio. No dice nada de indagatoria.

El memorándum establece que la comisión podrá interrogar a los sospechosos (aquellos respecto de los cuales la Interpol ha emitido una notificación roja) en Teherán.

En la Argentina, el Código Procesal Penal de la Nación establece que las declaraciones testimoniales pueden tomarse "a toda persona que conozca los hechos investigados", y que "tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado". Las indagatorias, en cambio, son interrogatorios que se formulan a acusados. Es el acto procesal en el que se precisa de qué se lo acusa al imputado y cuáles son las pruebas en su contra y éste puede defenderse o negarse a declarar como parte de su derecho de defensa.

Pero de acuerdo al Memorándum de Entendimiento, estará presente la denominada Comisión de la Verdad, con la prerrogativa de poder preguntar, lo cual violaría la ley procesal penal argentina.

Vocero de canciller iraní: el tema de una indagatoria a un responsable iraní es totalmente falso.

Indagatoria: el individuo puede no salir en libertad. En este caso PUEDE. Puede declarar por escrito, o no presentarse. Con ello, no produciría nada. El juez no puede ponerlo preso.

En la reunión para "interrogar" a los acusados, ¿Quién va a conducir el proceso? ¿La Comisión de la Verdad? ¿Las autoridades iraníes? Pareciera que se trata de una simple reunión con ronda de preguntas.

Pero si como en el día de ayer sostuvieron el canciller y el subsecretario de Política Criminal, que lo que el juez realizará en Teherán es efectivamente una indagatoria: ¿Qué garantías tendrá el Juez de, si considera proceder a dictarle prisión preventiva, ésta se cumplirá?.

INCOSTITUCIONALIDAD.

Se argumenta que la comisión sólo habrá de "asesorar" al Poder Ejecutivo. Nos preguntamos, entonces, ¿sobre qué necesita el Ejecutivo ser asesorado respecto de una causa en trámite, cuando el artículo 109 de la Constitución le prohíbe expresamente arrogarse el conocimiento de procesos judiciales? ("En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".)

Además, el memorándum entra en colisión con los principios básicos del derecho procesal penal, originados en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza que las causas tramitarán ante su juez natural y en el marco del debido proceso.

El artículo constitucional señala, entre otras cuestiones, que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa".

Se trataría de someter la causa a un tribunal que no es el juez natural y se viola el debido proceso con respecto a los acusados, pero también a las víctimas", que son los querellantes, como los familiares de los muertos, los heridos y la AMIA y la DAIA.

La "Comisión de la Verdad" recibirá las pruebas y evidencias que las autoridades de ambos países aporten. ¿Qué pruebas aportará Irán?

Si en verdad quisiese aportar al esclarecimiento del atentado, ¿por qué habrá demorado 19 años en aportar evidencias?

CONSECUENCIAS.

Durante estos días, hemos escuchado que algunos sostenían que en el caso de que la aplicación de lo firmado en el memorándum no produzca el objetivo con que el gobierno argentino lo firmó, no pasaría nada.

Es mentira.

Si el resultado de la comisión es que no se llega a nada, habremos perdido la escena internacional para mantener el reclamo por justicia.

Irán, será como: quien propuso el tratado. Como quien lo cumplió en su totalidad, y la Argentina no podrá sostener su reclamo por el esclarecimiento del atentado que costó 85 vidas.

Y por ello debemos tener en cuenta, como escuchamos ayer, la genuina preocupación de los propios familiares de las víctimas y representantes de las entidades, que con el interrogatorio cae la notificación roja de los acusados, así Irán habrá cumplido su objetivo: No llegaremos a la verdad, y los imputados podrán deambular sin problemas por el mundo exhibiendo su falta de vinculación con este atentado y de esa manera, ni la verdad ni la justicia llegarán para estos 85 argentinos.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CAMAÑO

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Nos convoca un asunto de significativa trascendencia y gravedad institucional.

Lamentablemente, de cara al proceso que se viene presenciando desde que tomara estado público el MEMORÁNDUM, cuando la presidente lo comunico por Twitter y luego en cadena oficial, hasta ahora, es dable colegir que una cuestión que debiera haberse analizado y tratado como verdadera cuestión de Estado, ha devenido en mero asunto de gobierno.

Y en esta mirada miope, mezquina, hasta miserable, diría sin temor a exagerar en el calificativo, poco ha importado reparar en los bienes y valores puestos en juego, y que en mi opinión se sacrifican o ponen en juego y serio riesgo: la memoria de las 85 víctimas inocentes, el dolor de sus familiares y amigos, el padecer de un pueblo que se ha visto sumido en la atrocidad de un hecho que lo dejara perplejo, esto por un lado; también cuentan la soberanía nacional, el valor de las instituciones de la Constitución, la necesidad de VERDAD y JUSTICIA, la dignidad. Esto es así porque se trata del PEOR ATENTADO TERRORISTA en territorio argentino, y los atentados terroristas no son contra una comunidad, ni un grupo, ni siquiera un pueblo SON CONTRA LA CIVILIZACION

Hemos asistido a un debate innecesariamente precipitado y carente de la profundidad reflexiva que el tema ameritaba.

Que arroja sólo la certeza de una generalidad de las voces que se oponen al instrumento. La excepción está dada prácticamente por aquellos mismos que propician su aprobación, y esto quedará de manifiesto esta noche cuando cierre la jornada. En el afán de relativizar, esas otras voces han llegado incluso al desatino de poner en un plano de igualdad con este tema a acuerdos comerciales celebrados en el pasado.

Unanimidad prácticamente de voces contrarias si atendemos a los más interesados: los familiares de las víctimas.

Por cierto, la sensación generalizada comulga con el pesimismo cuando de evaluar expectativas en lo que hace a los resultados positivos esperables se trata. Y esto ha quedado plasmado de manera patética en lo manifestado por el propio ministro en el día de ayer.

Por esto estimo que lo que principalmente cuenta es formular un análisis de legalidad estricta, depositando la mirada y el enfoque de lo actuado —y por actuar— por parte de las autoridades de nuestro

país en su contraste con la Constitución Nacional, y éste permite poner en tela de juicio el acuerdo por contundentes razones.

Hay que partir de una premisa, que consiste en atender la regla de supremacía constitucional que consagra el artículo 31 de la Ley Fundamental para, a partir de ahí, advertir cómo juegan los tratados y las leyes frente a la Ley Suprema.

Pues de un TRATADO BILATERAL estamos hablando, más allá de la denominación que convencionalmente recibiera. Esto fue perfectamente aclarado ayer por la embajadora Susana Ruiz Cerutti, quien se encargó de despejar dudas afirmando su naturaleza jurídica en función de lo establecido por la Convención de Ginebra en materia de tratados. Y es esa también la razón de su elevación al Congreso para su necesaria aprobación.

Sentada esa premisa, la consideración del tema no puede pasar por alto el análisis de legalidad con base en lo que predica nuestra Ley Suprema.

Esto es, advertir y no perder de vista que en el orden interno debe prevalecer lo que predique la Constitución por sobre la letra de un tratado que, en consecuencia, imperiosamente debe compatibilizar con aquella.

Una digresión: el inconveniente podría venir de la mano de la regla del art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por la Argentina, según la cual nuestro país no puede incumplir un tratado invocando en su contra el derecho interno, lo que podría derivar en responsabilidades del propio Estado argentino, aún cuando el MEMORÁNDUM fuese hallado inconstitucional por la Justicia argentina.

Esto nos obliga a ser más que serios a la hora de viabilizar este MEMORÁNDUM, porque lo convenido se colocaría –de todos modos- por encima de la ley, con los riesgos que ello de por sí supone. Especialmente, el plexo normativo penal y procesal penal argentino.

En suma: nos obliga a tomar conciencia de los riesgos consiguientes.

No en vano, ayer nomás, el doctor Lorenzetti, con el equilibrio y la mesura que lo distinguen, nos recordaba que “las decisiones de la mayoría pueden ser declaradas inconstitucionales por los jueces”.

Máxima que no tiene nada de novedosa, pero que dicha aquí y ahora cobra una dimensión especial, pues bien vale en este caso.

Efectivamente.

El gobierno, en su afán por lograr la aprobación inmediata de lo acordado –a la luz de cuanto señalan sus representantes y exégetas-, se ha venido apoyando casi exclusivamente en consideraciones de conveniencia –para lo cual pretexto o bien la parálisis del expediente, o bien el deseo de avanzar en la causa-, pero ha venido soslayando o relegando a un muy segundo plano los riesgos, especialmente de tomar en cuenta la juridicidad estricta del asunto.

Quiero dejar sentado que mi análisis parte de la base de interpretar la Constitución de un modo que contiene a la letra, pero también abraza el espíritu (su télesis, la ideología del constituyente), de modo que sus reglas, sus principios y valores hayan de cobrar vigencia y efectividad en la práctica y que se compadezcan con los fines que aquella consagra. Esto es, una mirada abierta, extensiva y dinámica de aquellos.

Esta aclaración se hace necesaria frente a la evidente vaguedad y ambigüedad, y aún incoherencia, de los términos que contiene el convenio, de cara a la existencia de una causa penal en curso y trámite actuales por ante jueces nacionales.

Es evidente que el MEMORÁNDUM ofrece flancos a reparos constitucionales varios (por su contenido o materia) que seriamente amenazan su legalidad y legitimidad:

El artículo 27 de la C.N. establece que, la política internacional plasmada en la celebración de tratados impone en cuanto a éstos que se trate de "...tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución".

Es decir, "...el constituyente generalizó el objetivo de la norma a una supremacía generalizada de la Constitución, en beneficio de todos los habitantes...", tal como lo enseña Humberto Quiroga Lavié al comentar la norma (Constitución Argentina Comentada, tercera edición, Zavalía editor, pág. 152).

Y si algo queda patente en el caso es que dudosamente este acuerdo se ajusta a tales principios.

¿Por qué? Porque la Argentina no puede dejar de ser soberana, delegando o resignando jurisdicción. No puede hacerlo, así sea tan solo generando el riesgo de subordinación a los designios o intereses foráneos, iraníes en este caso.

Comparto y hago propia la afirmación hecha por distintos legisladores –y expertos- alimentada sin dudas por la palpable vaguedad, ambigüedad e incoherencias de los términos del MEMORÁNDUM, en el sentido de que se estaría delegando y/o resignando -con su aprobación y ratificación- la jurisdicción que sólo le corresponde a los tribunales nacionales.

Reparemos en el hecho de que la reforma del 94, en la necesaria búsqueda de compatibilización con la constitucionalización de los derechos humanos y los procesos de integración en ciernes, intentó flexibilizar el esquema rígido de la Constitución histórica, pero lo hizo acotadamente en su texto por vía del artículo 75, en sus incisos 22 y 24 de la Constitución Nacional.

La Constitución no sólo no autoriza la delegación de la soberanía nacional, sino que tampoco autoriza la delegación de competencias y jurisdicción fuera del acotado margen en que aquellos lo permiten, esto es, dentro del esquema de tratados de derechos humanos (de ahí la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece el Pacto de San José de Costa Rica o la de la Corte Penal Internacional aprobada por ley 25.390) y de integración, y en este último caso a favor de organizaciones supranacionales, en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos en el segundo caso. Y nada de esto acontece en este caso: el MORANDUM DE ENTENDIMIENTO no es una cosa ni la otra. Lo cual cierra todo camino al desborde.

Esto sólo impide seguir adelante con el asunto, sin mayor aditamento.

La cláusula 1 propone que la pretendida Comisión de la Verdad sea creada "...para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina...".

Hete allí, pues, un dato clave de que lo que se pretende es la sumisión de la Justicia argentina, porque el compromiso no lo es en orden a que lo asuma y cumpla el gobierno a través de sus autoridades "políticas", sino que pesa sobre "las autoridades judiciales".

Y aquí se advierte, de paso, una clara intromisión del Ejecutivo en una cuestión que en manera alguna le atañe y sobre la que no puede tener ingerencia, cual es la de "...ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes..." (art. 109 de la C.N.), como bien lo vienen apuntando algunos juristas (tal el caso de Mario Midón) y el propio abogado de la AMIA.-

No tiene sentido esa suerte de superintendencia o revisión sui géneris impuesta a la Justicia argentina.

- Razonamiento que viene a reforzar la cláusula 2.- al deferirlo todo al dictado de las normas de procedimiento a la propia comisión.

La pregunta obligada es para qué: ¿acaso se trata de la pretensión de poner en tela de juicio todo lo actuado por las autoridades judiciales del país? ¿Esto constituiría un avance en la causa?

Y es este punto llama poderosamente la atención la manera en que se esmera el oficialismo en poner en tela de juicio la investigación argentina, cuando en realidad la Justicia argentina se sobrepuso y enmendó sus propios errores con la colaboración de familiares de las víctimas

-Como también la cláusula 3 cuando al final refiere que "...los comisionados llevarán adelante una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados...".

Esta misma cláusula 3.- comienza expresándose en la misma línea de despropósitos.

El "Una vez que la Comisión haya sido establecida..." con que principia permite presuponer o alimentar la idea de que eso –la creación y el establecimiento de la Comisión de la Verdad- acaecerá algún día, de algún año, tal vez.

En suma: pareciera que la VERDAD y la JUSTICIA se mudan a Teherán.

-Tampoco encuentro sentido alguno en punto a las recomendaciones de que da cuenta la cláusula 4, puesto que, mediando como media una investigación, una causa y autoridades judiciales argentinas, no se explica ni el cuándo, ni el a quién, ni el para qué de las mismas.

-Ni lo tiene la presencia de autoridades judiciales argentinas en el mentado contexto, tal como lo prevé la cláusula 5., sino para validar con su presencia la interferencia en su labor, el sacrificio de su jurisdicción y competencia y el de nuestra soberanía. Pues según se desprende del segundo párrafo, pareciera que su rol es más bien el de un "convidado de piedra".

Todo discurre en la misma línea dentro del MEMORÁNDUM.

Lo expresado hasta aquí, sin perjuicio de poder apuntar la existencia de otras reglas y principios constitucionales que conducen al mismo resultado:

Comenzando por el fin expresado en el Preámbulo de "...afianzar la justicia...", que como piedra de toque inexpugnable o Norte compromete cualquier acción de gobierno, especialmente aquí en el respeto de los tribunales creados en virtud de la Constitución y de la competencia asignada a los mismos (arts. 116 y 117 C.N.) en tanto herramienta y dispositivo enderezados a tal propósito supremo.

Siguiendo luego por la igualdad ante la jurisdicción, que conlleva a la imperiosa unidad de la misma, que impediría someter a algunos a los jueces naturales mientras se sustraería a otros de los mismos, derivándolos en una suerte de "Comisión Especial" (prohibida por el artículo 18 de la C.N.), que podrá no ser la que juzga, pero cuya intervención sin dudas traba y conspira contra la intervención del juez nacional interviniente y perjudica el avance del expediente, con perjuicio para la causa y afectación de la VERDAD proclamada como el bien supremo buscado, amén del CASTIGO a los responsables.

¿A título de qué se saca a los investigados del "juez de la causa", afectándose de paso la regla de "territorialidad" que consagra el Código Penal?

Imposible resulta –valga la paradoja- pretender destrabar una causa judicial apelando a un mecanismo que si algo permitirá es lo contrario: trabarla, entorpecerla, cuando no, ponerle un punto final (como descarnada pero gráficamente lo describiera la señora Laura Grinberg).

No viene a dejar aclarado que se trata de un complemento necesario para el avance de la causa, no tiene asignado un valor instrumental a su respecto, no refiere la aplicación de la ley sustantiva y procesal argentina ni asigna el valor, sentido y efectos del material –pruebas- obtenidas), ofrecen más sombras que luces.

Vaguedad entendida como imprecisión del significado de las palabras o por su textura abierta; ambigüedad por la equivocidad semántica o por las dudas acerca de las consecuencias lógicas que permiten inferirse de los textos. De todo esto ilustra el MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO y vaya la absurda paradoja de dar en llamar MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO a algo que no se entiende ni tiene explicación alguna, y respecto de lo que no he escuchado hasta el presente un argumento suficientemente claro que persuada acerca de su cabal sentido y valor.

No le encuentro sentido, y mucho menos lo encuentro guiada en las palabras del mensaje de la presidente que preceden al texto del MEMORÁNDUM, pues la contradicción con sus términos es flagrante. Dicho de otro modo, hay una patente inconsistencia entre lo que consagra el MEMORÁNDUM y el mensaje presidencial con que se lo eleva al Congreso. Una discordancia e incoherencia entre los propósitos expresados y con el modo de tratamiento asumido.

Una reflexión final sobre el tratamiento que el asunto ha merecido por parte de esta Cámara, y del Congreso mismo.

Uds. tienen la legalidad que les ha otorgado el voto popular, pero la legitimidad que se construye todos los días, con actos de gobierno que tienen en el contrato social y político más importante que aceptamos todos los argentinos y que es nuestra Constitución los vienen deshilachando día a día y ustedes lo saben.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CARRANZA

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Señor presidente, señores diputados:

Hoy venimos a decir que NO.

Que NO a la indolencia y al terrorismo.

Que NO a la “impunidad para todos”.

Que NO al olvido y a la violencia.

Que no a la banalización y a tanta indiferencia ante las tragedias que ha sufrido nuestro pueblo.

No creo necesario aclarar a los señores diputados que no es este un mero acto de recordación o testimonio a las víctimas de ambos atentados. Este es un acto institucional de la máxima jerarquía en orden a uno de los poderes del Estado, el LEGISLATIVO y que por lo tanto cada uno de nosotros deberá asumir su responsabilidad ante la historia y las propias víctimas.

Con la ayuda del oficialismo, hoy vamos a dar sanción definitiva a una ley del PARLAMENTO ARGENTINO que dará por terminado nuestro derecho inalienable, imprescriptible e indeclinable de acceder a la verdad y a una decisión judicial justa.

La verdad la necesitan las víctimas, en primer lugar, pero también toda la sociedad argentina y la comunidad judía en especial.

Hoy vamos a sepultar toda esperanza en encontrar justicia en las DOS tragedias que ocurrieron en el país, protagonizadas por un grupo terrorista, porque los dos atentados deben ser analizados juntos ya que los dos fueron casi iguales cometidos por asesinos patrocinados por el régimen radicalizado que gobierna IRAN hace más de treinta años.

Ambos atentados fueron cometidos por las mismas manos del odio y del terror que eligieron no sólo un país, el nuestro, sino una comunidad pacífica, una colectividad trabajadora, un pueblo milenario y un objetivo quizás religioso o confesional, tal vez porque el terrorismo nunca tiene causas, ni patria, ni bandera, sólo granadas y explosivos, como lo ha dicho Vahidi su ministro de Defensa prófugo de la Justicia !!!

Pero las víctimas reclaman justicia y nosotros se la estamos negando hoy. ¿Quiénes somos nosotros para negarles JUSTICIA?

No logro entender por qué razón la llamada “COMISIÓN DE LA VERDAD” no incluye la investigación sobre el primer atentado a la embajada de Israel. Si lo que se busca es la verdad, realmente, ¿no lo entiendo!! Deberá llamarse entonces la “Comisión de la Mentira”.

Permítanme decirles que también estamos dejando impune el primer atentado de 1992. ¿Por qué no se lo ha incluido en el memorándum? Hoy quedan impunes para siempre esas dos tragedias y esos crímenes nunca más serán juzgados.

¿Alguien me puede explicar por qué causa sólo se somete a esta comisión el atentado a la AMIA cuando es muy probable que éste haya sido cometido por haber quedado impune el primero, el de la embajada? La impunidad deja abierta la posibilidad de nuevos hechos, y lo que es peor, que los responsables caminen por la calle en libertad. Queda también la sensación de que el Estado argentino, no sólo no pudo advertir o anticiparse a los hechos, sino encontrar a los responsables y juzgarlos.

El propio mensaje del P.E. desarrolla en forma argumental los dos atentados, pero luego concluye sólo en uno, ya que el acuerdo firmado sólo se refiere al atentado de 1994 a la AMIA. ¿Hubo algún olvido, pedido unilateral, solución transaccional o así fue la negociación diplomática?

Este no es el mejor camino ni la única solución como se ha escuchado decir a legisladores del oficialismo, ni tan siquiera es una salida ni un arreglo a una disputa, es una verdadera claudicación que no debemos ni tenemos que convalidar.

Además se advierte cierta incongruencia en la exposición de motivos elevada por el Ejecutivo. Por ello, quería preguntar en la confusa y tumultuosa reunión de comisiones y no pude, pero lo dejo planteado hoy en este recinto: es que ante la anuencia del gobierno de Irán a firmar el convenio debió dejarse expresamente aclarado que la llamada “comisión” debió analizar y expedirse sobre los dos atentados, pero no me ha sido posible -reitero- por la retirada súbita e intempestiva del señor ministro de Relaciones Exteriores en la reunión.

Por otro lado, dejo además sentada mi negativa al presente acuerdo por las varias y numerosas razones técnicas que nos hacen dudar de su utilidad práctica, además de su viabilidad constitucional.

Las objeciones formales al acuerdo lo hacen totalmente inaceptable y no garantizan para nada la comparecencia o sometimiento de los imputados al juicio por lo que esta llamada “COMISIÓN DE LA VERDAD” está impedida ab initio de lograr su inconfeso cometido, porque quiero aclararles a los señores diputados que el convenio no tiene objeto, es decir no dice para qué fue creada la Comisión ni los fines que persigue, ni tampoco tiene plazo por lo tanto sin objeto, sin plazo y tampoco tiene un procedimiento. ¿Pues entonces, qué es lo que estamos aprobando? Una expresión de deseos, una carta intención o qué clase de tratado es cuando está indeterminado en su objeto, en el plazo y en el procedimiento. Es decir, además de su nombre incorrecto, tenemos un contenido impreciso, vago e incierto que, en materia penal precisamente, nada menos, lo hace vulnerable e improcedente, habida cuenta de que atenta contra un poder del Estado.

Por todo ello manifiesto nuestro más absoluto rechazo al proyecto luego de haber escuchado a los organismos mas representativos de la colectividad judía y también a las víctimas, que son las primeras que deberían haber sido consultadas por su derecho a participar en el proceso judicial, derecho humano fundamental reconocido por los tratados internacionales y por nuestra propia legislación local, pero que ha sido ignorado.

Toda esta abstracción que nos lleva a un “limbo judicial” y que tiene por fin deslegitimar lo actuado por la Justicia argentina y desacreditar lo que ha investigado el Ministerio Público Fiscal, toda vez que ahora queda en suspenso y paralizado el trámite judicial, porque este tratado está por encima del Código Penal y del Código Procesal Penal Argentino. No tengan dudas.

En definitiva, este convenio no es beneficioso para el país; se oponen todos los actores y protagonistas involucrados. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria han expresado su desacuerdo, es decir, no reúne el más mínimo consenso para lo que se entiende una verdadera política de Estado. Va a permitir que las alertas rojas sean revocadas en pocos meses o semanas quizás, según lo aclaró el abogado de la AMIA e Irán lo puede pedir ya mismo, si es que no lo ha hecho, y ante la sola posibilidad que Interpol pueda cancelarlas de oficio, como ya ocurrió antes con esta misma causa, hace necesaria nuestra postura negativa.

Por todo lo expuesto, adelanto el rechazo al presente acuerdo.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CHIENO

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

El objetivo principal del Memorándum de Entendimiento que estamos discutiendo es el de avanzar en una causa que lleva detenida más de una década. Los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA convierten a la Argentina en un Estado víctima del terrorismo, título muy poco loable que – afortunadamente – ningún otro país de Latinoamérica puede ostentar.

Mucho se ha hablado en el debate respecto de la “Comisión de la Verdad”, la cual sería inconstitucional por quitarle prerrogativas a la Justicia argentina. Al respecto quiero citar en forma

textual al artículo cuatro del Memorándum: “(...)la Comisión expresará su visión y emitirá un informe con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes. Ambas partes tendrán en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras.”

Desde 1994 hasta hoy hemos probablemente visto más retrocesos que avances en esta causa. Y esos mismos retrocesos han generado que, a pesar de que uno de los acusados fuera detenido en el exterior, hoy no podamos alegrarnos de su captura definitiva. La Argentina en su momento adoleció de suficientes pruebas condenatorias. En este momento la situación es otra, y son esas las pruebas que la comisión analizará para luego recomendar – verbo muy distinto a decidir, imponer, determinar – a la Justicia argentina. Y siempre lo hará en el marco de la ley.

A pesar de la claridad del texto y de las explicaciones del señor canciller, el debate difícilmente pudo superar ese punto. Pocas voces fuera del oficialismo les han reconocido a la señora presidenta y al señor canciller el hecho de que hicieran un punto importante e indeclinable de su política exterior la resolución de este conflicto. Y fue esa misma buena voluntad y constancia en el reclamo lo que logró que la República Islámica de Irán se sentara a negociar.

Y al respecto también quiero aclarar que acá no se están juzgando las opiniones de un gobierno extranjero, ni su trato hacia las mujeres y minorías, ni su fe religiosa ni la existencia o no de armas nucleares. Se está juzgando a una serie de ciudadanos iraníes que no han autorizado a salir de ese país para ser juzgados. Pocas veces será más acertado el dicho, “si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma”. Irán aceptó que la Justicia argentina juzgue a los acusados en su territorio con leyes argentinas. Metodología legal ampliamente utilizada alrededor del mundo y que de ninguna manera constituye ni una pérdida ni una entrega de soberanía a otro país.

También se ha argumentado respecto a la desconfianza natural que debería tenerse al gobierno iraní. De esa desconfianza – repito, natural – se deduce que van a infringir el acuerdo.

La República Islámica de Irán se comprometió, frente a la Argentina, frente a su pueblo y frente a la comunidad internacional, a llevar adelante este Memorándum. Pero nadie pudo ofrecer una deducción lógica de por qué lo romperían luego de asumirlo.

Si hoy la República Islámica de Irán es una “oveja negra” en el sistema internacional, no lo es por causa de la Argentina. Los países que deciden quien es oveja negra y quién no, no están preocupados por la AMIA. Y sin entrar en detalles u opiniones respecto de lo correcto o no de excluir al régimen teocrático de las relaciones con las potencias centrales, hoy la Argentina e Irán son países similares: del Sur, en vías de desarrollo, la Argentina extendiendo sus relaciones en Medio Oriente e Irán haciendo lo propio en Sudamérica. No sería conveniente ni meritorio para ninguno de los dos romper el acuerdo, no sólo por las reacciones internas, también por la imagen que sentarían ante el concierto internacional.

Irán se comprometió con todos nosotros. Dejemos de buscar excusas y comencemos a trabajar todos juntos por la resolución de la peor masacre en la Argentina, y por el juicio y castigo a todos los culpables.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO DATO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

En sede internacional y de conformidad al ordenamiento jurídico argentino, el Presidente de la Nación tiene la atribución de negociar, concluir y firmar tratados, convenciones y los concordatos con la Santa Sede (artículo 99 inciso 11 CN). El art. 99 de CN, inc. 11 establece que el PEN “Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras [...]”.

En el ámbito interno, la Constitución Nacional exige que los tratados con las Naciones extranjeras sean aprobados por el Congreso de la Nación; art. 75, inciso 22: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”. El Congreso tiene la competencia para aprobar o desechar esos acuerdos internacionales entre países o con organismos internacionales (artículo 75 inciso 22 y 24). El Congreso aprueba los tratados por medio de una ley formal, pero el acto no es estrictamente legislativo sino que integra la voluntad estatal en la celebración del tratado. La ley aprobatoria debe publicarse en el Boletín Oficial.

El tratado aprobado por el Congreso debe ser ratificado por el Poder Ejecutivo, como jefe del Estado a cargo de las relaciones internacionales. El procedimiento en este caso bajo análisis, por tratarse de un tratado bilateral, se operará por medio del cambio de ratificaciones entre Estados.

Ahora bien, hablar sobre la relación del Derecho Internacional con el Derecho interno de un país nos remite a dos problemas fundamentales, esto es, el de la integración –cómo se incorpora el derecho internacional al derecho interno del país- y el de la jerarquía –del derecho internacional en relación al derecho interno.

- En cuanto a la integración, en el derecho interno argentino hay una directa integración de las normas internacionales por las que el país está vinculado (arts. 31 y 118 CN); sean tratados, costumbre o principios generales de derecho.
- En relación a los tratados, el art. 31 CN establece que existe un bloque normativo constituido por la CN, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados celebrados con las Potencias extranjeras. Estos tres procesos de creación de normas jurídicas -fuentes- son la ley Suprema de la Nación.
- En el ordenamiento argentino, el Derecho Internacional es derecho interno a partir del momento en que el Poder Ejecutivo, en virtud de la atribución constitucional de manejar las relaciones exteriores del país, manifiesta internacionalmente el consentimiento en obligarse y, en el supuesto de tratados, éste será norma interna cuando en el ámbito internacional entre en vigor para el país.
- En relación al problema de la jerarquía, el ordenamiento argentino dispone la supremacía de los principios de derecho público contenidos en el art. 27 CN sobre toda norma, interna o internacional. Estos principios de derecho público tienen una jerarquía superior desde el momento en que todo acuerdo del que sea parte la Argentina debe estar en “conformidad” con ellos. Esta jerarquía, implícitamente, también es aplicable a las normas consuetudinarias ya que en Derecho Internacional no existe una jerarquía entre sus distintas fuentes. Tanto los tratados, como la costumbre internacional y los principios generales de derecho se encuentran en un orden jerárquico inferior a los principios de derecho público establecidos en la CN.
- El principio general es la superioridad de todos los tratados internacionales en vigor para la Argentina respecto de las leyes nacionales y de los ordenamientos provinciales (art. 75 inc. 22 1º párr.).
- Los tratados de derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN) tienen jerarquía constitucional. El Poder constituyente entendió que los contenidos de estos instrumentos no derogan artículo alguno de la primera parte de la CN y que deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la CN.
- El art. 75 inciso 22, 2º párr. menciona que los instrumentos se aplican “en las condiciones de su vigencia”. Se trata de un principio general aplicable a toda norma internacional que integra el derecho interno. Los tratados integran nuestro derecho interno en los términos en los que el Estado se obligó internacionalmente (normas convencionales) y para el caso de las normas consuetudinarias, debe interpretarse su alcance y naturaleza tal como rigen en el ámbito internacional.
- El Derecho Internacional en vigor para el país es parte del derecho federal. Los tratados en vigor para la Argentina, al igual que el derecho consuetudinario que le es oponible, integran el derecho interno; tienen una jerarquía inferior a los principios de derecho público contenidos en la CN y superior a las demás normas del ordenamiento nacional o de los demás ordenamientos provinciales. Los tratados, sea cual fuere la forma en que fueron concluidos; en buena y debida forma, habiendo sido enviados al Congreso Nacional, para su aprobación o rechazo; o en forma simplificada, gozan de la naturaleza jurídica de tratados, y como tales integran el derecho interno en el orden de prelación establecido.

- Los tratados pueden contener normas operativas y normas programáticas; de acuerdo a la voluntad que han sostenido las Partes, al momento de celebrarlos. Las normas operativas generan derechos y obligaciones que pueden ser invocados directamente por los individuos y aplicados por los Tribunales nacionales sin necesidad de medidas internas que los reglamenten. En el caso de las normas programáticas es necesaria la adopción de medidas internas que los reglamenten a fin de que sus disposiciones puedan ser invocadas y aplicadas.

Ahora bien, el derecho internacional de nuestros días se nutre de valores éticos: la paz y la seguridad internacionales son valores de primordial importancia. A partir de 1945 hay valores –amparados en su contenido por normas jurídicas- que tienen el carácter de jus cogens por responder al mínimo jurídico esencial que la comunidad internacional precisa para su supervivencia, esto es, la prohibición del recurso a la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El amparo de estos valores, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, supone para el derecho internacional un mayor grado de efectividad en pos de la estabilidad de las relaciones internacionales.

Por ello, puede decirse que el moderno derecho internacional es un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones entre quiénes son sus sujetos, integrado por dos subsistemas. En primer término, un subsistema de coordinación, de tipo descentralizado, basado en la igualdad soberana de los Estados, y que tiene su fuente primaria en el acuerdo de voluntades. Los intérpretes de las normas así creadas son los Estados, y los mismos Estados controlan recíprocamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Y, al mismo tiempo, coexiste con un subsistema de cuasi-subordinación, en el que el control de las obligaciones asumidas en el marco del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales se confiere al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

El Estado soberano caracteriza por no depender de ningún orden jurídico estatal ni de ningún otro sujeto del derecho internacional; por el contrario, sólo depende de los derechos y obligaciones que en el marco del derecho internacional, él mismo ha generado. Una expresión concreta de la soberanía es la igualdad de los Estados, recogida en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas - artículo 2.1-, y en la Resolución A/RES/2625 de la Asamblea General de la ONU, del 24 de octubre de 1970, “Declaración relativa a los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. Esta Resolución identifica los principios del derecho internacional, entre ellos, la igualdad soberana entre los Estados, la integridad territorial y la no intromisión en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados, entre otros.

La Resolución A/RES/2625 establece la obligación de los Estados de cooperar entre sí, de conformidad con la Carta. La resolución declara y desarrolla progresivamente las normas del derecho internacional ya existentes así como los principios incluidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Si bien sólo se trata de una Declaración, en ella se considera que la fiel observancia de los principios del derecho internacional, la cooperación entre los Estados y el cumplimiento de buen fe de las obligaciones contraídas por los Estados, de conformidad con la Carta, es de la mayor importancia para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y para la realización de los demás propósitos de las Naciones Unidas.

Ahora bien y tal como ya lo hemos señalado, en el marco del subsistema de cooperación, los Estados establecen relaciones en el ámbito internacional a través de la celebración de tratados. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 regula lo relativo a la celebración de tratados por escrito entre Estados, esto es, “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación”.

Por ello y teniendo en cuenta los elementos señalados, es decir, la cooperación internacional, la igualdad soberana de los Estados y la voluntad común de establecer en un instrumento internacional – memorandum- un mecanismo que aproxime a las Partes, Argentina e Irán para alcanzar el objeto y fin del tratado, que es avanzar en la investigación de la causa AMIA, puede concluirse que el tratado bajo examen no implica ninguna cesión de soberanía, por el contrario, se enmarca en el subsistema de coordinación del derecho internacional y tiene su razón de ser en la voluntad soberana de los Estados que lo han celebrado.

Sin perjuicio de lo expuesto, y teniendo en cuenta que el éxito o el fracaso de lo dispuesto en el Memorandum depende de modo exclusivo de la voluntad soberana de los Estados, no debe dejarse de lado la relevancia de la constitución de una Comisión de la Verdad, a pesar de que en general y normalmente, esta tipo de Comisiones se constituyen bajo circunstancias que sí podría reconocerse que son diferentes a las tenidas en cuenta en relación a la Causa AMIA.

Es decir, en primer término en el ámbito internacional, una Comisión de la Verdad es un órgano de investigación oficialmente autorizado, de carácter temporal y no judicial que dispone de autorización para tomar declaraciones, realizar investigaciones y estudios y celebrar audiencias públicas para finalizar su labor con la publicación de un Informe.

Estrictamente, no son un sustituto de la acción judicial pero ofrecen la posibilidad del explicar el pasado, en aquéllos supuestos de imposibilidad de enjuiciamiento por crímenes masivos por falta de capacidad del sistema judicial o por una amnistía o para reforzar un futuro enjuiciamiento.

A diferencia de los tribunales en general y de los tribunales internacionales, en particular en los que existen normas internacionales que disponen una estructura, miembros, atribuciones y normas procesales, las comisiones de la Verdad difieren de país en país.

En segundo término, el punto 5 del Memorandum de Entendimiento prevé que la Comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja. En general, las Comisiones sólo pueden entrevistar a cualquier persona que pueda proporcionar información pertinente; promover la cooperación de las autoridades públicas y realizar visitas sobre el terreno. Por ello, en el supuesto bajo análisis y sin perjuicio del alcance de las funciones y actividades de las Comisiones de la verdad en general, la información recopilada por estas comisiones puede ser de interés para los encargados de investigar casos para su enjuiciamiento, aun mientras la Comisión sigue funcionando o al finalizar su actividad. Por ello, suele decirse que una Comisión de la verdad es complementaria de la acción judicial y para que ello se cumpla debe disponerse de sistemas de comunicación entre la oficina del Fiscal y la comisión con el fin de examinar todas las cuestiones.

En tercer término, y aunque no es un tema menor, una vez ratificado el tratado de conformidad al procedimiento previsto en el punto 6 y comience su vigencia, frente a algún incumplimiento o violación, siempre cabe el instituto de la responsabilidad internacional. El punto 9 del Memorandum dispone que cualquier controversia sobre el alcance de sus términos sea resuelta por medio de consultas entre las Partes.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FERNÁNDEZ

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorandum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

El atentado a la AMIA fue un atentado con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en la Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas. Los asesinos y cómplices locales violaron nuestras fronteras y nuestras leyes.

La Justicia de nuestro país sostiene que el ataque fue cometido por el movimiento islámico libanés Hezbollah realizó con el apoyo estratégico y económico del gobierno de Irán. El Estado argentino, representado por los fiscales que investigaron el ataque, acusó en 2006 al gobierno de Irán y realizaron un pedido de captura internacional para funcionarios iraníes.

Valoramos la actitud que han tenido en su momento los presidentes Kirchner y Fernández ante Naciones Unidas durante todos estos años, es más: “El año pasado, aquí mismo, la presidenta volvió a solicitar a las autoridades de la República Islámica de Irán que accedieran a lo requerido por la Justicia argentina. La presidenta dijo “Que en la Argentina regían garantías constitucionales. Que el principio

de que nadie es culpable hasta tanto sea demostrado por sentencia firme es una realidad que se da a lo largo y a lo ancho del país. Que hay garantías de libertad de administración de justicia”.

Hay un cambio de estrategia internacional en relación con la búsqueda de la verdad y la Justicia en el caso, las preguntas que debemos hacernos todos, es ¿por qué?. Entendemos que el “Memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán”, es de una gravedad preocupante para todos los argentinos.

En tanto que puede iniciar un camino que lleve a la impunidad definitiva de los sospechosos iraníes que forman o han formado parte del gobierno de ese país, como su actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi. En este sentido es de recordar que al menos dos de los imputados con semiplena prueba son candidatos presidenciales, en aquel país. En cuanto al texto específico del acuerdo, creo que hay muchas dudas e inconsistencias en la letra del mismo.

En el punto 1 Textual “Se creará una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades de la Argentina y de la República Islámica de Irán.

Se crea una comisión, de la “verdad”, ¿esto significa que todo lo hecho por la Justicia argentina es una mentira?

“La Comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán...” No sé por qué en Teherán y no acá “...Para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales INTERPOL ha emitido una notificación roja.

Tampoco está claro el punto 2 del Memorándum de Entendimiento referido a las reglas de procedimiento, donde se sostiene que luego de consultar a las partes, la Comisión establecerá sus reglas de procedimiento que serán aprobadas por las partes. En ningún lado dice que se va a aplicar la ley argentina. Acá dice que se van a dictar reglas de procedimiento.

En el punto 5 habla de un compromiso de consultar a los familiares de las víctimas a las instituciones de la comunidad judía argentina, que es una de las más importantes del mundo fuera de Israel.

También se iba a consultar a los sectores políticos con representación en este Congreso, cosa que lamentablemente no se ha cumplido, así como tampoco se escuchó al juez de la causa y al fiscal, lo cual lamentamos muchísimo.

En la provincia de Corrientes existe una importante comunidad judía y no tengo conocimiento de que haya un solo iraní viviendo allá. Nosotros representamos a nuestros habitantes comprovincianos, a los que tenemos que escuchar y defender sabiendo que son argentinos de religión judía.

En definitiva: La firma del memorándum en cuestión causa un grave daño a nuestro país y sus ciudadanos. Al convertirnos en un país incapaz de sostener seriamente una postura o de mantener una política exterior de Estado, en un tema que la afecta directamente, con la firmeza que la envergadura del caso amerita. Desconociendo, además, el derecho interno que forma el corpus constitucional e incluso de tratados internacionales que tienen esa jerarquía.

Es por todo esto que nuestro voto será negativo con la absoluta convicción de que estamos haciendo lo que corresponde por el bien de nuestro país y sus habitantes. Muchas Gracias

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GALLARDO

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Quisiera darle a este tema, el valor que realmente se merece. Ustedes, mis pares, se preguntarán por qué hago esta afirmación, si la mayoría de nosotros está comprometido con la búsqueda de la verdad de tan horroroso atentado.

Quiero referirme expresamente a esta compulsa política que se ha desatado y que nada tiene que ver con lo que verdaderamente nos debería ocupar. Parece que del lado de la oposición no sólo ha primado la ignorancia de la magnitud de este acuerdo, sino la falta de respeto y la confrontación por el solo hecho de desvirtuar este importante paso, con miramientos a las elecciones legislativas de octubre.

Un párrafo aparte y que como tucumana no puedo dejar de mencionar, tiene que ver con las acusaciones acerca de la legitimidad para sentarse en su banca que tendría la compañera Beatriz Mirkin. Justo quienes nos viven acusando de no respetar las formas son quienes pretenden, montados en el dolor de muchos compatriotas, hacernos violar los reglamentos de este Parlamento. Señores diputados de la oposición: el reglamento es para respetarlo y no para acomodarlo según conveniencia propia. Eso es lo que estamos haciendo en este caso por lo que la legitimidad de la diputada Mirkin, a la que nunca se le aceptó la renuncia a su banca, es absolutamente válida.

El Memorándum de Entendimiento firmado con Irán "es un elemento que permite abrir puertas para seguir avanzando en la investigación, más allá de lo que hace el fiscal y el juez de la causa" del atentado a la AMIA.

Con respecto a las aseveraciones que estamos escuchando de los diputados opositores es importante ser claro y contundente para que la sociedad que nos escucha no caiga en confusiones, muchas veces generadas por los medios monopólicos que con mentiras y tácticas burdas quieren desprestigiar a nuestra presidenta como así también a cualquier funcionario que quiera simplemente hacer su trabajo. La oposición se equivoca cuando en algunos de los conceptos que desarrollan dicen que todo lo que hemos hecho hasta ahora quedará en el olvido, y esto es totalmente falso. De la simple lectura del memorándum surge que la comisión que se constituirá tomará y estudiará la causa, las pruebas que allí constan (con todo lo actuado) y en todo caso pedirá más información y que se amplíen las pruebas que ya están producidas. NO SE PUEDEN IGNORAR.

En ningún momento, ya lo aclaró el canciller Timerman, renunciamos a la aplicación de nuestro derecho procesal penal. Bien en claro quedó en el plenario de comisiones que, en el caso de que se fracase, la causa sigue en el mismo lugar. Si no se avanza no se retrocede ya que el memorándum indica que el resultado que arroje la investigación de esta comisión de juristas internacionales es no vinculante: por lo tanto, en ningún caso se estaría avalando ni invalidando lo actuado.

Yo soy una convencida de que se debe avanzar en la búsqueda de la verdad. Comprendo las voluntades políticas, y las reconozco. Acá hay un gobierno que ha tomado la decisión política de avanzar en la búsqueda de la verdad. Néstor Kirchner y Cristina han hecho un reclamo permanente y constante ante la ONU, exigiendo la colaboración de Irán con el objeto de resolver la causa. Y esto no es más que un intento de seguir en ese camino, sobre todo cuando habíamos llegado a un punto donde la causa estuvo paralizada, desvirtuada y corrompida. Ya han pasado 19 años de esperar por la verdad; ya es hora de que se haga justicia, Por eso, adelanto mi voto positivo a la iniciativa.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GARCÍA LARRABURU

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Nuestro deber como legítimos representantes del pueblo argentino es velar por que haya justicia con las 85 víctimas del atentado terrorista más grande que sufrió nuestro país a lo largo de su historia. Este Memorándum de Entendimiento expresa esa posibilidad, la de destrabar una causa que está paralizada -hasta el momento- por la imposibilidad de tomar indagatoria a los acusados. Sin lugar a dudas, hubiéramos preferido la extradición y juzgamiento en la Argentina, o en todo caso en un tercer país neutral, pero la sucesiva negación de la República Islámica de Irán, nos dejó imposibilitados de avanzar en este sentido con la causa. ¿Ante esto que hacemos? ¿Dejamos que pase lo mismo que con la investigación por el atentado a la embajada de Israel?, ¿Tomamos una actitud puritana que derive en impunidad de hecho?

Nuestra presidenta decidió otro camino, más audaz y que le valió duras críticas, pero que es el único que, dadas las circunstancias, puede conseguir sentar a los cinco imputados iraníes en el banquillo de los acusados frente al juez competente en la causa, doctor Canicoba Corral, lo cual queda explícitamente indicado en el punto cinco del memorándum. Claro que puede ocurrir que Irán incumpla el tratado de entendimiento; es algo que escapa a nuestras posibilidades, pero si ello llegara a suceder estaría reconociendo su culpabilidad y la condena de todo el pueblo argentino y de la comunidad internacional sería contundente.

Creo que todos los aquí presentes debemos mostrar honestidad intelectual y reconocer que recién a partir del Gobierno de Néstor Kirchner se encaminó la investigación judicial del atentado, signada por un oscuro encubrimiento de 10 años. ¿Dónde estaban los referentes de la oposición mientras constantemente se destruían las pruebas del horror? ¿Qué decían mientras pasaban los gobiernos y los familiares de las víctimas sólo recibían una palmadita en el hombro cada 18 de julio? Llamativo, al menos, resulta que este Gobierno sin haber sido responsable, cómplice o encubridor, reciba las más feroces críticas del resto del arco político. Se repite en nuestra historia el hecho de que a los peronistas siempre nos atacaron por lo que hacemos, como avanzamos. Si no tuviéramos voluntad de acción y nos dedicáramos a dejar pasar el tiempo sentados en nuestros escritorios, otra bandera política nos enrolaría.

Estamos frente al Gobierno de la memoria, verdad y justicia; lo demostró desde el día uno derogando las leyes de obediencia debida y punto final, juzgando y condenando a los represores de la última dictadura cívico- militar; avanzando en la investigación judicial de este macabro atentado, separando a los magistrados que entorpecieron la causa, abriendo los archivos, exponiendo toda la documentación disponible, haciendo que los funcionarios de la SIDE concurren a declarar, pidiendo a Interpol el pedido de captura de los señalados por la investigación como los responsables de la masacre, planteando constantemente ante Naciones Unidas y el resto de las instancias internacionales la necesidad de resolver esta causa; y ahora realizando este esfuerzo de entendimiento con Irán –por más costo político que le ocasione- con el único objetivo de conocer la verdad y a través de ella alcanzar la justicia que desde 1994 reclaman incansablemente los familiares y amigos de las víctimas de la AMIA.

Por eso, señor Presidente, considero una falta de respeto a la inteligencia del pueblo argentino sostener que este memorándum oculta intereses comerciales con el país islámico. Quienes irracionalmente fantasean, especulan e imaginan este tipo de teoría conspirativa, deben estar siguiendo su propia línea de pensamiento netamente economicista y mercantilista; pero que dista mucho de ser la lógica que se prioriza desde el 2003. De hecho, fue durante la gestión de La Alianza cuando se incrementó la relación comercial con Irán, y no en la nuestra.

Otro punto que nos objetan es el de haber entablado diálogo con una Nación que no respeta los patrones culturales de occidente. Ante esto, creo que no es necesario aclarar nuestro más enérgico repudio al régimen iraní en cuanto a su negación del Holocausto, como del Estado de Israel, a la caracterización que realizan de las mujeres, el desconocimiento de los Derechos Humanos, y otras cosas que no hacen a la cuestión que hoy nos convoca. Pero tampoco creo que debemos ser hipócritas. Los que quieren invalidar este acta de entendimiento por estos motivos, son los mismos que se deslumbran con el imperio que ha hecho de la guerra su industria de cabecera; son los mismos que ahora dicen estar representando a los familiares de las víctimas y designaron como jefe de la policía metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires a Jorge Alberto Palacios, procesado por encubrir la causa del atentado que hoy nos tiene reunidos. Reitero, tengamos un poco de honestidad intelectual para brindar un debate serio. Acordar que magistrados argentinos, de acuerdo a nuestra ley procesal tomen indagatoria en Teherán, no es convalidar este régimen ni ceder soberanía. Sobre este último punto bien se expidió el ministro de la Corte suprema Raúl Zaffaroni, aclarando que ya se ha hecho en numerosas oportunidades y países. Lo único que estamos intentando es destrabar una causa que se ve

imposibilitada de avanzar si no se realizan las indagatorias sobre los sospechados. Aspiramos tener éxito, pero si no lo logramos, sabremos que no fue por falta de voluntad política.

Aquí es donde entra la comisión de juristas prestigiosos -sin intervenir en el proceso llevado adelante por los magistrados argentinos-; serán ellos los encargados de realizar el informe pertinente para determinar si hubo o no colaboración de los países firmantes, para el esclarecimiento de los sucesos de la mañana del 18 de julio. Por lo cual, si Irán realizara alguna maniobra para entorpecer la labor judicial, la humanidad toda, será testigo de este accionar. Además, la causa no puede retrotraerse si hay fallas en el proceso, ni la sola declaración de los imputados produce su salida de la lista roja de Interpol, dado que sólo el Sr. Juez Canicoba Corral puede determinar este punto.

Para finalizar, señor Presidente, adelanto mi voto positivo convencida que la única manera de encontrar la verdad es por el camino de la justicia y la diplomacia. Seguramente sea el camino más largo, pero nosotros no invadimos países ni mandamos a ejecutar sospechosos; somos consecuentes con nuestra política de Derechos Humanos, aplicamos la ley y no la guerra. Creemos en el camino pacífico para la resolución de conflictos y confiamos que la justicia argentina en Teherán avanzará en encontrar las respuestas que la comunidad judía y la sociedad en su conjunto reclama desde hace 19 años.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GARRIDO

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Presento esta inserción para hacer un breve agregado a lo ya expuesto en el recinto. En el marco de esta causa, e independientemente al Memorándum de Entendimiento con Irán, es preciso recordar que existe un acuerdo de solución amistosa por el que el Estado argentino se comprometió a una serie de iniciativas que no fueron del todo cumplidas. Algunas de ellas relacionadas con las actividades y organismos de inteligencia. En el decreto 812/2005 está expresamente reconocido el deber de la Argentina de profundizar “el proceso de relevamiento de archivos del caso AMIA en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado y de las fuerzas de seguridad”, así como el de tomar “medidas relacionadas con reformas normativas con el objeto de: a) transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia; b) facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo”. Sin embargo, como pretendo explicar a grandes rasgos en estas líneas, ninguna de estas dos cláusulas fue adecuadamente cumplida.

En primer lugar, en lo que respecta al relevamiento y desclasificación de los archivos secretos de la SIDE para la facilitación del acceso a la verdad y la justicia por parte de víctimas y familiares de víctimas en la causa que investiga la conexión local del atentado, como ya fuera expuesto en reiteradas oportunidades por los afectados y como se refleja a todas luces en el estado y evolución de la causa penal, el Estado argentino no dio a conocer la información que, en definitiva, encubre a los responsables y perpetúa la impunidad en esta causa.

Luego, en materia de transparencia del manejo de fondos reservados por parte de la Secretaría de Inteligencia y de acceso a la información en manos de organismos de inteligencia para permitir a la justicia alcanzar la verdad en hechos de terrorismo, tampoco hubo avances significativos o, mejor dicho, avances en absoluto. Como director de la Oficina Anticorrupción y el año pasado como diputado nacional, presenté un proyecto de reforma a la ley de inteligencia, que pretende, entre otras cosas, lograr que en la elaboración del presupuesto nacional se puedan leer aquellas partidas que son asimilables a las de cualquier dependencia del Estado y que no requieren, por lo tanto, de la clasificación con la que cuentan hoy en día. En la actualidad, si bien existe en la ley de presupuesto

una categoría para actividades de inteligencia, al mantenerse todos los gastos como reservados es imposible someter a la Secretaría de Inteligencia al control de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Asimismo, propusimos que aquellos gastos que deban mantenerse reservados, puedan igualmente ser sometidos al análisis de la Auditoría General de la Nación, asegurando los mecanismos de seguridad para que la información y el registro de datos no sean alterados con anterioridad a la auditoría.

Además, y en línea con la finalidad de incrementar la transparencia de las actividades de inteligencia y de dar cumplimiento al compromiso de facilitar el acceso del Poder Judicial a la información reservada que le permita una mejor investigación de los hechos de terrorismo, resolvimos que la última palabra ante un pedido de la justicia para acceder a datos clasificados la debería tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no el presidente, como está estipulado en la ley 25.520.

Por último, el esporádico funcionamiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia es un obstáculo al adecuado control de la Secretaría de Inteligencia y en consecuencia, a la prevención de futuros hechos que, como el que hoy nos preocupa, no pueden ser dilucidados por la Justicia.

Por estos motivos y para concluir con esta presentación, los invito a reflexionar sobre qué buscamos con este acuerdo cuya aprobación sometimos a debate hoy, pero también cuáles son las cuestiones institucionales en las que podemos trabajar ahora para luchar contra la impunidad, en la búsqueda de la verdad y la justicia.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GIUBERGIA

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Este Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán, propone la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia. Mi pregunta es: ¿de qué verdad y de qué justicia estamos hablando?

Desde el momento en que el documento establece que el marco legal de ambos países será contemplado en este interrogatorio, aparece la primera contradicción ya que ambas legislaciones no son complementarias, situación ésta que lleva a una paralización en la búsqueda de “La Verdad”.-

¿Verdad para quiénes? Si esta comisión se formará para ir a Irán a interrogar a aquellos que el gobierno de aquel país proponga, ¿estos serán los que verdaderamente tuvieron responsabilidad en el atentado de la AMIA? ¿Serán los que figuran en la causa que llevan adelante el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman?

Nuestro país ya había iniciado una causa bajo la potestad de un juez argentino que había emitido pedidos de captura a Teherán, y los exhortos diplomáticos nunca fueron contestados por ese país, por ello no se entiende la creación de otro organismo en el que se persigue el interrogatorio solamente de los acusados con alertas rojas, a un país que nunca cumplió con los tratados internacionales de entregar a la personas a las que hoy dice que se podrá interrogar.

El gobierno ha manifestado que esta comisión ayudará a destrabar la causa para llegar a los culpables, pero la comisión es una comisión bilateral, no vinculante, lo cual significa que nada de lo que se diga o se conozca en esta visita a Irán podrá tener consecuencias jurídicas sobre la causa o los autores del atentado que costó más de 80 vidas.

Creo que de acuerdo a esto la verdad y la justicia no serán más que meros principios declamativos o, como dijo el senador Sanz, solo retórica.

Las acciones que los países realizan en el ámbito de su política exterior son acciones que quedan en la memoria colectiva, el acuerdo con Irán, probablemente para el relato “K” será una acción para que no

quede impune el atentado, mejor esto que nada, (así lo asumen los del FPV) ...pero para todos nosotros sólo será una de las tantas decisiones sin otro objetivo que la búsqueda de un rédito político que ni siquiera está claro para ellos mismos.

¿Verdad y justicia? ¿Qué opinan los familiares de los muertos sobre esta versión de la verdad y la justicia? ¿Qué explicación se les dará una vez que se informe tal como lo establece este proyecto, sobre los resultados obtenidos luego de los interrogatorios a los miembros del gobierno iraní?

Tengamos en cuenta que no hay ninguna provisión para que Irán sea obligado a entregar a quienes hipotéticamente reconocieran su complicidad o su autoridad. Sin esta pieza fundamental el acuerdo cae en el más profundo nivel de incompetencia frente a la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz.

Otra duda: ¿cuál será la autoridad judicial competente que regirá la actuación? ¿La Argentina o Irán?

Luego de tomar indagatoria o declaración testimonial: ¿cómo avanzará la comisión si propone normas contrarias a derecho de alguno de los Estados?

Las preguntas sobre la condición esencial de VERDAD y JUSTICIA como verán son demasiadas.

Haciendo un poco de historia tanto el atentado a la embajada de Israel como el de la AMIA, así como sus posteriores encubrimientos, fueron ejecutados durante la presidencia justicialista de Carlos Menem -actual aliado del gobierno nacional en el Senado- que contaba con la simpatía de muchos funcionarios de alto rango del actual gobierno. Hoy creo que continuando con esa línea el verdadero motivo de este acuerdo es que el gobierno decidió alinearse políticamente con Irán, y la prueba de esto es que se están llevando negociaciones secretas desde hace más de dos años.

El problema es que esa nación no tiene buena reputación y creo sin miedo a equivocarme que aún así ellos sacarán de este “entendimiento” mucho más provecho que nosotros. Para ellos el acuerdo significa una “victoria diplomática” como lo expresan los medios de Irán, ya que lograrán a través de este acuerdo poner en tela de juicio las imputaciones que pesan sobre el gobierno y su relación con el terrorismo, en un momento en el que el gobierno de Ahmadinejad retoma la discusión sobre su programa nuclear con miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania, y está en pleno proceso electoral.

Irán entiende que la Argentina, después de 20 años, ha decidido liberar al país de la influencia de EEUU e Israel. Según ellos, la DAIA es la “cabeza de la entidad sionista en Argentina” y el gobierno argentino se ha dado cuenta de que fue víctima de un complot donde la Justicia ha sido influenciada por grupos foráneos. Esta comisión es un claro cambio en la política de vinculación que nuestro país lleva a cabo con los EEUU y le ayudará a revisar de forma independiente la actuación de los funcionarios iraníes en el atentado.

El mismo responsable de la política exterior de la Asamblea (AVAZ HEYDARPOUR) ya aclaró que ni el fiscal ni el juez van a interrogar a nadie. Me pregunto: ¿es por eso que el kircherismo quiere a toda costa la aprobación de este memo antes de que se conozcan con mayor profundidad los detalles del arreglo?

Vuelvo otra vez sobre la verdad y la justicia...

¿Es constitucional? El tratado contradice claramente el artículo 109 de la Constitución Argentina. “El Ejecutivo no debe arrogarse el conocimiento de causas judiciales pendientes”... En caso de crearse esta comisión tanto el Ejecutivo como el Congreso habrán transgredido la disposición al crear un órgano cuasijudicial denominado “Comisión de la Verdad”. También contradice el art. 18 donde se establece que “ningún habitante puede ser sacado de sus jueces naturales ni juzgado por comisiones especiales”. Sin embargo, esta comisión deberá emitir un informe que tiene que ser tomado en cuenta por las partes para su futuro proceder.

Es inconstitucional, por ello, el Congreso argentino tiene que rechazar este acuerdo; tiene la obligación de hacerlo bajo la pena de violar nuestra Constitución Nacional.- No sólo hay fundamentos jurídicos sino también argumentos de política exterior que contradicen su tradición histórica, al alinearse a países que desprecian el sistema democrático y en rigor de verdad los más básicos derechos humanos. Este acuerdo debe ser rechazado por ambiguo, por falta de sustento jurídico, por falaz e ignorante de los mínimos principios de la diplomacia.-

El gobierno de la Argentina, con su ya incorporada costumbre de no actuar conforme a derecho, antes de haber intentado crear una comisión tripartita en donde rijan las garantías de debido proceso, pondrá

bajo sospecha todo lo actuado por la Justicia argentina y entenderá que después de este entendimiento la causa AMIA estará resuelta, pero sin justicia y sin verdad.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GONZÁLEZ (G. E.)

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Una vez más el kirchnerismo nos sorprende, lamentablemente nos sorprende para mal. Desde que conocimos la existencia del Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán, nos preguntamos ¿por qué?

Hemos hecho y escuchado muchas conjeturas, hipótesis de distinta índole, ninguna que resulte razonable, y aun luego de los debates en los que estuvo presente el señor canciller no hemos encontrado la respuesta que buscamos.

¿Por qué? ¿Por qué acordamos y conformamos una "Comisión de la Verdad" con un gobierno terrorista, que no respeta a las mujeres, que condena a los homosexuales, que persigue a sus adversarios políticos y que desprecia los derechos humanos?

¿Por qué acordamos con un gobierno iraní que niega el Holocausto y firmamos el acuerdo el día del Holocausto?

¿Por qué ponemos en riesgo las notificaciones rojas de Interpol que tanto nos costaron obtener?

¿Por qué la presidenta el 24 de septiembre de 2010, en un discurso ante la ONU propone a Irán la elección de un tercer país neutral para llevar a cabo el proceso judicial y hoy firma un memorándum donde se propone interrogar en Teherán?

¿Por qué nos apresuramos a actuar con tanta celeridad, si ni siquiera el Parlamento iraní ha tratado el memorándum, y somos funcionales a los intereses electorales iraníes?

¿Por qué cuando la comunidad judía, la AMIA, la DAIA, las asociaciones de familiares de las víctimas de los atentados y la comunidad internacional han manifestado su desacuerdo al memorándum, el oficialismo se empeña en avanzar en lo que será un acuerdo sin legitimidad?

¿Por qué vamos a creer que el gobierno de Irán realmente se va a comprometer en la resolución de un delito aberrante que fue concebido para masacrar a parte de una comunidad a la que quiere aniquilar?

Hace tiempo que el Congreso de la Nación dejó de ser un ámbito de debate e intercambio de ideas para convertirse en la tiranía de una mayoría que no sustenta como valor democrático la búsqueda de consenso. Las urgencias, las imposiciones, el desprecio por las minorías ya es moneda corriente.

Lamentablemente y dado el estado de situación de las cosas, en esta instancia sólo nos resta esperar, y esperar, por el bien de todos los argentinos, que ustedes tengan razón, y que podamos encontrar a

través de este acuerdo la justicia que buscamos. Pero, lamentablemente no hay ningún indicio claro de que así vaya a suceder.

Pensar que si no pasa nada todo va a seguir igual, como decía alguien por ahí, no es verdad. No podemos ser tan ingenuos de creer que lo que hacemos no tendrá consecuencias. Quiero pensar bien, quiero creer que detrás de todo esto no hay impericia, no hay intereses ocultos, que el costo de acordar con el "mal" será a cambio de justicia. Lamentablemente, hasta hoy no hay indicios claros de que eso sea así; la ambigüedad es mucha, los riesgos son demasiados.

Por suerte mi capacidad de asombro está intacta ya que ante la peligrosa imprevisibilidad del kirchnerismo, lo menos que debemos hacer es acostumbrarnos. Nunca encontrarán de nuestra parte el silencio, nunca dejaremos de reaccionar frente a la injusticia, nunca dejaremos de preguntar por qué. No porque eso dé sentido al lugar que hoy ocupamos, sino porque ese es el sentido de nuestra existencia como ciudadanos, como personas que defendemos nuestros principios y amamos nuestra patria, en donde todos los argentinos, mal que les pese a algunos, son argentinos y por lo tanto merecen justicia.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO IBARRA

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Este tema que tratamos hoy es un tema muy sensible para todos los argentinos, en primer lugar por la implicancia social que tuvo y en segundo lugar por el accionar de nuestro gobierno durante estos 19 años de búsqueda de justicia.

Todos conocemos las implicancias sociales de este hecho: 85 víctimas, inocentes, que este terrible atentado dejó. El dolor de 85 familias que hace 19 años viven luchando, día a día, por saber quiénes fueron los responsables, por conocer los motivos que tuvieron para decidir esa masacre, por saber cuáles eran los problemas e intereses políticos que valían más que la vida de 85 personas, y por sembrar un dolor inagotable en las 85 familias que destruyeron.

El accionar de nuestro gobierno es un tema fundamental que este debate nos permite refrescar, que nos permite poner en agenda nuevamente, porque ese atentado marcó el ingreso de nuestro país a la lista de países elegibles como blanco del terrorismo, ya que fue el segundo atentado terrorista de este tipo en la historia de nuestro país, después del atentado a la embajada de Israel, sólo dos años antes.

¿Qué intereses internacionales se tocaron a principios de la década de los 90 para que nos eligieran como blanco del terrorismo?, ¿qué redes sostienen 19 años de impunidad, más de 200.000 fojas de investigación y varios funcionarios públicos sospechados de eliminar pruebas, de desviar la investigación, hasta un juez destituido, en definitiva todo un aparato de protección de esos oscuros intereses que nos involucraron, como país, en un tema en el que nunca debimos estar, como es el terrorismo?

Este debate es una muestra más de la gravedad y debilidad institucional que atraviesa nuestro país, ya que los tres poderes del Estado estamos envueltos en una discusión de competencias y responsabilidades que sólo sirven para dilatar el camino hacia la verdad y asegurar impunidad a los responsables.

Empezando por una política exterior ambigua, poco clara, que cada día abre nuevos frentes de conflicto, luego por el accionar de las fuerzas de seguridad y de inteligencia de nuestro país que han mostrado serias falencias, tanto en la faz preventiva como en la investigativa, ya que gran parte de los obstáculos que tiene la Justicia para esclarecer el hecho han sido originados por la impericia, negligencia y falta de voluntad de los conductores de estas organizaciones.

Luego el Poder Judicial que a través del cambio de fiscales y de jueces pone de manifiesto su debilidad para enfrentar estas redes de corrupción, para avanzar en el esclarecimiento de esta causa,

con el agravante de que el Poder Ejecutivo, con el contenido de este memorándum, avanza claramente sobre las atribuciones del Poder Judicial en un momento donde está planteando la necesidad de “democratizar” este poder, y por último el Poder legislativo que, en su función de contralor, en este caso, ha permitido 19 años de injusticia y de ocultamiento de la verdad.

Hecha esta introducción me quiero referir específicamente al tema que nos convoca que es la aprobación o rechazo de este memorándum.

Desde el aspecto formal el memorándum es ambiguo, intencionalmente poco claro.

Todos lo hemos leído y es fácil advertir que no contiene las formalidades mínimas que cualquier acuerdo internacional debería tener: no contiene plazos para ninguna de las acciones establecidas, no establece posibles nacionalidades de los juristas no nacionales lo que no es un tema menor, toda vez que, seguramente, eso va a dilatar el inicio del trabajo de la comisión. Le otorga a la comisión investigadora atribuciones propias del Poder Judicial, como investigar, recabar información y emitir opinión vinculante para la resolución del proceso, marcando un claro vicio de inconstitucionalidad del acuerdo.

Por último, el aspecto político de este tema genera también muchas dudas, ya que es interesante ver que después de casi 10 años de gestión de este gobierno y habiendo un antecedente negativo a una iniciativa similar durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se avanza, en pocos meses, en una negociación con Irán para acordar un procedimiento de esclarecimiento de la causa que contiene los defectos que acabo de detallar, además de otros que, por razones de tiempo y para no ser repetitivo, no he querido indicar, y luego, a sólo 31 días de su firma, se podría transformar en ley nacional, habiendo sido ya debatido por el Senado, y hoy por nosotros, y en una sesión especial.

Señor presidente: las críticas a los aspectos formales del memorándum y las dudas sobre los motivos y circunstancias políticas que acabo de indicar me llevan a no apoyar este proyecto.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA LEVERBERG

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Si hubo episodios en la historia contemporánea de la Argentina que no tienen punto de comparación por su tenor violento, esos fueron los atentados contra la comunidad judía. Buenos Aires tiene una de las más importantes colectividades del mundo y el terrorismo internacional nos lo ha hecho recordar dos veces en pocos años. Pero la Justicia, tan necesaria como urgente, no llegará si se detiene el proceso investigativo, proceso que seguramente echará luz sobre las responsabilidades exteriores como sobre los nexos locales de los atentados, puntualmente el que se perpetrara contra la sede de la AMIA.

Ahora, sería bueno saber ¿cómo se supone que hubiera obrado la oposición, que parece tener respuestas a todo desde el lugar que le toca ocupar desde hace varios años, afortunadamente, si el avance de las investigaciones se encontrara en un casi punto muerto como el actual. La pista iraní, que el fiscal se empeñó en profundizar hasta lo último posible nos llevó a todos los argentinos interesados en la verdad a un punto de definición que requiere del memorando que hoy estamos tratando.

¿Qué hubiera, reitero, hecho la oposición política argentina? Buscar un chivo expiatorio, inculpar sin fundamentos a alguien más? O, como realmente decidió la Argentina de la Verdad, la Memoria y la Justicia, avanzar en un proceso que permita a la Justicia avanzar dentro del propio Irán con la investigación.

Es impensable dar marcha atrás. Es imposible plantearse con una nación tan particular como esa apelar a la fría letra de algunos preceptos de los organismos internacionales y tener éxito en ello. ¿Alguien

puede imaginar acaso que la Justicia argentina pida la extradición de determinada persona desde Irán y logre su cometido sin problemas?

Evidentemente es necesario avanzar en este contexto, en contar con un marco que permita llegar hasta donde se pretende, y es a tal efecto que se pensó en el Memorando.

Por otro lado, ¿qué garantías más justas que las que ofrezca una comisión formada por juristas de prestigio argentinos, de la contraparte, y de un país extranjero neutral en lo político podríamos pretender? Es allí donde debemos depositar nuestra confianza y aportar todo nuestro esfuerzo para garantizar a la Justicia la posibilidad de seguir adelante, por ejemplo, con la posibilidad de interrogar en Irán a quienes pudieran haber estado implicados en tan luctuoso hecho.

Es cierto que entre las personas que la investigación puso en la nómina de acusados hay quienes han formado parte del gobierno iraní, pero también es cierto que hay voluntad de apertura hacia la verdad desde ese, insisto, tan complejo y diferente país.

Como es evidente, la oposición busca frenar el acuerdo amparada en un demagógico y trastocado supuesto apoyo a ciertos sectores de la comunidad judía. Pero en realidad, y a todas luces, lo que hace es alejarse de la Justicia, preconciendo al asunto como de estrictas características raciales o étnicas, sin dejar que se investigue de la forma más equilibrada y aséptica posible, honrando así realmente a las víctimas y sus familias, llevándoles verdad y no venganza y aparente reparación sin ahondar en las razones y el fondo de los hechos.

Además, para concluir, es evidente que la oposición busca cubrir sus huellas, porque durante su gobierno, el del radicalismo, el del viejo justicialismo abarcado por la década menemista y el de la etapa del ex presidente no votado por el pueblo Eduardo Duhalde, se perfeccionó un mecanismo de enmascaramiento de la investigación, que inculpó a inocentes, a intermediarios no probados, a policías y contaminó todo con un sinnúmero de elementos de lo que se denominó la “conexión local”, algo de lo que hasta ahora no ha habido mayores certezas de su veracidad y seriedad en cuanto los méritos para tales acusaciones. Al menos, en gran parte de los casos. ¿Es eso lo que quiere dejar firme la oposición?

Se han dicho en desmedro de este gran esfuerzo político, diplomático y de verdadero trabajo serio de parte de las autoridades argentinas muchas barbaridades, y la gran mayoría con el agravante de dar todo el tiempo la impresión de ser forzadas, falsas, amañadas, y por sobre todo insensibles con la misma memoria de la víctimas, vapuleando con fines políticos y electoralistas el honor que deberían rendirles.

Creo por el contrario, que estamos todos ante una oportunidad de dar grandes pasos hacia la verdad, Memorando de Entendimiento mediante. Luego restará a la Justicia dar una nueva muestra de que puede y debe estar a la altura de las circunstancias.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MAJDALANI

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Nos encontramos aquí reunidos en un contexto en el que otra vez la realidad supera la ficción. Otra sesión en la que de nada sirven las largas horas de discursos.

Sesión en la que las razones expuestas por unos u otros no son escuchadas.

El oficialismo llegó al recinto, como siempre, con la orden clara e inamovible: no importa cómo, sólo importa el resultado.

Soy consciente de que sentar a dos ministros hoy, devenidos por lo que dure la sesión nuevamente en diputados, es legal, pero es muy importante que podamos diferenciar entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer.

A ninguno de nosotros nos puede sorprender que exista la obediencia partidaria, es una práctica habitual en la actividad política, pero cuando lo que se va a tratar puede tener oposiciones de conciencia esa obediencia caduca. Hay un límite para la obediencia partidaria. Y creo que hoy eso debería pasar.

Es de público conocimiento que la investigación judicial del atentado contra la AMIA no alcanzó avances significativos hasta que en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se designó al fiscal Alberto Nisman.

Posteriormente, a raíz de la investigación desarrollada por Nisman, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó el 9 de noviembre de 2006, la captura internacional de siete altos funcionarios del gobierno iraní para tomarles declaración indagatoria como imputados.

También es de público conocimiento que el gobierno iraní no sólo no accedió a entregar a los funcionarios imputados, negando cualquier responsabilidad en el atentado, sino que adujo que la causa fue armada sin pruebas o con pruebas falsificadas por los servicios secretos de Estados Unidos y de Israel. De más está decir que Irán jamás acatará una detención preventiva de su gente, mucho menos su extradición.

Entonces, si hay ocho personas con pedido de captura conforme decisión de jueces argentinos que están libres y, se presume, en Irán, ¿qué sentido tiene un Memorándum de Entendimiento con un país que claramente no ha cooperado desde el inicio de esta causa? Más importante aún: este Memorándum de Entendimiento no estipula ningún tipo de compromiso de cooperación futura por parte de Irán.

Es importante que tengamos en cuenta, señor presidente, que estamos hablando del principal agente del terrorismo mundial en Medio Oriente, de un país que niega la existencia del Holocausto y ha prometido aniquilar a Israel.

Habiendo dicho esto ¿Qué podemos esperar de Irán? ¿Puede esperarse el reconocimiento de alguna responsabilidad? ¿Puede esperarse que ponga a disposición de la justicia argentina a los ciudadanos iraníes imputados? ¿Puede esperarse que decida sujetarlos a la ley argentina, facilitando su extradición?

Yo no dudo de que muchos diputados del oficialismo hoy van a votar en contra de lo que les dicta su conciencia, y me pregunto cómo harán para responder a las preguntas que sin duda alguien les va a formular en un futuro.

Yo imagino a mis nietos preguntándome: “Abuela, ¿vos qué hiciste cuando la Argentina firmó con Irán un tratado que no le garantizaba su soberanía jurídica?” Y yo les contestaré que fui diputada de la Nación en un momento político en donde tuve que soportar la imposición de la mayoría más prepotente, sorda y soberbia de la historia, que me mantuve fiel a mis convicciones y al juramento que realicé al asumir.

No puedo asegurar el resultado de esto. He buscado los motivos, el porqué de este cambio de estrategia y sinceramente no lo encuentro.

Sólo tengo la certeza de que no es claro qué beneficio traerá este memorándum para la Argentina, mucho menos para la justicia por el caso AMIA.

Señores diputados: humildemente opino que nos une el interés por la grandeza de nuestro país, sin importar el partido político al que pertenecemos, la religión que profesamos ni el juramento que realizamos al asumir.

Pero no tengo duda de que algún día la patria les demandará su voto del día de hoy.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MALDONADO

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

El Memorando de Entendimiento acordado con IRAN por la causa AMIA, ha abierto graves interrogantes por sus ambigüedades, equívocos e imprecisiones, y por sus múltiples implicancias en la política internacional, que comprometen seriamente la conducta exterior de nuestro país.

No me he propuesto describir las graves anomalías que contiene el acuerdo, las alarmas que despierta, ni los peligros que encierra, sino sólo analizar cómo el gobierno nacional ha decidido apartarse, en una trascendente decisión de Estado, de todo un camino recorrido desde su llegada al poder, en nombre de la verdad y la justicia.

Creo que el gobierno nacional ha extraviado de manera absoluta e injustificada toda la coherencia con los principios y convicciones que siempre ha predicado en los temas de derechos humanos, contradiciendo las exigencias de verdad y de justicia en la revisión del pasado en materia de derechos humanos.

En la lucha contra la impunidad de los crímenes de la última dictadura, la verdad se conocía desde el Informe de la Conadep, el ejemplar juicio a las juntas militares y los juicios por apropiación de niños en cautiverio.

Pero el imperativo de justicia sobre el terrorismo de Estado fue ampliado con el transcurso del tiempo con los llamados juicios por la verdad, y fundamentalmente a partir de la anulación de las leyes de punto final y la obediencia debida.

También vale destacar que el gobierno de Néstor Kirchner asumió oficialmente un compromiso con la causa AMIA, reconociendo la responsabilidad del Estado argentino por la falta de seguridad y por la denegación de justicia, mediante un decreto que dictó en el año 2005.

A partir de entonces hubo avances notorios en la causa AMIA y se llevó adelante una investigación seria, en base a la cual fueron emitidas órdenes de arresto internacionales contra varios jerarcas del régimen iraní.

En el juzgado a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, en el año 2006, el fiscal Alberto Nisman, solicitó el interrogatorio de ocho imputados, seis de los cuales están incluidos entre los buscados por Interpol.

La medida rige para el ex ministro de Seguridad, el ex consejero cultural de la embajada iraní, el ex tercer secretario de la embajada y dos ex jefes de las Guardias Revolucionarias Islámicas, uno de ellos, es el actual ministro de Defensa iraní y candidato a presidente en las elecciones del 14 de junio próximo. En tanto, el libanés requerido está muerto.

El pedido de procesamiento de los funcionarios iraníes que emitió Nisman fue convalidado por el juez Ariel Lijo y luego confirmado por la Cámara Federal. No se hizo lugar en Interpol a la solicitud del fiscal para arrestar al ex presidente iraní, al ex canciller y al embajador en Buenos Aires cuando sucedió el ataque, tal como dictaminara el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Interpol, para no propiciar un "conflicto diplomático".

En forma sintética la investigación del fiscal Nisman sostiene que la orden del atentado vino de Irán después de una reunión en la que intervino hasta el presidente de ese país, en 1993. El organizador fue el ex agregado cultural iraní en Buenos Aires. La parte operativa se coordinó en la triple frontera. La ejecución del atentado fue obra de un suicida, llegado desde el Líbano, integrante de Hezbollah. La reunión cumbre en la ciudad de Mahshad, en Irán, donde supuestamente se planeó el atentado, fue pública y cubierta por la prensa.

Es sabido que el gobierno de IRAN hasta ahora nunca colaboró con la investigación del atentado. Una versión oficial de la diplomacia iraní sobre los crímenes y sobre el proceso fue comunicada en 2010 a las Naciones Unidas, en rechazo de las recriminaciones formuladas ante la Asamblea General por la misma presidente Cristina Kirchner (Carta A/65/495 del 28-09-2010).

El régimen iraní afirmó de modo categórico que “se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión”. A la vez imputó a nuestro país haber avalado arrestos ilegales y torturas durante las pesquisas, entre otras insólitas acusaciones, para concluir que “la investigación criminal está plagada de irregularidades y carece de todos los atributos esenciales de una resolución judicial”.

Cabe preguntarnos si puede esperarse ahora una retractación de esas declaraciones oficiales iraníes, formuladas por quien sigue siendo representante de su país ante la ONU.

Y puede presumirse que IRAN va a persistir en su permanente deslegitimación de la investigación judicial argentina, rechazando las imputaciones que se le formulan, también en otras latitudes, por sus relaciones con el terrorismo.

Ciertamente el acuerdo puede servir mucho más para mejorar la imagen de IRAN ante la comunidad internacional, que para ayudar al esclarecimiento del atentado de AMIA, porque le habremos concedido al régimen que gobierna ese país, que siembre dudas, difunda y aliente, presunciones contrarias a la validez de la investigación judicial argentina.

Desde la posición del gobierno de IRAN, que celebran ahora sus agencias oficiales de noticias, a pocos días de tener que justificar un plan nuclear en los foros mundiales, resulta necesario crear una COMISION llamada “DE LA VERDAD” para despejar las falsas acusaciones contenidas en una investigación que ellos entienden “plagada de irregularidades”, como la que llevó adelante la Justicia argentina.

Está claro que quienes buscan la verdad están negando que haya una verdad. El riesgo es negar lo sucedido, es convertir a los verdugos en inocentes, y lo que es peor aún, a las víctimas asesinadas en una nueva clase de desaparecidos.

Se trata de “revisar la evidencia reunida” en la causa AMIA, tal como expresa el mensaje de elevación al Congreso de este escueto y oscuro memorando. Con ello el gobierno nacional ha abierto el camino a la impunidad de los acusados iraníes, con un viraje tan abrupto como inexplicable de su política de derechos humanos.

Se va a votar una comisión llamada “de la verdad”, creada para revisar sin plazos una causa judicial, recibir toda la información recopilada en años, establecer reglas de procedimiento y emitir un informe con recomendaciones que la Argentina deberá tener en cuenta en sus acciones futuras.

Duele comprobar en este acuerdo una manipulación tan grosera del valor de las palabras, para enmascarar una distancia tan enorme entre las palabras y los hechos. Pero es bueno que nos preguntemos sobre el derecho a la verdad.

Es un derecho que se vincula estrechamente con la obligación del Estado de investigar hechos violatorios de los derechos humanos, a partir de los principios internacionales que, para su promoción y protección, se han reconocido más recientemente en la lucha contra la impunidad.

Es un derecho sintético o compuesto en el sentido de que no está consagrado textualmente por la normativa internacional y surge de la interacción del contenido y de las consecuencias jurídicas de varios derechos reconocidos expresamente.

Se reconoce su vigencia, cuando “cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron a la perpetración de crímenes aberrantes” y se considera que el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad, “es esencial para evitar que en el futuro se repitan tales actos”.

El derecho a la verdad surge del derecho a un recurso, del derecho al debido proceso, del derecho a la información y de la obligación genérica de los Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de todos los derechos humanos.

Pero pregunto: ¿dónde queda el derecho a la verdad?, cuando en los actos de la comisión se restringe nada menos que la participación de las víctimas, lo que constituye su esencia. Ni la AMIA ni la DAIA

ni ningún familiar o representante legal de los cientos de víctimas podrán intervenir ni serán escuchados.

En el derecho argentino, no sólo los imputados tienen garantías procesales. Nuestra Corte Suprema ha reconocido expresamente a la querella las mismas garantías, señalando que éstas amparan "a toda persona a quien la ley le reconoce personería jurídica para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como querellante o acusado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho".

La primera responsabilidad del Estado argentino es resguardar la verdad, pero en este acuerdo la ha malversado con premisas falsas, con la pretendida justificación de conseguir alguna respuesta iraní a las imputaciones de la Justicia argentina.

Se dice que la causa está estancada, pero se omite que se ha conseguido identificar a los ideólogos del crimen y se ha logrado que Interpol apruebe sus capturas internacionales.

Se dice que este acuerdo permitirá interrogar a los imputados, pero se descarta la aplicación de la ley argentina y se viola la garantía del debido proceso legal que consagra nuestra Constitución Nacional.

Ni el Poder Ejecutivo, ni el Congreso Nacional pueden incurrir en una cesión de soberanía para someter los dictados de la Justicia argentina a una Comisión de la Verdad, en las condiciones en que ha sido creada.

Por todo ello, rechazamos este acuerdo humillante para la historia de la democracia argentina, como una claudicación ética que nos aparta de la verdad y la justicia.

No olvidar es nuestro compromiso. No olvidar, para reparar una nueva fractura que hoy se enclava en nuestra sociedad. Para volver a encauzar al país por la senda del respeto a los derechos humanos fundamentales, por la verdad y la justicia.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MONGELÓ

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

El tema que hoy nos convoca es uno de los más dolorosos que guarda nuestra memoria. El recuerdo del pasmo que el atentado contra la AMIA produjo en nuestro pueblo constituye un verdadero tormento en la memoria colectiva de los argentinos.-

Para poder exorcizar ese dolor, para poder restañar esa enorme herida en nuestra sociedad es necesario que de una vez por todas se avance en conocer la verdad de los hechos que acabaron con la vida de tantos argentinos.-

Durante años, los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA han peregrinado por juzgados, sufrido el secuestro político de su causa, han padecido el desengaño de ver cómo muchos que al trocar su rol de oposición al gobierno, lejos de hacer buenas las críticas que antes expresaban, se suman a los encubrimientos y hasta incorporan a sus gabinetes a procesados encubridores. Muchas veces, así se ha vuelto a matar a las víctimas, víctimas que cada vez que sus familiares frustran sus intentos de memoria, verdad y justicia vuelven a morir en el dolor de sus deudos.-

Ha sido recién a partir del año 2003 con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno de la Nación que la causa AMIA ha logrado avances. Fue Néstor Kirchner, mediante decretos quien relevó de la obligación de guardar secreto a los agentes de inteligencia para que puedan contribuir con la causa y es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el que hoy se atreve a jugarse por la memoria, la verdad y la justicia al establecer negociaciones con el gobierno Iraní cuyo fruto, este memorándum, hoy nos trae a tener que discutir este tema doloroso.

Desde 2003 en adelante, a los muertos de la AMIA no se los ha vuelto a asesinar. Desde 2003 en adelante el camino de la memoria, la verdad y la justicia se ha vuelto a transitar y este es un paso muy importante.

Estas cosas son las verdaderas en este tema y tal vez, el contacto con esa verdad que muestra que hay un gobierno que mantiene compromisos, que no cae en contradicciones y que se juega con valentía cuando tiene que hacerlo, sea lo que despierta en la oposición tantas voces destempladas, tantos argumentos falsos, mezquinos y hasta miserables.-

Hemos escuchado hablar a algunos diputados radicales de la barbarie del régimen Iraní. Hemos escuchado su indignación por saber que el gobierno argentino negocia con Irán. Sin embargo, olvidan que fue el gobierno de su partido, el presidente Raúl Alfonsín, el principal abastecedor de armas a ese mismo régimen malvado durante los años 80. Una incoherencia más de quienes más que opositores se han convertido en opositores.-

Otros colegas, también radicales, han dicho que: “¿Cómo vamos a firmar este memorándum en este momento con este régimen dictatorial, siendo que habrá elecciones en Irán en seis meses y lo más probable es que quienes están en el gobierno pierdan”.

Este último argumento constituye en sí mismo el colmo del absurdo y un fantástico oxímoron ya que como puede verse, por un lado habla de un régimen terrible y autoritario y en la misma frase expresa lo democrático de ese sistema, tanto que permite que los bárbaros acaten el voto cuando pierden.

En el uso de semejantes argumentos se ve reflejado el carácter de opositores más que de opositores de algunos sectores.-

Sin embargo, no se dice que la República Islámica de Irán, por primera vez desde que estalló la bomba en la AMIA, al firmar este memorándum, reconoce que alguno de sus ciudadanos puede estar implicado en el hecho. Eso es un avance concreto, no un circunloquio vacío y perenne como casi todos los argumentos de los que lejos de oponerse desde las ideas sólo buscan obstaculizar para sacar tajada política.-

Alicortos de pensamiento y verdaderos enanos morales son los que intentan sacar tajada política con la sangre de los muertos de la AMIA y se niegan con su posición a que por primera vez los acusados Iraníes se sienten ante un juez argentino.-

Se ha dicho también en este recinto que este memorándum es inútil, que por más que se indague a los acusados y aún se los llegue a condenar, Irán nunca los entregaría y su crimen quedaría impune. Nuevamente en el uso de estos argumentos es donde se corre el velo de lo que algunos realmente piensan y lo que se ve es su desprecio por la verdad y la justicia. Si la investigación se completa, si se llega finalmente a conocer más sobre la verdad de los hechos y personajes involucrados y más aún, si se dicta una sentencia se habrá dado un paso firme y concreto hacia la Justicia tan esperada.-

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MORENO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Naturaleza jurídica del memorándum

El memorándum es un tratado internacional porque surge de un acuerdo de dos Estados estableciendo una serie de obligaciones específicas. En particular, los Estados parte deben proponer a los comisionados, aprobar las reglas de la Comisión de la Verdad, compartir la información sobre la causa AMIA y suministrarla a la Comisión, permitir el interrogatorio de los imputados en Teherán y remitir el memorándum al secretario general de Interpol.

La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados define el término “tratado” como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional.

El trámite que tiene este instrumento es propio de los tratados internacionales. Precisamente, la Constitución Nacional dispone en el art. 99, las atribuciones del presidente de la Nación para firmar

este tipo de instrumentos. A su vez, se complementa esta disposición con el art. 75, inc. 22, de las facultades del Congreso de aprobar o desechar los acuerdos con otras naciones.

El propio memorándum prevé en el art. 6 que la entrada en vigencia queda condicionada a la ratificación por el Congreso Nacional.

Este tratado se enmarca en una serie de tratados bilaterales y multilaterales que permiten la cooperación y la asistencia internacional en materia penal. Nuestro país en el marco del derecho internacional público, sancionó para ciertos delitos normas específicas como narcotráfico (24.072), trata de personas (25.632), corrupción (ley 26.097) y, en general, se dictó la ley 24.767 sobre Cooperación Internacional en Materia Penal.

En concreto, este memorándum constituye un acuerdo con Irán para cooperar judicialmente en una causa específica. Irán se obliga a enviarnos la información disponible y va a permitir el interrogatorio de los imputados con notificación roja en Teherán.

Irán es un país que no coopera internacionalmente en materia penal, no forma parte de los tratados multilaterales que establecen mecanismos de cooperación y de asistencia.

En definitiva, queda esta opción de interrogar a los imputados con notificación roja en Irán. Todos sabemos que el transcurso del tiempo hace más difícil la investigación, si bien es cierto que el delito es imprescriptible. Convengamos, la causa de la AMIA no sólo busca esclarecer los hechos, sino que procura determinar los responsables y castigarlos.

Téngase en cuenta la causa de la embajada de Israel que permanece totalmente estancada, sin sospechosos detenidos. Uno de los supuestos perpetradores ya falleció en el 2008.

b) Funciones de la comisión de la Verdad del memorándum

La comisión de la Verdad no tiene que asimilarse jurídicamente a las comisiones de la verdad que funcionaron en otros países. En el caso de Sudáfrica tenía como función la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el período de 1960 a 1994. Su objetivo era hacerlo público y decretaba la amnistía, no concluía en sanciones penales hacia los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Sudáfrica.

Las funciones de la Comisión creada son:

1) La Comisión debe establecer las reglas de procedimiento. Estas reglas requieren una previa consulta a las partes y una posterior aprobación por las mismas (art. 2). Esta aprobación debe hacerla el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no está facultado para modificar principios constitucionales, ni disposiciones legales (Código Procesal Penal de la Nación). Esto se ve reforzado por el art. 8 del memorándum, que dispone: “Nada de este acuerdo pondrá en riesgo los derechos de las personas garantizados por ley”.

Estas reglas sólo son aplicadas por la comisión, no deben regir en ningún momento la actuación del juez y del fiscal, que van a seguir actuando con el derecho procesal penal. Por eso, el artículo dice de “sus reglas de procedimiento” y no de “las reglas de procedimiento”.

2) La comisión debe recibir la evidencia y la información que posean las partes (Argentina e Irán) sobre la causa AMIA. Luego de recibirla, deben realizar una revisión detallada sobre la evidencia relativa a cada uno de los acusados. Posteriormente, la Comisión puede consultar a las partes, sólo si lo considera necesario (art. 3).

Por ende, se advierte que la Comisión sólo recibe la información ya existente sobre la causa “AMIA”. No tiene facultades de investigar. Toda información que requiera siempre la debe canalizar a través de las partes y debe fundarla en los hallazgos de la causa AMIA. Tampoco, la comisión es parte en el expediente AMIA. Sólo va a tener conocimiento de las evidencias contra los acusados, pero no podrá solicitar nada al fiscal, ni al juez (ni pruebas, ni pedir el sobreseimiento, ni pedir el procesamiento).

3) La comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Irán para proceder a interrogar a los imputados con notificación roja (art. 5). De modo que los integrantes de la comisión van a estar presentes cuando los imputados con notificación roja sean interrogados por las autoridades

judiciales argentinas. En principio, las autoridades iraníes no tendrían un “caso” para intervenir, sino que su intervención sería al solo efecto de resguardar la legalidad del acto procesal en su país.

El reglamento de la comisión será el que determinará qué funciones tendrán los comisionados en estos interrogatorios. En líneas generales pueden presenciar el acto, controlar su regularidad, y conocer lo declarado. Acá hay una diferencia clara, porque la norma procesal obliga al juez a interrogar a los imputados (art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación), más allá que tienen derecho a permanecer en silencio y no contestar las preguntas formuladas. Es decir, el juez necesariamente va a interrogar a los imputados.

Asimismo, la comisión durante las audiencias puede formular preguntas a los representantes de cada Estado (la Argentina e Irán). A la vez, cada Estado puede dar sus explicaciones o presentar nueva documentación durante los encuentros (art. 5). Este párrafo se entiende porque los imputados pueden aportar nueva información en sus declaraciones, entonces la comisión sobre esta base puede hacer preguntas a los Estados, como también pueden brindar información. En realidad, estas facultades son complementarias de las previstas en el art. 3.

Partes son los Estados porque son los que firman este acuerdo, no pueden interrogar al juez, ni al fiscal; sólo se va a comunicar con los Estados parte.

Por ende, la comisión no puede hacer preguntas o consultas al juez, ni al fiscal; sólo se va a comunicar con los Estados parte a través de Cancillería.

4) La comisión debe realizar un informe luego de analizar la información suministrada por las partes. En este informe se deben incluir recomendaciones de cómo proceder en el caso en el marco de la ley y las regulaciones de ambas partes (art. 4).

La comisión no toma decisiones sobre el caso, sólo produce un informe para los Estados, que no es vinculante. Este informe no se dirige ni al juez, ni al fiscal. Ni siquiera se dispone que sea incorporado a la causa judicial.

El informe no invalida ninguno de los actos judiciales producidos en la causa AMIA. No es una revisión en términos judiciales del expediente.

Este informe no condiciona de ninguna forma al juez y al fiscal, están plenamente facultados para proseguir con la causa AMIA. Tampoco impide que sancione penalmente a los responsables.

Incluso, la comisión en su informe no puede hacer recomendaciones ajenas al derecho argentino. De vuelta, se remarca que en ningún momento se pretende limitar la aplicación de nuestras normas constitucionales y las leyes procesales vigentes.

En conclusión, se puede decir que la comisión en ningún momento ejerce funciones judiciales, ni tampoco interviene en el proceso judicial. Por otro lado, el juez y el fiscal no se ven afectados en su trabajo en ningún momento por la Comisión.

c) Integración de la Comisión de la Verdad del memorándum

La comisión está integrada por cinco comisionados, dos designados por cada país y un quinto seleccionado conforme a su prestigio legal internacional que será presidente. Los integrantes no son nacionales de la Argentina, ni de Irán (art. 1). El presidente es elegido por ambos países.

Este punto merece énfasis: ninguno de los integrantes de la Comisión de la Verdad es iraní. No es que la causa penal va a ser controlada por órganos iraníes, sino que la Comisión de la Verdad es integrada por juristas internacionales, igual que se componen los tribunales penales internacionales o los organismos de derechos humanos.

d) La importancia del interrogatorio a los imputados

La posibilidad de someter a interrogatorio a los imputados con notificación roja puede constituir un avance sustancial a la causa AMIA.

Hasta el momento, la investigación contra los imputados con notificación roja está totalmente paralizada, porque se recabaron elementos de prueba incriminatorios, pero en el proceso penal no puede continuar la investigación si no se le da la posibilidad a las personas imputadas de ejercer su defensa en la declaración indagatoria.

Precisamente, en la causa penal, el fiscal y el juez consideraron necesario detener a los imputados con notificación roja para que puedan ejercer su derecho de defensa mediante la declaración indagatoria.

¿Qué requisitos legales tiene una declaración indagatoria?

Es un acto procesal que comienza con la información a la persona imputada de que tiene derecho a contar con un abogado defensor y entrevistarse previamente en forma privada antes de declarar. Está regido por el juego armónico de los artículos 295, 197, 107, 184, 294 y 298 del Código de Procedimiento Penal de la Nación. Ante los cuestionamientos de mayores presencias de juez, fiscal, secretario de actuación, secretario judicial, imputado, defensor y fiscal, resulta definitorio recordar qué presencias hay en una sala de juicio oral y público de nuestro país cuando un imputado declara, y jamás hubo una tacha de nulidad al respecto en nuestro país.

¿Qué consecuencias jurídicas tiene la declaración indagatoria en la causa AMIA?

En concreto, una vez producida la declaración indagatoria, el magistrado queda facultado para dictar en el plazo de diez días hábiles el procesamiento del imputado.

El procesamiento significa que el magistrado consideró que existen elementos de convicción suficientes para estimar que el imputado participó del hecho delictivo. Precisamente, el art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación dispone: “En el término de diez (10) días, a contar de la indagatoria, el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste”.

En la mayoría de las causas judiciales, luego de apelado y confirmado el procesamiento, ya se requiere la elevación a juicio y la causa queda radicada en un tribunal oral para ofrecer prueba y fijar fecha de juicio.

Es decir, que tomar la declaración indagatoria es un avance más en el trámite de la causa AMIA y pone a los responsables más cerca del juicio oral.

Además, en el ámbito de las relaciones internacionales se tiene una herramienta más fuerte de presión. Los imputados se encontrarían procesados rebatiendo sus argumentos defensivos.

Por eso, no resulta casual que ciertos grupos de víctimas del atentado (Memoria Activa y 18J) y Amnistía Internacional apoyen el memorándum como un medio para avanzar en la causa judicial.

Desde ya, nada evita que el fiscal desde la celebración del memorándum continúe con la investigación. En ningún momento, del tratado se sujeta a las autoridades judiciales a esperar un dictamen de la comisión o las audiencias con los imputados. Pueden proseguir con la investigación normalmente.

¿Es posible seguir con la causa sin la declaración indagatoria?

Si bien es posible continuar recolectando elementos de prueba, no se puede lograr ningún avance respecto de la situación procesal de los imputados con notificación roja en Irán. Desde ya, no pueden ser sometidos a juicio mientras no sean extraditados y nuestro sistema constitucional no admite el juicio en ausencia.

e) El memorándum permite realizar la declaración indagatoria a las personas imputadas con notificación roja

Claramente, el art. 5 está redactado para que las autoridades judiciales argentinas realicen la declaración indagatoria. Las autoridades iraníes que van a estar en la audiencia no llevan adelante ninguna causa judicial por estos hechos. Por su parte, ya analizamos la función de la Comisión de la Verdad.

El art. 5 en su texto prevé expresamente el término “interrogar” igual al utilizado por el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación cuando regula la declaración indagatoria. En inglés se utilizó el término “questioning”.

Precisamente, un instituto análogo está previsto en el Estatuto de Roma con iguales términos en el art. 55, segunda parte.

Sin lugar a dudas, entonces, la comunidad internacional entiende que el término “questioning” es igual a “interrogar”. Siguiendo este razonamiento, el término “interrogar” es el mismo que utiliza nuestra normativa procesal cuando se refiere a la declaración indagatoria.

La asistencia de las autoridades iraníes no invalida el acto, porque su intervención es al solo efecto de asegurar que el desarrollo de la declaración no violente las leyes locales. Téngase en cuenta que se estaría produciendo un acto judicial del derecho argentino en el ámbito territorial de Irán. Por el contrario, puede entenderse que es una garantía para las personas imputadas, por ende, no puede ser un argumento utilizado para nulificar la causa. Similar tenor tendría la presencia de la Comisión de la Verdad.

En conclusión, el memorándum da las condiciones para que se celebren declaraciones indagatorias válidas. Desde ya, son las autoridades judiciales las que determinarán en última instancia, en el momento e in situ si se dieron las condiciones formales necesarias para darle validez al acto procesal.

f) La realización de actos procesales en el exterior por parte de la Justicia argentina

La realización de un acto procesal en el extranjero por parte de un juez argentino no constituye una cesión de soberanía. Por el contrario, el otro país al admitir que el juez argentino realice un acto procesal limita su soberanía.

En este caso, Irán aceptó que las personas imputadas con notificación roja sean sometidas a prestar declaración indagatoria.

¿Quién cede soberanía? Irán acepta que por la orden de un juez argentino se detenga en su territorio a un ciudadano iraní, se le impute un delito y se lo pueda interrogar. Claramente, es Irán el que está permitiendo que una autoridad extranjera ejerza el poder público en su territorio. Desde ya, con el control de las autoridades judiciales locales, como acontece en las medidas de cooperación y asistencia judicial, a fin de asegurar el respeto de la ley nacional.

Cabe señalar que expresamente Irán está reconociendo legitimidad a la Justicia argentina y a la investigación judicial, sino no admitiría que magistrados extranjeros realicen actos procesales en su territorio.

La realización de actos procesales en el exterior por jueces argentinos viene siendo realizada en distintas causas judiciales en los últimos años.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado la acordada nro. 21, de 1993, por la cual regula la comisión o traslado al exterior de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

g) La notificación a la Secretaría General de Interpol del memorándum

La comunicación del memorándum a Interpol una vez que sea firmado no tiene ningún efecto en la vigencia de las notificaciones rojas.

Estas notificaciones tienen vigencia mientras no hayan cesado los motivos que la justificaron. Estas se encuentran regidas por el Reglamento de Interpol para el Tratamiento de Datos, el cual dispone en el art. 80 segunda parte y 81, cuando las alertas rojas dejan de tener efecto. Para ello se requiere:

- 1) la solicitud de la Oficina Central Nacional o la confirmación de la Oficina Central Nacional.
- 2) el cumplimiento de la finalidad en este caso es mantener estas notificaciones si se mantienen las condiciones mínimas (gravedad del hecho y de la pena)

Precisamente, las notificaciones rojas se dictaron con miras a la extradición para proceder a realizar la declaración indagatoria de los imputados y continuar con el trámite de la causa penal. Ahora, mientras no se realicen estos actos, la notificación mantiene su vigencia en Interpol.

Hay que tener en cuenta que luego de producida la declaración indagatoria, el magistrado puede dictar el procesamiento con prisión preventiva y, entonces, la medida seguiría plenamente vigente.

En conclusión, si no hay conformidad de las autoridades argentinas o una solicitud expresa, las notificaciones rojas siguen vigentes pese a la comunicación del memorándum. Estas medidas siguen vigentes hasta que sean extraditados los imputados para ser juzgados en nuestro país o hasta que el juez deje de considerar necesaria la extradición. Justamente, el art. 82 dispone con claridad la función de estas notificaciones rojas: “Las notificaciones rojas se publicarán a petición de una Oficina Central Nacional o de una entidad internacional dotada de competencias en materia de investigación y enjuiciamiento penal para solicitar la localización de una persona buscada y su detención o limitación de desplazamientos con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares”.

h) Como se advierte en los argumentos vertidos con el propósito de desnaturalizar el entendimiento, habemos quienes pretendemos verdad y justicia a través de nuestro mecanismo institucional y de la misma manera que lo hicimos cuando fuimos víctimas de los peores atentados a los derechos humanos en la pasada dictadura. En este presente no lejano, los argentinos fueron objeto de dos atentados: la voladura de la embajada de Israel y de la AMIA, símbolos de una comunidad que reconocemos, pero que fue dirigido a los argentinos. Los muertos en dichos atentados son argentinos. La Argentina no va a armar Guantánamo, ni va a romper las fronteras internacionales para matar a los imputados. Va a respetar la vigencia de los derechos, por lo que construimos esta patria, por lo que honramos esta bandera que preside este recinto, donde vamos a tomar una decisión trascendente, verdad y justicia para todos los argentinos y para todos los que habitan el territorio argentino.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA NEBREDA

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Deseo expresar mi adhesión a la iniciativa del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para procurar avanzar en la búsqueda de justicia en la causa por el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina – AMIA- que causó la muerte de 85 personas, con cientos de heridos y un legado de dolor que trasciende el daño físico padecido por los damnificados directos.

Es ocioso detallar el devenir de la causa judicial original, que terminó con el procesamiento de funcionarios judiciales, policiales, de inteligencia y políticos de primer nivel, por encubrimiento, abuso de autoridad, violación de los medios de prueba y falsedad ideológica, entre otros delitos. Como bien surge del expediente que desarrolló el juez Lijo, y cuya lectura es sumamente recomendable para conocer sobre la manera en que se administró la causa AMIA desde un principio, habría existido una fenomenal complicidad para obstruir el normal avance de la investigación, entre otros motivos para impedir profundizar otras hipótesis o pistas.

Porque lo cierto es que en la causa AMIA durante los años siguientes a su producción dominaron la complicidad, la obstrucción y la desidia.

El gobierno de Néstor Kirchner rompió cualquier posibilidad de complicidad cuando ordenó la apertura de los archivos de la SIDE sobre la AMIA y los puso a disposición de la Justicia.

El estatismo en la causa, su parálisis, se quebró con ese hecho que sirve de antecedente a la medida que ahora debatimos.

El memorándum es una coherente continuidad del impulso a la investigación que le dio el ex presidente Néstor Kirchner. Y quiero decir que mucho más cómodo hubiese sido hacer nada, simplemente dejar que el tiempo pase y los reclamos prosigan. Sin embargo, la presidenta asumió el riesgo de actuar. Siempre la acción implica algún riesgo, de allí que los anteriores responsables políticos optaran por la inacción.

Pero los gobiernos de Néstor y Cristina decidieron honrar el compromiso que en su momento asumieron, para que la búsqueda de justicia y verdad se impusiera a la parálisis, la cómoda parálisis.

También es cierto que lo que debatimos fue en su momento adelantado por la propia presidenta, en la ONU, cuando invitó a los representantes de Irán a procurar un diálogo. Siempre se optó por el diálogo y la acción orientada a la publicidad y la transparencia de las medidas.

Quiero destacar que no se trata de una negociación a espaldas de la ciudadanía, en un marco de oscuridad y ocultamiento. La presidenta decidió poner en el debate público su propuesta, para que sea aceptada o no por los representantes legítimos de los argentinos. Como ella también lo es, cabe recordar.

Mucho se discute sobre Irán, no son pocos los que suelen denunciar las características de su régimen, lo retrógrado que es en muchos aspectos. Estimo que con este proyecto, al brindarles la posibilidad de expresarse, nos diferenciamos sustantivamente de lo que suele acusarse como lo peor de su sistema jurídico político, ya que hacemos una extensión de los principios que caracterizan a nuestro sistema procesal, que dan lugar al derecho de defensa y de ofrecimiento de prueba, pero sin dejar de lado el interés nacional de lograr desarrollar un proceso completo, que permita alcanzar una sentencia definitiva contra los culpables.

Aceptamos el debate público, la presentación de todo tipo de cuestionamientos, y mostramos la disposición a escuchar a la otra parte.

Publicidad, respeto por las garantías más preciadas y debate, son clara expresión del régimen democrático y republicano que tenemos.

La posibilidad de interrogar, indagar o preguntar a la parte imputada, con toda la originalidad que siempre tiene lugar en el ámbito de las relaciones diplomáticas, la concreción de lo que este memorándum persigue, no es garantía suficiente de absolutamente nada, pero es condición necesaria para absolutamente todo.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO OBIGLIO

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

No hay otra opción respecto del acuerdo de entendimiento firmado con Irán para el supuesto esclarecimiento del atentado contra la AMIA, que su rechazo.

Son varios los motivos que me llevan a ello. A este respecto, comparto todas y cada una de las razones expuestas por el diputado Pablo Tonelli, quien ha centrado su rechazo en la inconstitucionalidad del acuerdo. Un acuerdo inaceptable, que transfiere la competencia de tribunales argentinos a Irán, habilita la intromisión del Poder Ejecutivo en la independencia del Poder Judicial y viola el principio del debido proceso.

Todos estos argumentos constitucionales son suficientes para echar por tierra lo pactado por el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. No obstante ello, hay otros motivos que van

más allá de los principios normativos dispuestos por nuestra Constitución Nacional. Son principios de orden moral y de alineamiento internacional

La ONU informa que en 2011 más de 600 prisioneros fueron ejecutados en Irán. Un año después, en 2012, el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad aplicó la pena capital a más de 400 personas, 55 de ellas en actos públicos. Tan escandaloso es esto que hace pocos días el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, expresaba su consternación por el aumento de las ejecuciones en Irán, que en muchos casos recayeron sobre menores de edad, lo cual convierte a Irán en violador de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Pacto Internacional de la ONU sobre Derechos Civiles y Políticos.

A la aplicación discrecional de la pena de muerte, debemos sumar las continuas amputaciones y azotes; la tortura y el maltrato a los reos; las detenciones arbitrarias; la violencia de género y los procesos judiciales injustos y sin ejercicio libre del derecho de defensa.

A dichos castigos físicos, debemos agregar que en Irán se violan sistemáticamente otros derechos, como el de expresión, asociación y reunión, o el de profesar libremente las religiones. Ello sin olvidar la capitis diminutio a la que someten a las mujeres.

Este abanico de atropellos ha llevado a que la ONU decidiera intervenir a través de su Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos, cuyo nombramiento fue caratulado por el gobierno iraní como “sabotaje político” negándose toda cooperación. Todo esto figura en el Informe de Amnistía Internacional sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Islámica de Irán del 12 de febrero de 2013, o sea, de hace apenas dos semanas atrás.

A la vulneración de los derechos humanos y civiles, debemos sumar las sanciones que han sido aplicadas a Irán por la violación a las normas internacionales referidas al uso bélico de la energía nuclear y al desarrollo de armas balísticas de largo alcance, es decir, misiles.

La República Islámica de Irán reconoce tener un programa nuclear y que dicho programa sólo responde a fines pacíficos, pero atento a que dicho régimen no respeta siquiera los derechos más básicos del ser humano, justo es sospechar acerca del uso que le dará a su potencial nuclear. Las sospechas aumentan cuando vemos que el gobierno iraní se niega constantemente a las inspecciones de los representantes de los organismos internacionales como la Agencia Nuclear de la ONU. La reticencia del régimen de Ahmadinejad a las pesquisas es motivo de las sanciones que el Consejo de Seguridad de la ONU le ha aplicado. Al impedimento mencionado, debemos agregar que Masud Jazayeri, número dos del Estado Mayor iraní, ha afirmado que sus misiles son capaces de vulnerar el sistema antiaéreo israelí, y que ello implica la violación del Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares.

Todos estos motivos ponen en evidencia el desprecio que el actual régimen gobernante en Irán tiene por la dignidad humana y los compromisos asumidos en el marco internacional. Frente a ello deberíamos cuestionarnos el grado de respeto que ese país demostrará por el tratado cuya ratificación estamos debatiendo en este momento. Resulta claro que es pueril pensar que Irán prestará realmente colaboración con la Justicia para el esclarecimiento del atentado en el que habrían colaborado funcionarios allegados al presidente Ahmadinejad y que hace 19 años le costó la vida a 85 argentinos.

La Argentina tiene una tradición histórica de respeto y promoción de los valores occidentales, que tienen como base la libertad, la igualdad ante la ley, el respeto por la vida, la división de poderes, el Estado de derecho y tantas otras cuestiones que han hecho de esta tierra un próspero país plenamente integrado con el mundo.

El actual régimen de Irán representa exactamente lo contrario, por ello Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, tienen excelentes relaciones con aquel, y representan al grupo de países con menos libertad y desarrollo de la región.

La Argentina debe elegir en qué grupo de países quiere estar. Si reconoce a Irán como un interlocutor válido y confiable, al cual le cede su soberanía judicial, se alinearán con el club de aquellos con los cuales nadie quiere tratar. Ello es un error estratégico con altísimo costo para el país y sus habitantes.

La estrategia de la Argentina tiene que ser exactamente la contraria: debe rechazar todo acuerdo con Irán y exigir el cumplimiento de los fallos judiciales de sus tribunales, que son plenamente soberanos. Con la ratificación de este acuerdo, el cual implica la cesión de nuestra administración de Justicia; la Argentina estará entregando a Irán parte de su soberanía. Ello resulta escandaloso e incluso paradójico

si se considera que la presidente Cristina Fernández de Kirchner le ha negado a Chile la extradición, y ha dado asilo político al terrorista Galvarino Apablaza Guerra, acusado por el asesinato, en plena democracia, del senador chileno Jaime Guzmán. De rechazarse el acuerdo y exigirse el cumplimiento de recurrir a los tribunales locales, la Argentina contará con el apoyo de los países con los que compartimos historia y valores, y con el de todas las instituciones democráticas internacionales.

Elegir el camino equivocado implicará soledad, aislamiento, olvido e intrascendencia, algo que efectivamente merecen los que han firmado este acuerdo, pero no nuestra Nación.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA PUIGGRÓS

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Hoy nos toca analizar el Memorándum de Entendimiento suscripto entre nuestro país y la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista contra la sede de la AMIA.

En ese atentado murieron 84 personas y cientos resultaron con heridas de distinta gravedad. Todas esas personas eran de nacionalidades, religiones, ocupaciones y edades diversas. Todas esas personas tienen en común haber estado ese 18 de julio de 1994 a las 9 y 53 en la AMIA o en sus alrededores. Todas esas personas y sus familiares merecen del Estado el máximo esfuerzo para esclarecer el hecho, conocer la verdad y castigar a los culpables.

El derrotero que ha tenido la causa judicial por el atentado es demostrativo de la crisis que atraviesa al Poder Judicial: hubo sobornos, negligencia, impericia, pruebas que se perdieron, todo lo cual llevó a la destitución del juez Juan José Galeano en agosto de 2005 y a que, en marzo de 2012, en una causa conexa, el juez Ariel Lijo resolviera elevar a juicio oral las actuaciones en que se procesa al ex presidente, Carlos Saúl Menem, al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, al ex comisario, Jorge “Fino” Palacios, al ex juez Juan José Galeano y a Juan Carlos Anchezar y Carlos Castañeda, acusados de encubrimiento.

En el interín, el episodio producido con motivo de la detención en Inglaterra de quien fuera embajador de Irán en la Argentina al momento de producirse el atentado Hadi Soleimanpour. El juicio de extradición no prosperó, y la Justicia inglesa lo liberó debido a la endeblez de las pruebas aportadas por la Argentina. En la actualidad, Soleimanpour ya no está imputado y la Argentina debió hacerse cargo del pago de las costas y gastos ocasionados.

Hoy, con cinco pedidos de captura internacional, la causa AMIA se encuentra paralizada, sin que se vislumbre, a casi 19 años del hecho, posibilidades de que la misma avance.

Indudable ha sido el compromiso del presidente Néstor Kirchner y de la actual mandataria, tanto en ejercicio de la Presidencia como cuando en su función de senadora integró la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la AMIA.

En ese sentido, fue Néstor Kirchner quien ordenó la desclasificación de las actuaciones llevadas a cabo en la SIDE, relevó a ex funcionarios de este mismo organismo de la obligación de guardar secreto para que pudieran prestar declaración, autorizó el acceso a la base de datos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y cualquier otra dependencia o fuerza dependiente de la administración nacional.

Ambos, Néstor y Cristina, han mantenido firme el reclamo ante la Asamblea de las Naciones Unidas en pos de lograr el esclarecimiento de los hechos, conocer la verdad y, finalmente, lograr que se haga justicia.

Nuestro gobierno busca soluciones en el marco de la paz y del derecho, con política, porque cuando se niega la política (como lo hace la oposición) lo que resta es la guerra. Así lo hace cuando reclama la soberanía sobre nuestras islas Malvinas, así lo hace cuando condena los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante la última dictadura militar, y con esa misma convicción busca el camino de la verdad y la justicia en este conflicto con República Islámica de Irán.

En este caso, lo hace en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, que en su art. 33 dice: “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.”

Sería irresponsable involucrar a la Argentina en un conflicto bélico que le es totalmente ajeno, y sólo quienes viven despreocupados de la suerte del pueblo argentino podrían proponer semejante desatino. Pero muchos discursos de la oposición parecen esperanzados en que fracase el tratado, en que Irán no cumpla. Advirtamos que esa apuesta es justificatoria de conductas bélicas dignas de los halcones, de la proliferación de armamentos y de la concentración de armamento nuclear en manos de Estados Unidos. Esa postura es la que pone en riesgo a la Nación.

Una vez más, le toca a este Congreso tomar definiciones frente a este hecho trágico, frente a este atentado que tantas vidas costó y tanto dolor todavía nos causa. Le toca intervenir a este Congreso porque así lo dispone la Constitución Nacional, porque es este el procedimiento que debe seguirse cuando se pretende aprobar un tratado con una nación extranjera. No podemos ser nosotros un obstáculo para la búsqueda de la verdad y la justicia. No puede este Congreso ser un impedimento en este intento de esclarecer lo sucedido en aquella mañana de julio de 1994. Los familiares de las víctimas y todo el pueblo argentino merecen saber y es nuestra responsabilidad brindarles esta herramienta que es el Memorándum.

Nuestro compromiso con la causa AMIA es genuino: nosotros no escatimamos esfuerzos ni especulamos con que ya hemos hecho mucho más que otros. Nosotros tomamos el ejemplo de las Madres y Abuelas en esto de ir avanzando, aún frente a la adversidad, pero siempre con paso firme en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Es por eso que adelanto mi voto positivo al memorándum, con la convicción de que será un avance en la búsqueda del esclarecimiento de estos hechos.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RAIMUNDI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Señora presidenta: desde el bloque del Frente Nuevo Encuentro adelanto que vamos a apoyar el dictamen de mayoría.

Uno de los errores que más comúnmente llevan a tomar caminos equivocados en la política y en cualquier orden de la vida es la descontextualización, esto es, sustraer a un hecho de las circunstancias del tiempo y del lugar y ponderarlo como si estuviera en el medio de circunstancias ideales. Opino que mucho de lo que se ha expresado en este debate tiene que ver con eso.

Las cosas no son óptimas. El primer óptimo hubiera sido que el atentado no se produjera; el segundo, esclarecerlo desde un primer momento y, de no cumplirse los anteriores, el tercero podría haber sido que el país al que pertenecieran los imputados estuviese acostumbrado a respetar las normas del derecho internacional y a tener una ley de extradición. Pero ninguna de esas circunstancias de tiempo y lugar es así.

Si se hubiera dicho que la alternativa a este memorándum es continuar el juicio en las condiciones ordinarias en los tribunales argentinos pero se elige Teherán, sí habría sido una claudicación. El pequeño detalle es que esa alternativa no existe; estamos cotejando con un conjunto vacío.

Quisiera orientar mi intervención al hecho de que la no aprobación de este memorándum implica continuar con la inmovilidad, por lo cual sería bueno preguntarnos a quién favorece ésta.

Hemos escuchado críticas de dos órdenes. Algunas se refieren específicamente al memorándum; por ejemplo, algún legislador sostuvo que es un texto “flojito”. Mire, señora presidenta, el texto del memorándum dice lo que tiene que decir.

Realmente se han dicho algunas cosas que parecen increíbles. En el plenario celebrado ayer y en esta sesión, como hay una comisión que tendrá acceso a la información, algunos han hecho un planteo crítico, como si en los hechos la delegación argentina abriera las cuatrocientas mil fojas del expediente a la Justicia iraní, y luego ésta pidiera un tiempo para sacar fotocopias, pero cuando les corresponde a ellos no brindan información alguna. A veces me cuesta rebatir cosas que están en un plano de irrealidad e irracionalidad tan grande, y por eso quise mencionar esto como botón de muestra.

En cuanto al tema de los plazos, cabe recordar que tratados firmados con países mucho más cercanos a la Argentina, como por ejemplo el protocolo para conformar el Parlamento del Mercosur, tienen sus plazos vencidos. Acá se pide rigurosidad a un tratado, cuando la marcha de las cosas la van fijando las circunstancias del diálogo y lo que sucede en otros ámbitos. Son muchas las circunstancias que contribuyen a cumplir con un determinado acuerdo.

El otro orden de críticas son las ideológicas o geopolíticas, a las que enseguida me referiré.

La señora presidenta de la Nación y el señor canciller han sido muy explícitos al separar el valor reparatorio que tiene este memorándum para las víctimas y sus familiares de la cuestión geopolítica, lo cual me parece muy correcto e inteligente. Sin embargo, como he escuchado muchas intervenciones que no se refieren a movilizar la causa sino que formulan un planteo ideológico y geopolítico, quiero tratar de encontrar un punto de contacto entre una y otra cosa, que de ninguna manera tiene la intención de incrementar el comercio.

Me parece que el punto de contacto es tratar de dar al mundo, a las partes, a los argentinos, a las víctimas, un mensaje profundamente antiterrorista, un mensaje profundamente contrario al terrorismo.

¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es lo peor. El terrorismo es la violación de la ley, la muerte de inocentes, lo imprevisible, la zozobra, lo artero, lo caótico, el miedo; es someter a la angustia a una sociedad, es no respetar en absoluto las normas ni el derecho; es la imprevisibilidad.

¿Hay una sola manera de ejercer el terrorismo? ¿Hay un solo Estado o un solo grupo de Estados que ejerzan actitudes terroristas o apañen organizaciones terroristas? Aquí tengo una diferencia central con la mayoría de las críticas que se han hecho. En mi opinión –no creo estar expresando sólo mi punto de vista–, me niego a adherir a una definición “oficial” del terrorismo. Por el contrario, prefiero conceptualizar al terrorismo desde los valores que destruye.

En este sentido, cuando el señor diputado Carmona aludió al principio de buena fe, eso fue tildado como naif, pensando que somos ingenuos al querer plantear el principio de buena fe en un acuerdo con un Estado terrorista. Considero que ese concepto es profundamente estratégico. Si hay algo que no puede hacerse al terrorismo es responderle con su propia lógica o hacerle lo que realmente merece. En esta materia la Argentina tiene una experiencia y un liderazgo internacional extraordinarios: en lugar de haber hecho a los terroristas de Estado lo que merecían, se les ha contestado con el derecho y con las plenas garantías procesales. Por tal motivo, el principio de buena fe, lejos de ser naif, es profundamente estratégico.

¿Por qué digo que prefiero conceptualizar al terrorismo desde los valores que destruye y no encapsular a un conjunto de Estados como Estados villanos? Si es por la cuestión de muerte de inocentes, ¿quieren hacer la cuenta de cuántos inocentes se mataron de un lado y del otro? Si es por la violación a la ley internacional, ¿no habría países que tendrían que desalojar los territorios invadidos, como les ordena el derecho internacional, y no lo hacen? ¿No tendríamos que reconocer el legítimo derecho que tiene el Estado palestino de contar con su territorio como Estado soberano? Si hablamos de la defensa de los derechos humanos fundamentales, ¿qué es la cárcel de Guantánamo sino un centro de tortura internacional?

Desde el punto de vista de las garantías procesales, uno de los grandes valores que representa Occidente, ¿se justifica que un grupo comando detecte a un líder terrorista, lo asesine y arroje al mar? ¿No es eso un retroceso civilizatorio en términos de lo que representa simbólicamente respetar las garantías de una persona? Recordemos que se trata de un terrorista que ellos mismos adiestraron cuando les convenía fortalecer al movimiento talibán contra la invasión de la ex Unión Soviética.

¿Tiene consecuencias menos graves que en un país hegemónico los conductores virtuales de los drones –aviones sin pilotos que están causando tantas víctimas inocentes– se recluten entre los chicos más talentosos para vencer en un video juego armado por el complejo militar tecnológico de ese país,

a fin de que cuando sean adultos estén más familiarizados moralmente con el crimen y el ataque? ¿Es menos grave eso para la ruptura de los valores fundamentales de la civilización humana?

Algunos me podrían decir que aquí se trata de un Estado, y yo contestaría que hay también otros Estados que acaban de desclasificar archivos que indican que el Departamento de Estado financió el golpe a Salvador Allende en el año 1973, en el cual murieron cientos de inocentes por una política de Estado que se tenía para la región.

Entonces, yo quiero salirme del esquema. Soy profundamente antiterrorista. Repudio con todo mi corazón lo que dice el presidente Ahmadinejad sobre el desconocimiento del Holocausto o de una agresión al Estado de Israel, pero me pregunto cómo se garantiza mejor la no agresión al Estado de Israel: ¿destruyendo a Irán o reconociendo al Estado palestino? Entonces, me niego profundamente a hacer este planteo desde la lógica de que de un lado están los buenos de toda bondad y, del otro lado, los malos de toda maldad.

Lo que es la peor bajeza es el terrorismo, es la peor bajeza moral, pero justamente si hay algo que no se le puede hacer es contestarle desde la misma bajeza. Por eso, cuando a una actitud terrorista se le opone otra del mismo calibre, lo que triunfa es el terrorismo. Como este acuerdo tiene una sola alternativa posible si no es aprobado, que es mantener la inmovilidad de la causa, la pregunta es a quién favorece que esta causa no se mueva.

Alguna línea argumental de crítica es fomentar la sospecha de que Irán no va a cumplir. Por las otras cosas que se dicen sosteniendo eso, me queda la sensación de que quienes apoyan eso necesitan que Irán no cumpla, porque si Irán no cumple, lo mantenemos encapsulado en el grupo de Estados villanos y eso nos permite mantener una ecuación de poder en Medio Oriente, que es la que fomenta el belicismo, los operativos comando, el comercio de armas y las bases militares desplegadas en los lugares donde están los recursos estratégicos de la energía.

Esa es la verdadera excusa de todo esto; no es que hay un Estado teocrático porque hay Estados teocráticos de diversas religiones.

Para finalizar, si hay algo que va a cambiar el acuerdo es que va a abrir una grieta en una piedra, va a permitir abrir un cauce en un expediente que está paralizado, y el mejor favor que le podemos hacer al terrorismo internacional es mantener la inmovilidad de esta causa.

Por eso, desde esta perspectiva y desde tantas otras que se han sostenido para aprobar este acuerdo, es que desde el bloque del Frente Nuevo Encuentro vamos a apoyar este dictamen.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SACCA

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

El ministro Timerman, manifestó que, para ayudar a la aprobación de este entendimiento con el gobierno de Irán:

1. "el único interés que el gobierno tiene con Irán es destrabar la causa AMIA".
2. "Como la oposición no puede discutir el memorándum, inventan que lo hacemos por razones geopolíticas o estratégicas".
3. "Me desilusiona la oposición argentina.
4. "Se habla desde la ignorancia y desde el odio, no desde el conocimiento".

¿Cómo no vamos desde la UCR a rechazar este convenio y a sospechar de las motivaciones inconfesables que existen detrás cuando ocurrieron hechos, posiciones, denuncias, desmentidos, ocultamientos detrás del tema?

Recordemos primero lo que le ocurrió al periodista José Eliashev luego de publicar en Perfil los comienzos de las negociaciones de los funcionarios de Irán y el canciller argentino quien, en una visita oficial por el Cercano Oriente, se separó de la delegación argentina y a escondidas voló hasta Siria para encontrarse con representantes de los gobiernos Sirio y de Irán.

Después de este trabajo periodístico...Pepe Eliashev terminó citado en un juzgado con la exigencia de presentar pruebas documentales...

¿Cómo no sospechar del acuerdo cuando el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ramin Mehmanparast, en referencia a los ocho altos funcionarios y altos cargos iraníes acusados por la Justicia argentina de estar relacionados con el atentado dijo que: "... no están en modo algunos preocupados por el acuerdo bilateral con la Argentina"?

El ministro iraní expresó que: "Irán y la Argentina han llegado a un acuerdo importante y los detalles están en el documento"...y cuando revisamos el convenio firmado por la presidente no podemos encontrar los temas que garantizan que la comisión podrá llegar a la verdad.

¿Cómo no dudar del acuerdo que está incurriendo en la violación de dos artículos de la Constitución Nacional? El 109, que prohíbe al Poder Ejecutivo arrogarse el conocimiento de procesos judiciales. La norma expresa: "En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".

El artículo 18 de nuestra Ley Fundamental. Entendemos que el memorándum entra en colisión con los principios básicos del derecho procesal penal, originados en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza que las causas tramitarán ante su juez natural y en el marco del debido proceso. El artículo constitucional señala, que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa".

Se trataría de someter la causa a un tribunal que no es el juez natural y se violaría el debido proceso con respecto a los acusados, pero también a las víctimas, que son los querellantes, como los familiares de los muertos, los heridos y la AMIA y la DAIA.

El acuerdo con Irán prevé la formación de una comisión de juristas que analizará la causa. Estos juristas podrán viajar a Irán para interrogar a los acusados de planificar la voladura de la AMIA que tienen pedido de captura de la Justicia argentina.

¿Cómo no creer que se baila con la música de Irán que pretende encubrir a sus altos funcionarios y a sus candidatos a presidentes?

El canciller Héctor Timerman indicó en la comisión de Diputados, que el interrogatorio a los sospechosos podría ser considerado una indagatoria en términos de la ley argentina, lo que es mentira, porque pueden no declarar. Nada de esto está escrito en el pacto. Hay que hacer un nuevo acuerdo para buscar la verdad y la justicia a la que las víctimas y la UCR no renunciarán nunca aunque la mayoría kirchnerista hoy nos los niegue.

¿Cómo no desconfiar si el ex vicecanciller (Roberto García Moritán) dijo que el acuerdo que la Casa Rosada firmó con Irán por el atentado contra la AMIA había sido rechazado por el ex presidente Néstor Kirchner durante su mandato?

Dirá Timerman que este es sospechado de corrupto en la gestión kirchnerista, y que él no le inició ni un sumario administrativo...pero eso es harina de otro costal.

¿Cómo creer al canciller si públicamente desconoce a Laura Ginsberg, titular de APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) y esposa de una de las

víctimas mortales del atentado a la AMIA a quién también públicamente la recibió en su despacho?
¿Será porque la señora Ginsberg manifestó que: "De los 19 años que tenemos de impunidad, el matrimonio Kirchner se lleva más de la mitad"?

¿Cómo tener confianza cuando desde las instituciones judías argentinas no quieren el acuerdo y expresan que: "Es inadmisibile que un gobierno democrático se siente a negociar con un Estado que promueve el terrorismo, como Irán"?

¿Cómo tener seguridad cuando Timerman insiste en que: "El memorándum logrará que los imputados estén ante un juez argentino y éste los interrogue y admitió que: `Podrán no declarar, pero también podrán no declarar acá'?", evitando decir que un juez en la Argentina tiene prerrogativas y en el mismo interrogatorio los puede arrestar.

¿Cómo tener fe en Irán si el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, habría recibido ayer una amenaza para que abandone la investigación del atentado contra la mutual judía, en el que murieron 85 personas?

El fiscal recibió un mail en el que se le habría exigido que deje el caso en 24 horas. En caso contrario, sus hijas sufrirían las consecuencias.

Recordemos que el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman aspiran a interrogar en Teherán a los ocho acusados y transformar esa audiencia en una indagatoria. Entonces Irán rechazó esa posibilidad, lo que generó la indignación de la comunidad judía que nos pidió que no aprobemos el Memorándum de Entendimiento.

Nisman es el esposo de Sandra Arroyo Salgado, quien fue la jueza de la causa por la supuesta apropiación de los hijos de la directora del diario Clarín, Ernestina de Noble.

En 2006, el fiscal acusó formalmente a Irán por el ataque a la mutual judía del 18 de julio de 1994 y señaló al grupo terrorista Hezbollah como la organización encargada de ejecutarlo.

Nisman solicitó también la captura internacional de ocho ex altos funcionarios y diplomáticos del gobierno de ese país que cumplían funciones en 1994.

¿Cómo vamos a aprobar este pacto de la señora Cristina con Irán cuando el doctor Moreno Ocampo, asesor de las entidades judías en la causa AMIA, y ex fiscal de la Corte Penal Internacional, advirtió hoy que el gobierno de Irán podría usar el memorándum de acuerdo "para ocultar la responsabilidad de los autores de los crímenes"?

Moreno Ocampo advirtió que "si la Comisión de la Verdad actúa de mala fe puede afectar el esclarecimiento de los hechos y la legitimidad del accionar de la Justicia argentina".

El ex fiscal opinó que, sería oportuno presentar los nombres de los candidatos a integrar la comisión" y aseguró que "clarificar ese tema central ayudaría enormemente a la discusión".

El asesor de las entidades judías sugirió que "se podría analizar si es necesario incluir en la ley a dictarse que el interrogatorio a los imputados deberá ser parte del proceso judicial argentino".

Lo más grave es que el acuerdo, al establecer la creación de una comisión para investigar el atentado, parece ignorar lo actuado por la Justicia argentina en una causa que aún está en curso.

Implicar al presunto culpable en la investigación, luego de haber llegado a conclusiones que llevaron a emitir la alerta roja por parte de Interpol, no tiene precedente.

La comisión por crearse, que eventualmente formulará "recomendaciones", no puede sustituir a la Justicia argentina. El informe final que redactará no puede suplir la labor de nuestros jueces ni la de los fiscales, pues el atentado ocurrió aquí y mal puede el gobierno resignar la jurisdicción.

Si el Poder Ejecutivo duda de lo actuado por la Justicia, debe proceder en el marco de ella misma, cuestionando o impugnando su labor. No puede hacerlo por medio de la comisión por crearse.

Una vez constituida esa comisión, proceso que seguramente no será rápido, sus integrantes y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para interrogar a las personas sobre las cuales Interpol, a solicitud de las autoridades argentinas, ha emitido la llamada "recomendación roja". Son los iraníes a quienes la Justicia local considera responsables del atentado.

La comisión aludida, cabe destacar, tendrá autoridad para realizar preguntas a los representantes de cada parte (esto es, a los de la Argentina e Irán). Cabe suponer que no interrogarán, cual alumno, al fiscal actuante, lo que sería inaceptable. Lo que no es obviamente lo mismo que interrogar a las personas ya requeridas judicialmente, atribución que no puede serle negada al fiscal de la causa.

No está nada claro si Nisman podrá interrogar, él solo, como obviamente corresponde, a los ciudadanos iraníes requeridos o si deberá hacerlo en presencia de los miembros de la Comisión, lo que sería limitar severamente sus facultades y constreñirlo fuertemente. Más aún cuando se lo obliga a hacerlo en el territorio de Irán.

Tampoco está claro si Irán se ha comprometido a entregar a los interrogados a la justicia argentina, si ésta eventualmente los requiriera, luego de sus declaraciones. En rigor, parecería que esto no ha ocurrido. Luego de los interrogatorios, entonces, todo podría volver a quedar paralizado. Como hasta ahora. Se habrá perdido más tiempo en una causa que cumplirá 19 años.

En caso de que el acuerdo celebrado entre los Poderes Ejecutivos de ambas naciones provocara controversias sobre su interpretación o aplicación, ellas serán resueltas por medio de consultas entre ambas partes, lo que puede naturalmente eternizar la puesta en marcha de lo acordado, particularmente, siendo que la diplomacia iraní es reconocida por su fabulosa capacidad de dilatar todo hasta el infinito, según lo demuestra la marcha de las conversaciones con la comunidad internacional relativas a su cuestionado programa nuclear.

Queda visto que el acuerdo está plagado de numerosos y graves interrogantes y contiene dudas de peso. Irán está inmerso en un complejo proceso electoral que tendrá lugar a mediados de este año y

que podría contribuir a dilatar, al menos hasta entonces, el trámite doméstico de aprobación del acuerdo comentado, procedimiento al cual curiosamente tampoco se ha puesto plazo alguno.

De esta manera, el gobierno argentino ha concluido, en la sombras y rodeado de las peores sospechas, lo que había comenzado con idéntica clandestinidad en los primeros contactos con Teherán. Se comprende ahora el porqué: se estaba negociando la entrega de la jurisdicción argentina y se facilitaba una nueva demora, quizá definitiva, para llegar a la verdad.

Salta a la vista quién gana y quién pierde en este acuerdo que nuestro Congreso de ninguna manera deberá refrendar. Gana Irán, pierde la Argentina. Y las víctimas del atentado, sus familiares y toda la sociedad argentina han sido burladas una vez más.

El acuerdo establece que se hará una "revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados".

Pero ya la Justicia argentina había determinado que ocho ciudadanos iraníes estaban sospechados y que, además, tienen pedido de captura internacional por parte de Interpol.

La comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja", fija el punto quinto de los nueve que integran el acuerdo, y agrega: "La Comisión tendrá autoridad para realizar preguntas a los representantes de cada parte. Cada parte tiene el derecho de dar explicaciones o presentar nueva documentación durante los encuentros".

¿Cómo pretenden que la comunidad argentina acompañe este tratado cuando Irán ayer dijo que no va a hablar el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, después dijo que va a cumplir y terminó diciendo que el atentado es obra de Israel... Supongo que el próximo paso será decir que nunca hubo un atentado, si niega el Holocausto.

El acuerdo con Irán es oscuro, confuso, es gravemente preocupante porque se compromete al país para siempre. Por su naturaleza no vinculante jurídicamente, el tratado con Irán "puede bloquear la causa para siempre".

Irán, por este acuerdo, aparece ante el mundo como buscando el diálogo, en una posición de racionalidad y de concordia. Cuando en realidad, este país, está sospechado del armado del atentado y su concreción, pero al no encontrarse pruebas, no tener un órgano de jurisdicción que obre y, obviamente por esta situación, no se puede poner en prisión a nada ni nadie".

Irán aparecerá como el que propuso el diálogo, como lo hizo en su momento Kadafi en un conflicto internacional, y resarcirá económicamente, probablemente, como lo hizo Kadafi en su momento y allí quedará el asunto para la comunidad internacional".

Ante todo esto es sabido que Irán sale ganando, mientras que el único que va a perder, es la Argentina.

¿Cómo creer en este pacto con Irán? Esta es una maniobra del gobierno que oculta el fracaso de su política para resolver el tema AMIA, incluso en el terreno en el que se pasó 10 años acusando sin mayores pruebas o manipulándolas.

Lo están tratando de hacer desde 2003, cuando el ex canciller Bielsa quería trasladar la causa y resolverla en un tercer país. A partir de entonces, la causa estuvo puesta al servicio de la guerra en Medio Oriente, siguiendo las políticas de Bush y Sharon.

Con la firma del convenio la causa pasa ahora “al servicio de la paz”, porque las grandes potencias, así como en el pasado tenían a Irán como centro del Eje del Mal, hoy tienen que llegar a un acuerdo con él para negociar la cuestión nuclear. Este tema del inicio de la negociación que va a empezar el 26 de febrero es tan importante que hasta la presidenta lo incluyó en su discurso y figura en los considerandos de la ley. Lo que ocurre es que la Argentina quiere disimular lo que hace.

¿Cómo creen que nos encolumnaremos en esta nueva aventura del oficialismo?

Si el gobierno del matrimonio Kirchner nunca hizo nada para resolver el atentado. Peor que eso: trabajó en contra de cualquier posibilidad para acusar y condenar a la conexión local. El Estado es el responsable encubridor del atentado reconocido por decreto presidencial. Lo que tratan de hacer ahora es esconder un profundo alineamiento con las políticas de Obama. Hasta ayer, Cristina iba a las Naciones Unidas a condenar a Irán y ahora, de pronto, en medio de un giro habla de que es necesario negociar.

El giro no es casual: el Gobierno lo hace porque también lo hizo Estados Unidos. Las grandes potencias deben llegar a un acuerdo para resolver el tema de la energía nuclear y también para permitir la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán e Irak.

¿Cómo asumir la responsabilidad de aprobar este tratado si son correctas las conclusiones del juez y del fiscal?

La Interpol las consideró pertinentes como para emitir el pedido de detención contra los iraníes y el libanés requeridos por la Justicia argentina. No los emite sin analizarlos detenidamente. Tengamos presente la tarea de nuestros fiscales y las votaciones de la SECRETARÍA y la ASAMBLEA GENERAL de INTERPOL que dieron curso a los pedidos de captura y a las CIRCULARES ROJAS.

Cabe recordar que en aquella oportunidad, la Comisión de Asuntos Jurídicos de INTERPOL, ante la destacada labor de los fiscales argentinos que expusieron en esa oportunidad, resolvió que las pruebas eran suficientes y aptas para requerir las capturas

¿Cómo creer con los antecedentes que tiene Irán en acuerdos de entendimiento por hechos que lo involucraron?

Un ejemplo muy relevante para los argentinos es el que siguió al atentado en el restaurante Mykonos, donde fueron asesinados cuatro jefes de la oposición kurda en Irán. Tanto el fiscal como el juez fueron hasta las últimas consecuencias y emitieron una orden de detención contra Falagian, entonces ministro de Inteligencia iraní, acusándolo de haber organizado la masacre, y contra otros cuatro funcionarios de Teherán.

En el juicio quedó al descubierto el organigrama de decisión política de los atentados en el exterior, que incluye al líder espiritual Jamenei, el presidente, el Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria. Unos días antes, Falagian llegó a Alemania para tratar de presionar a sus colegas alemanes, pero el juicio se efectuó y en 1996 se emitió una orden de captura contra los acusados prófugos, que Irán nunca permitió que sean interrogados.

Por amenazas de Irán los miembros del comando de eliminación fueron liberados sin completar sus condenas. En 1994, dos meses antes del atentado a la AMIA, un accidente de tránsito evitó que un camión con una tonelada de explosivos destruya la embajada israelí en Bangkok. El ciudadano tailandés que murió en el accidente debía entregar el camión a un agente iraní para materializar el atentado. Este fue detenido y condenado a muerte, pero su pena fue postergada por 4 años por presión iraní, hasta que fue liberado y en Teherán lo recibieron como un héroe.

Otro ejemplo: cuando los servicios de seguridad franceses detuvieron a los integrantes de la banda terrorista, descubrieron que estaba integrada por elementos de países norafricanos a la cabeza de los cuales se hallaba un tunecino, pero que los expertos en explosivos eran agentes del Hezbollah.

En este caso Irán entró supuestamente como mediadora entre el Hezbollah y Francia para evitar acciones de venganza en territorio francés. Los iraníes pusieron tres condiciones a su “mediación”: liberar a todos los terroristas, descongelar dos mil millones de dólares de cuentas iraníes en bancos franceses y que Francia interrumpiera la venta de armamento a Irak. Todo se cumplió al pie de la letra. La única condición que puso Francia fue que estos dejen de actuar en su territorio. Pero en 1991 un agente iraní asesinó al ex presidente Bajtiar en París, donde unos años atrás se había salvado de otro atentado que cometiera uno de los agentes iraníes liberados.

Por estos antecedentes y muchos más no veo ninguna posibilidad real de que se permitan los interrogatorios, ni de que se entregue algún chivo emisario como en el juicio de Lockerbie, cuando Libia, presionada por EEUU y la OTAN entregó a un agente que asumió la responsabilidad personal por el atentado al avión estadounidense.

Acá las huellas llevan a la dirigencia y no veo posible que ahí pueda entrar la Justicia argentina. Los iraníes tienen una experiencia exitosa en postergación. La Comisión de Energía Atómica viene pidiendo hace años investigar varios centros nucleares en Irán y no se les permite a sus representantes investigar libremente. Esta es la política iraní y a nadie debe sorprender por lo tanto sobre el intento de llegar a una “Comisión de la Verdad”, en vez de llegar a la verdad en sí.

¿Cómo aprobar esto cuando tenemos la referencia de que el juez federal Ariel Lijo decidió elevar a juicio oral la causa que investiga el encubrimiento por el atentado contra la AMIA, en donde están procesados el ex juez Juan José Galeano, el ex presidente Carlos Menem y su secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy? Será también para limpiar de esta causa al senador aliado del oficialismo, ya que se observan las irregularidades por la investigación de la masacre ocurrida el 18 de julio de 1994 y que mató a 85 personas.

¿Cómo compartir responsabilidades con este compromiso de la presidente con Irán si en febrero del 2011, en la víspera del 17 aniversario del ataque terrorista a la AMIA, hubo fisuras y contradicciones en el discurso de los sorprendidos funcionarios nacionales?

Recordemos que el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, señaló que es “una posición irreductible de la Argentina” la que sostiene que “con el terrorismo no se negocia”, y sostuvo que el gobierno sabe que “la salida es por la ley y por la justicia”.

Hoy ya senador dice otra cosa.

Fernández propuso analizar de qué se trata el mensaje que está queriendo hacer llegar el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, y dijo que sobre ello también debía actuar la Cancillería. Afirmó que la Justicia local ya había tomado una “determinación”.

Habló entonces de “determinadas personas” –en referencia al grupo de iraníes acusados en Buenos Aires y con pedido de captura internacional– que conforman lo que se suponía habían sido los “autores intelectuales y materiales del hecho”.

Y por último, nosotros no logramos entender los cambios de posición de la señora presidente. Traigo aquí para refrescar la memoria el fuertemente aplaudido discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando denunció a Irán en su discurso ante la ONU y pidió la extradición del ministro de Defensa de ese país, acusado de la voladura de la AMIA.

El 24 de setiembre de 2009, con un discurso severo y cargado de fuertes críticas hacia el líder iraní, Mahmoud Ahmadinejad, la presidenta Cristina Kirchner exigió en la ONU que Irán extradite a los ex funcionarios investigados por el atentado en la AMIA, entre ellos el designado ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, buscado por Interpol desde el año 2008.

Recordemos que incluso la presidente ordenó a la delegación argentina que se retirara del recinto del plenario de la ONU en el momento en que hablara Ahmadinejad. El reclamo vinculado con la AMIA fue uno de los pasajes salientes de la intervención de Cristina Kirchner en el foro internacional más importante del mundo.

El primero en exigirle a Irán colaboración con la justicia había sido Néstor Kirchner en 2007. La presidenta dijo que no podía dejar de insistir en el pedido de colaboración a Irán porque Estados Unidos y la Argentina "son los únicos que sufrieron atentados del terrorismo internacional".

"Hay garantías de libertad, de justicia, de administración de justicia y, sin embargo, nada de esto ocurrió, sino que este año uno de los funcionarios, cuya extradición era solicitada por el fiscal que interviene en la causa, fue ascendido al grado de ministro."

Dijo que seguramente Ahmadinejad en su discurso volvería "a negar tragedias históricas que Occidente ha sufrido durante el siglo XX; invocará la amenaza de otros imperialismos y también invocará a Dios". Y dirigiéndose directamente a él, dijo que ninguno de los dos creía que Dios pueda obligarlos "a proferir amenazas o a no cumplir con la Justicia".

¿C cambió la presidente?

Nosotros los radicales no cambiamos defenderemos hasta las últimas consecuencias la democracia, la libertad y la justicia... por ello rechazamos este proyecto.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA SCHMIDT LIERMANN

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

El convenio con Irán simboliza el fin de una política argentina de defensa de los derechos humanos. ¡Qué hipocresía la de nuestro gobierno!, que por un lado proclama defender los derechos humanos y al mismo tiempo apoya los cánticos del nuevo fascismo de Hezbollah y de Hamas, que quieren ver destruido al Estado de Israel.

De la mano de este mismo gobierno se aprobaron leyes que avalan el matrimonio igualitario, pero como país cerramos convenio con un régimen que persigue a lesbianas y homosexuales, condenándolos a latigazos, cárcel e incluso a pena de muerte. Hablamos de “todos y todas” y nos damos la mano con aquel que apedrea salvajemente a mujeres, que mueren desangradas. Les damos la

espalda a las mujeres iraníes que luchan desde hace tiempo para acabar con la discriminación legal y son maltratadas, ridiculizadas y apresadas. Europa y varias asociaciones de defensa de los derechos humanos denuncian una situación catastrófica sobre el respeto de esos derechos. Se producen un elevado número de ejecuciones, lapidaciones, actos de tortura y persecución de las minorías políticas, étnicas y religiosas. Según las Naciones Unidas más de 600 personas fueron ejecutadas en Irán, solamente durante el año 2011 sin un debido proceso judicial. Y el centro de Shirin Ebadi -que recibió el Premio Nobel en el 2003 por su lucha en defensa de los derechos humanos en su país -denuncia que desde el triunfo de Mahmoud Ahmadinehad en las elecciones de junio de 2005 "se ha vuelto atrás hacia los primeros años de la revolución islámica". ¿Qué posibilidades de cumplimiento de un memorándum puede haber, con un país que viola sistemáticamente acuerdos? No se trata entonces "sólo" de aprobar un memorando relacionado con la investigación de la AMIA (por la que todavía lloramos a casi un centenar de víctimas), sino de mostrar públicamente que se está en buenas relaciones con un régimen inhumano, relativizando no sólo el peligro que implica Irán por su programa atómico, sino bendiciendo el terror que sufre la población de Irán y legitimando el apoyo a un terrorismo internacional. Por ende, la sola idea de este convenio, indica que la política de defensa de los derechos humanos que ha pregonado este gobierno, es sólo un relato. No debemos olvidar por cierto que uno de los sospechados de haber participado en el atentado a la AMIA es el iraní Ali Fallahian, quien fuera jefe de inteligencia y hoy es el primero que confirmó su candidatura a presidente para las elecciones del 14 de junio en su país. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿Realmente cree el señor Timerman, que este sujeto se va a someter a la Justicia argentina? Y otro detalle más a recordar: Ali Fallahian fue encontrado culpable por un tribunal de Berlín, en 1997, de haber organizado la ejecución de 4 disidentes iraníes kurdos en 1992, en el restaurante Mykonos, de esa ciudad. Existe hoy una orden de captura alemana contra Fallahian.

Por último, otro detalle no menor de tipo técnico procesal no mencionado aún, es el referido al instituto del querellante particular en el proceso penal. El o los damnificados tienen legitimidad como mandantes de poner los límites a las peticiones en el proceso penal. En este caso claro está su inobservancia, ya que la mayoría de los damnificados directos no están de acuerdo con la firma del memorándum, por tanto pierde legitimidad y sustento la firma de este memorando.

Como diputada de la Nación, y como hija de alemanes que vivieron y sufrieron el nazismo, que reconocieron y se estremecieron con el Holocausto, me duele y me avergüenza que mi patria, que albergó a mis padres, hoy decida confiar más en los sospechosos que en los colegas políticos, que en la Justicia y que en los familiares de las víctimas. Como diputada nacional respetuosa de nuestra Constitución, no seré cómplice de un memorándum de esta naturaleza.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SOLANAS (J. R.)

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Quiero expresar previamente mi voto positivo a este proyecto que viene con media aprobación del H.S.N.

Brevemente, plantearé lineamientos que lógicamente tienen que ver con la búsqueda de la verdad de este terrible hecho que fue el atentado a la AMIA:

- *) Una, que tiene que ver con el accionar político de nuestro gobierno en pos de lograr objetivos en beneficio de nuestra Nación y de la mayoría de los argentinos;
- *) Otra tiene que ver con el accionar político de la oposición;
- *) Y la más importante, la respuesta a los familiares y los seres queridos de las víctimas.

Señor presidente: por un lado nuestro gobierno, como desde el año 2003, viene implementando políticas que buscan los objetivos de mayor trabajo, mayor igualdad, mayor respeto, mayor integración, mayor memoria y mayor justicia. Y en ese sentido de mayor justicia y memoria, ningún otro con la altura moral como la de nuestro gobierno para llevar adelante acciones que conduzcan a la búsqueda de la verdad. Por eso es que hoy nos encontramos debatiendo este Memorándum de Acuerdo con la República Islámica de Irán y que nuestro gobierno nacional, popular y democrático ha puesto a consideración de este Honorable Congreso de la Nación.

Señor presidente: nuestro gobierno impulsa este acuerdo, porque realmente es necesario que la causa avance y se destrabe:

*) Para que con ello se deje de lado toda impunidad posible;

*) Para que con ello la Justicia argentina pueda tener más herramientas a su disponibilidad y así se puedan esclarecer los hechos que se sucedieron en la AMIA;

*) Para que con ello conozcamos la verdad sobre todo lo ocurrido en ese terrible atentado terrorista que produjera decenas de víctimas;

*) Y para que con ello demos respuestas a los familiares y a los seres queridos de las víctimas.

Señor presidente: es evidente y también es lamentable que algunos sectores políticos sigan buscando sólo oponerse por oposición misma. Veo cómo vienen paulatinamente utilizando como conveniencia política “la siembra permanentemente de dudas”. Eso es lo que siempre vienen haciendo algunos sectores opositores: plantean dudas e intrigas y ¿sabe señor presidente porque las plantean?, las plantean PORQUE CARECEN DE UNA ARGUMENTACION SERIA para debatir cuestiones de FONDO, y para ello sólo debemos escuchar cómo en este recinto y en algunos medios de difusión, algunos sectores siembran dudas e incógnitas sobre los resultados, pero nada dicen sobre opciones para avanzar en pos de la obtención de la verdad. Señor presidente: sólo con la verdad podremos obtener la justicia que los hombres de bien queremos.

Por otro lado y respecto de la oposición, quisiera señalar que sería muy bueno que todos los argentinos pudieran ver alguna opción alternativa a todas las que nuestro gobierno ha venido llevando adelante. Lamentablemente, señor presidente, la oposición no las plantea; y no las plantea porque con el transcurrir del tiempo se termina demostrando la falsedad de sus planteamientos o desviamientos de objetivos, y a eso se lo llama “mala leche política”. Lo que la oposición hace, oponerse por oponerse, son “chicanas”, son dichos que siembran dudas e intrigas donde no las hay, pretendiendo obstaculizar el accionar de verdad y justicia por los que luchamos todos los hombres de bien.

Lo esperable de la oposición es que esté a la altura de lo que implican estos terribles hechos. Lo esperable de la oposición es una voz crítica en favor del esclarecimiento, no en favor de la inacción. Señor presidente: los familiares de las víctimas necesitan que tomemos medidas que sean conducentes a la búsqueda de la verdad y del esclarecimiento de este infame atentado. Pude escuchar cómo familiares de las víctimas pedían que juzguen a los culpables, no importaba el lugar, podía ser en cualquier lugar del mundo, pero debía de juzgárseles.

Pero para responder por este tema, es necesario que los tres poderes del Estado trabajen en consonancia para que de este modo se llegue a averiguar la verdad y para poder así enjuiciar a los culpables. Este es el rol que debe y tiene el Estado que tomar. El Estado debe y tiene que dar las respuestas a los familiares de las víctimas y eso, señor presidente, desde este poder del Estado es lo que venimos hoy a realizar: dar respuestas a los familiares con actos que sean conducentes a la búsqueda de la verdad.

Por todo ello, señor presidente, por la memoria de los que hoy ya no están, por sus familiares y sus seres queridos, por la búsqueda de la verdad y por el juzgamiento de los responsables, es que quiero decir a nuestra presidenta Cristina que siga adelante por este camino, con el coraje que siempre la caracterizó, que este es el camino y que encontrará siempre en esta banca un defensor absoluto de la verdad y de la justicia para todos.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA VEAUTE

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Indudablemente, estamos sometiendo a debate este MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO celebrado con Irán, que tiene como origen un hecho terrorista que ha marcado la historia de los argentinos y que es una causa de todos los argentinos.

Es por eso que al llevar a cabo este debate debemos hacerlo con total y absoluta responsabilidad, pensando en cada una de las víctimas que se cobró el atentado a la AMIA, pensando en sus familias y en todas las demás víctimas del terrorismo.

El acuerdo con Irán prevé la creación de la COMISIÓN DE LA VERDAD y muchos se han estado preguntando el porqué de este nombre. Creo personalmente que más allá del significado que cada uno pretenda darle, lleva el nombre que persigue: ARRIBAR A LA VERDAD de lo ocurrido en 1994; la búsqueda de la verdad, de la verdad real, no de una verdad a medias o que convenga y convenza. Sólo queremos contribuir con el esclarecimiento de este hecho horroroso que nos pesa a todos, pero con la verdad real.

Hay que dejar algo bien en claro: la COMISIÓN no es un tribunal de enjuiciamiento, la soberanía jurídica argentina no se transfiere bajo ningún concepto, la causa judicial argentina es algo aparte que continúa su curso con sus magistrados, con su procedimiento y con la jurisdicción respectiva. La actuación de la COMISIÓN, entonces, es algo completamente aparte, no hay transferencia de jurisdicción, entendida ésta, como el alcance que tiene el Estado para ejercer su poder jurisdiccional, y al tener la posibilidad con este ACUERDO de interrogar a los imputados, se reconoce por parte de Irán la jurisdicción argentina.

Entonces, la idea central, el objetivo del MEMORANDUM es que a través de la COMISIÓN DE LA VERDAD se brinde transparencia sobre la investigación y que los acusados que son cinco, que cuentan con notificación roja de INTERPOL, sean indagados, que presten declaración indagatoria ante un magistrado argentino y poder así colaborar con la investigación al llevar a cabo un acto jurídico-procesal indispensable para todo proceso y ver incluso si desde allí se obtienen pruebas para imputar a los otros tres acusados.

Actualmente, la causa judicial argentina permanece inerte, inmóvil desde hace años. Entonces, ante esta alternativa, ¿por qué no usarla? Si es una posibilidad que se pretende implementar para lograr echar luz sobre un procedimiento que permanece trabado, esperando que los acusados sean traídos a nuestro país, cosa que no va a ocurrir. ¿Por qué no permitir, entonces, que se logre este encuentro físico entre autoridades argentinas con los imputados, que de otra manera no se produciría?

Me parece que impedir u obstaculizar esto basándonos en especulaciones fortuitas de que no se va a lograr o de que no se va a aportar nada al proceso, es un acto absolutamente imprudente y egoísta que las familias de las víctimas, que aletargadamente esperan vislumbrar alguna esperanza, no se merecen.

Tenemos la oportunidad desde este CONGRESO de dar una herramienta a la Justicia para que se avance de una vez la causa, ¿por qué no hacerlo? Por otra parte, a lo que se va a arribar no es a una sentencia ni mucho menos. Son recomendaciones no vinculantes que los jueces argentinos verán si las tienen en cuenta o no. De modo que no tenemos nada que perder y no se puede estar hablando de un PUNTO FINAL, ni de resultados falaces y sobredimensionados. Eso no hace más que crear zozobra e incertidumbre en nuestra sociedad, porque eso no va a suceder.

Si el objetivo del MEMORANDUM no brinda resultado, si no se logra encontrar la verdad, la Justicia y que los responsables puedan ser condenados, la causa judicial argentina no sufrirá ninguna alteración y seguirá como está.

Hemos sido convocados, señores diputados, para ejercer una de las facultades que le son propias al CONGRESO, siguiendo el cauce constitucional, que es aprobar o desechar este ACUERDO, de modo que nada se llevará adelante si no se lo ratifica. Obremos con seriedad, con responsabilidad y con

compromiso y permitámosles a quienes pacientemente esperan justicia desde hace años que puedan aliviar su pena y conocer la verdad de los hechos ocurridos en aquel fatídico día 18 de JULIO de 1994.

Por eso, señor presidente, voy a acompañar esta iniciativa, más allá de su origen político.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA VIDELA

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Quiero adelantar mi voto negativo al Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y la República Islámica de Irán, debatido en esta 2ª sesión extraordinaria del día 27 de febrero de 2013.

Sin lugar a dudas, el ataque terrorista a la sede de la AMIA es uno de los más aberrantes delitos que ha vivido nuestro país, donde perdieron la vida 85 personas.

Se podrán esgrimir diferentes argumentos: que este proyecto atenta contra la división de poderes, principio consagrado en nuestra Constitución y que conlleva a que este acuerdo sea totalmente inconstitucional.

Considero que lo más grave es que este Memorándum es rechazado por más del 80% de la población Argentina. ¿Por qué seguir insistiendo?, ¿por qué continuar con este avasallamiento sin detenerse un solo instante a pensar en el dolor de los familiares de las víctimas que claman por justicia?

Hay una enorme cantidad de interrogantes sin respuesta.

Este acuerdo con el gobierno iraní ha llevado nuevamente al descreimiento total de la sociedad argentina, sencillamente porque todo indica que este crimen de lesa humanidad caerá en la impunidad y ojalá que jamás caiga en el olvido.

¿Puede este acto terrorista quedar impune? ¿Dónde quedan los derechos humanos de los cuales este gobierno se ha arrogado ser un ferviente defensor?

Es nuestro deber indelegable seguir luchando por la justicia de las víctimas de este acto terrorista, pero sin ceder la jurisdicción argentina, respetando la plena división de poderes, respetando la decisión de la DAIA y de la AMIA, quienes han solicitado expresamente la no aprobación de este Memorándum del Entendimiento.

Rechazo totalmente este proyecto de ley atento que lo considero INCONSTITUCIONAL y al único camino al que nos conducirá será al de la IMPUNIDAD.-

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO VILARIÑO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Estamos aquí discutiendo un Memorando de Entendimiento con Irán que nos permitirá buscar alternativas para llegar a la memoria, verdad y justicia por el ataque terrorista perpetrado contra nuestro país en 1994. Por el ataque contra la AMIA, la Argentina reclama desde el 2006 la extradición de ocho iraníes, entre ellos el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; el ex presidente Alí Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayati, todos con orden de captura internacional, sin conseguir su extradición.

Por lo tanto, este memorando que hoy tratamos establece que el juez y el fiscal argentinos de la causa, Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman, respectivamente, viajen a Teherán para interrogar a los sospechosos, y prevé también la conformación de la Comisión de la Verdad, integrada por juristas reconocidos, para cooperar con la investigación. Hasta ahora, podríamos seguir acumulando otras

miles de fojas, pero si no se cumplen las declaraciones indagatorias no se registrará ningún avance significativo en esta causa. Por ello es que creo que tenemos que intentarlo, aunque muchos sean escépticos al respecto y otros malintencionados. Sería muy fácil para este gobierno dejar todo como está y esperar que nada ocurra o que se haga cargo la Justicia. Pero desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha, este gobierno, liderado por Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández desde 2007, ha demostrado que no le escapa a los caminos difíciles aunque tengamos que escuchar de algunos políticos los agravios más infames como que somos “traidores a la patria” o lo que se dijo ayer en el plenario de comisiones: “Si Irán había pedido firmar el memorando el día del Holocausto”. Estas descalificaciones no sólo nos duelen sino que también no sirven para nada. Hasta ahora no he escuchado una sola propuesta de la oposición mientras desde el oficialismo buscamos dar respuestas a los argentinos, todos, y que al fin se haga justicia.

Además, mucho se ha dicho que el gobierno busca acordar con Irán por cuestiones comerciales. No sólo esa afirmación es ofensiva sino que es mentira: el gobierno nacional no tendrá ningún acuerdo con ese país en cuestiones comerciales.

Y también es falso que esto tenga que ver con cuestiones nucleares. Son chicanas que no ayudan a un discusión colectiva seria y entorpecen el entendimiento en la opinión pública.

Sabemos que Irán no es un país digno de imitar, pero se negocia con el adversario no con el aliado. Hace más de 30 años que intentamos negociar con Gran Bretaña por la cuestión Malvinas. ¿A alguno se le ocurre decir que no se puede negociar con un país que tiene ocupado parte de nuestro territorio? Claro que no. Volviendo al espíritu de este acuerdo quiero recalcar algo que está muy claro en el memorando: no puede sustituir ni alterar la actuación judicial y es una herramienta para avanzar en la búsqueda de justicia en la investigación del atentado contra la AMIA. Terminemos con las chicanas. Este memorando no es un cambio en nuestra posición respecto de los requerimientos de Irán en años anteriores y para alcanzar el memorando el gobierno iraní aceptó que funcionarios de su gobierno pueden ser responsables y que la Justicia argentina los interroga.

Señor presidente: creo firmemente que éste es un paso importante en la defensa de los intereses de la Argentina y tenemos que recordar que hay que buscar justicia y no ajusticiamiento; verdad y no venganza. Memoria, verdad y justicia. Desde el 25 de mayo de 2003 venimos buscando conseguir justicia en causas que nos han marcado a los argentinos y que todos esperamos resolver, como es esta de la AMIA o las megacausas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Por todo lo dicho anteriormente, desde esta humilde banca, representando a Salta, voy a apoyar esta iniciativa porque estoy convencido de que esto abre una brecha y puede ser un importante avance en un expediente que estaba totalmente paralizado, que va a permitir la presencia del juez y del fiscal con la mayor parte de los acusados. Por supuesto que no puede asegurarse el resultado final pero constituye un avance en relación con el estancamiento que tenía la causa.

Señor presidente: dejando todos los agravios que he escuchado y leído en los últimos tiempos quiero dejar muy en claro mi postura. Apoyo estas iniciativas. Es muy fácil quedarse mirando cómo nada pasa en una causa como ésta. Por lo menos, nosotros, desde el oficialismo, intentamos dar más herramientas al juez Rodolfo Canicoba Corral y al fiscal Alberto Nisman para que, al fin, se logre justicia.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA VILLATA

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

En este proyecto existe absoluta ambigüedad, vacíos y lagunas. Las reglas del procedimiento se dejan libradas a su posterior determinación y éste no es un tema menor, sino tal vez el más importante para darle operatividad, alcances y roles a los Estados firmantes.

- 1.- La creación de una comisión afecta directamente los principios de Juez natural y de territorialidad y por sobre todas las cosas la soberanía nacional. Este memorándum es un cachetazo a la justicia. Es dejarla de lado y poner en manos de una “Comisión” –incierta y por ahora oscura- el legítimo derecho

de los damnificados y de todos los argentinos de saber la verdad.

- 2.- No se establece cómo van a actuar los miembros de la comisión y cuáles serán las reglas de procedimiento que van a utilizar, como arriba indicáramos.
- 3.- La comisión, según el punto 4, debe emitir un informe con recomendaciones para que las partes las tengan en cuenta para sus acciones futuras. Esto constituye un verdadero despropósito y pérdida de tiempo, instituyendo una chicana para paralizar, dilatar y distraer el proceso judicial.
- 4.- Según el punto 5, Irán tendrá “derecho” a dar “explicaciones” sobre el atentado. Es decir, se trata de un derecho y no de una obligación. Si se trata de un Memorando de Entendimiento y colaboración en busca de la verdad, ¿no hubiera sido mejor conminar a las partes a que aporten todo lo que conocen y entreguen a los responsables a la justicia Argentina? En segundo lugar, ¿hay “explicaciones” para un atentado de este tipo? Desde nuestro punto de vista, es muy desafortunada la frase o esconde otras intenciones que no son –justamente– la búsqueda de la verdad.
- 5.- Otro punto ambiguo, es la frase del punto por la cual se establece que el convenio “...entrará en vigencia después del intercambio de la última nota verbal informando que los requisitos internos para su aprobación o ratificación han sido cumplimentados...”. Esto constituye otra increíble informalidad, que demuestra la poca seriedad en su redacción y la liviandad de su tratamiento, sin que se hayan tenido en cuenta la gravedad de sus consecuencias.
- 6. El memorándum no tiene ningún plazo de cumplimiento, requisito esencial en cualquier convenio bilateral con un objeto a cumplir. Este elemento lo hace entonces de cumplimiento sine día. No sólo no le establece plazo a “la comisión” para desarrollar su análisis de la información recibida de las partes, sino que no establece término alguno para establecer sus reglas de procedimiento como indica el artículo 2; tampoco se indica plazo a las partes suscriptoras del memorándum para que designen su comisionados, ni plazo para acordar al jurista internacional, etc. La generalización de todas las cláusulas genera un tufillo de por lo menos una gran improvisación.
- 8. Otro punto absolutamente oscuro –en el artículo 4- es la frase “ambas partes tendrán en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras”; es tan amplio y ambiguo el concepto que incluso podría interpretarse que si la comisión aconseja archivar la causa judicial, el imperativo “tendrán” no daría demasiadas opciones a la Argentina. El peligro de las palabras utilizadas en este memorándum es gravísimo.
- 9. Analizando el punto 5, que textualmente indica: “La comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja”, nos llama poderosamente la intención de que este sea el único procedimiento que queda establecido de antemano, de forma precisa y concreta, en un mar de ambigüedades. ¿Cuál es la verdadera intención de este punto? Quizás la verdadera intención sea que Interpol ANULE DE OFICIO las notificaciones rojas a los iraníes, por considerar que las partes han definido la situación de esas personas. El canciller pidió no fantasear con cláusulas secretas ni intereses espurios: en un tema tan sensible, lo escrito tiene trascendental importancia; las acciones emanadas de la interpretación de una ley pueden derivar también de la OMISIÓN de normas claras; no puede achacarnos el funcionario ahora su propia torpeza.